

BOLIVIA
2021

diagnóstico
común de
país



NACIONES UNIDAS
BOLIVIA





NACIONES UNIDAS
BOLIVIA



Diagnóstico Común de País

BOLIVIA 2021



Te invitamos a ver la versión
digital del Diagnóstico
Común de País escaneando
el código QR o haciendo clic
en: www.unccabolivia.org.bo

Coordinación General

Susana Sottoli (Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia).

Coordinación Técnica

Ernesto Pérez de Rada

Equipo Responsable de la Oficina de la Coordinadora Residente

Ignacio Trabadela, Francisco Canedo, Andrés Chivé, Karina Alarcón y Saray Lobato

Equipo Interagencial de Análisis

Carlos Gutierrez y Santiago Farjat (UNICEF); Nidya Pesantez y Mónica Novillo (ONU Mujeres); Rinko Kinoshita y Carla Camacho (UNFPA); Fernando Aramayo y Xavier Puig (PNUD); Jordi Sánchez (ONU Habitat); Antonio Menéndez (Misión OACNUDH).

Otros colaboradores y revisores

Martín Lettieri (ACNUR); Rodrigo Roubach, Patricia Amatller, Sergio Laguna, Óscar Mendoza, Rosse Noda, Patricia Molina Moscoso y Stanislaw Czaplicki (FAO); Rubén Vargas (OCR/CADRI); Noelia Gómez (OIM); Hernán Coronado y Chandni Lanfranchi (OIT); Diego Álvarez (ONUDI); Sergio Blanco, Lisset Revollo (ONU Hábitat); Cristina Formella (ONU Mujeres); Patricia Bracamonte (ONU SIDA); Alfonso Tenorio, Hugo Rivera y Percy Halkyer (OPS/OMS); Alejandro López Chicheri, Sergio Torres y Luis Rico (PMA); Dennis Funes, Grisel Ávila, Blanca Mendoza, Rocío Chaín y Gabriela Carrasco (PNUD); Cristian Rojas Cifuentes (UNEP); Freddy Huaraz y Amed Romero (UNFPA); Troels Vester, Sergio Condemayta y Marcia Pacheco (UNODC); Diego Pemintel y Fabiola Ríos Pool (UNICEF); Cyra Daroca (UNV).

Revisores de la Sede

Oficina de Coordinación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (DCO por sus siglas en inglés) y Plataforma Colaborativa Regional: Grupo de Apoyo entre Pares (PSG por sus siglas en inglés).

Edición

Víctor Orduna

Diseño

Martín Sánchez

Diseño Web

Hasan López

Fotografías

ONU Bolivia

Asesoría en Comunicación

Patricia Cusicanqui y Morelia Eróstegui

Agencias, Fondos y Programas participantes

ACNUR, FAO, OACNUDH, OIM, OIT, ONUDI, ONU HÁBITAT, ONU MUJERES, ONUSIDA, OPS/OMS, PMA, PNUD, PNUMA, UNESCO, UNFPA, UNICEF, UNODC, UNV.

Junio, 2022

Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia
Edif. Metrobol II, Av. Sánchez Bustamante y calle 14, Calacoto.
La Paz – Bolivia
www.bolivia.un.org

CONTENIDO

Lista de siglas y acrónimos vii

ÍNDICE DE FIGURAS, CUADROS Y MAPAS

| | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1.1. | Diagnóstico Común de País: Aproximación multidimensional | 4 |
| Figura 1.2. | Etapas para la construcción del Diagnóstico Común de País (DCP) | 6 |
| Cuadro 2.1. | Relación entre el PDES, la Agenda Patriótica y los ODS | 9 |
| Figura 2.2. | Desempeño nacional en el logro de los ODS | 10 |
| Figura 2.2. | Desempeño nacional en el logro de los ODS | 11 |
| Figura 3.1. | Población del área urbana y rural por grupo quinquenal de edad y sexo, 2011 y 2020 (%) | 14 |
| Figura 3.2. | Crecimiento del PIB (%) e incidencia de pobreza moderada y extrema (% de personas) por área geográfica, 2016-2020 | 15 |
| Figura 3.3. | Curva de Incidencia del Crecimiento (CIC) en el ingreso per cápita, Bolivia 2015-2020 | 16 |
| Figura 3.4. | Prevalencia de la desnutrición crónica (%) en niños y niñas menores de 5 años, 2008 y 2016 | 18 |
| Figura 3.5. | Estratos de ingreso a nivel nacional y variación por área geográfica, 2019-2020 | 19 |
| Figura 3.6. | Incidencia de pobreza monetaria (%) en subgrupos de la población, 2020 | 20 |
| Figura 3.7. | Tasa de asistencia escolar (%) en la población de 4 a 17 años, 2015-2019 | 21 |
| Figura 3.8. | Tasa de mortalidad infantil, 2003-2020 | 24 |
| Figura 3.9. | Cobertura de parto institucional (%), 2000-2020 | 25 |
| Figura 3.10. | Población con acceso a fuente mejorada de agua y saneamiento mejorado, según área, 2019-2020 | 27 |
| Figura 3.11. | Casos ingresados de feminicidio, 2013-2021 | 29 |
| Figura 3.12. | Tasas de crecimiento del PIB real por año | 32 |
| Figura 3.13. | Área urbana: Tasa global de participación laboral trimestral y tasa de subocupación, 1T/2019-4T/2021 | 35 |
| Figura 3.14. | Área urbana: Tasa de desocupación trimestral por género, 1T/2019-4T/2021 | 35 |
| Figura 3.15. | Área urbana: Ingreso promedio en la ocupación principal de la población de 14 años y más por género, niveles educativos y sector de ocupación (Bs.), 1T/2020 - 1T/2021 | 37 |
| Mapa 3.1. | Variabilidad climática en Bolivia | 42 |
| Figura 3.16. | Evolución del consumo total energético y fuente de energía en Bolivia (expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo, kBEP) | 45 |
| Cuadro 3.1. | Áreas protegidas en Bolivia | 47 |
| Figura 3.17. | Evolución de la deforestación (en ha) | 47 |
| Figura 3.18. | Superficie de áreas verdes por habitante en ciudades | 48 |
| Cuadro 3.2. | Incremento de residuos sólidos | 49 |
| Figura 3.19. | Niveles de confianza institucional (en porcentaje según institución) | 51 |
| Figura 3.20. | ¿Se debe sancionar a los culpables de la crisis del 2019 o dejar la crisis en el pasado? (Encuesta de opinión, en % según afinidad política) | 52 |

LISTA DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| AC | Análisis de Conflictividad |
| ACNUDH | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos |
| ACNUR | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |
| AFP | Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas |
| ALP | Asamblea Legislativa Plurinacional |
| AOD | Ayuda Oficial al Desarrollo |
| ARU | Fundación Aru |
| BCB | Banco Central de Bolivia |
| BID | Banco Interamericano de Desarrollo |
| BM | Banco Mundial |
| CAF | Banco de Desarrollo de América Latina |
| CDA | Centros de Acogida |
| CEASS | Central de Abastecimiento de Suministro de Salud |
| CEL | Condición Étnica Lingüística |
| CEPAL | Comisión Económica para América Latina y el Caribe |
| CEPB | Confederación de Empresarios Privados de Bolivia |
| CIC | Curva de Incidencia del Crecimiento |
| CIPD | Conferencia Internacional de Población y Desarrollo |
| COVID-19 | Enfermedad por Coronavirus de 2019 |
| CPE | Constitución Política del Estado |
| DCP | Diagnóstico Común de País |
| EBDH | Enfoque Basado en Derechos Humanos |
| ECE | Encuesta Continua de Empleo |
| EH | Encuesta de Hogares |
| EMINPRO | Empleo, Ingresos y Producción |
| EPES | Entorno Propicio para Empresas Sostenibles |
| FAO | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura |
| FES | Fundación Friedrich Ebert Stiftung |
| FGE | Fiscalía General del Estado |
| FIDA | Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola |
| FMI | Fondo Monetario Internacional |
| FONPLATA | Fonplata Banco de Desarrollo |
| GAD | Gobierno Autónomo Departamental |
| GAI | Gobierno Autónomo Indígena |
| GAM | Gobierno Autónomo Municipal |
| IDH | Informe de Desarrollo Humano |
| IED | Inversión Extranjera Directa |
| INE | Instituto Nacional de Estadística |
| INESAD | Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo |
| IPCC | Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático |



INTRODUCCIÓN

1

Este Diagnóstico Común de País (DCP) es un componente integral del proceso de planificación del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MCNUDS) 2023-2027.

El DCP aspira a proporcionar un análisis del panorama social, económico, político institucional y medioambiental del país, así como de las dinámicas regionales y subregionales relevantes para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El DCP se nutre de las prioridades nacionales establecidas en la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025¹, la Agenda 2030 y sus ODS. Desde una perspectiva de derechos humanos y en conformidad con el principio de “no dejar a nadie atrás”², el análisis examina las causas estructurales y subyacentes de los obstáculos al desarrollo inclusivo y sostenible en el país, haciendo énfasis en la identificación de brechas de desigualdad y grupos en mayor situación de vulnerabilidad, en el marco del llamado triple nexo entre acción humanitaria, desarrollo y paz³.

La evidencia del documento se extrae de análisis, investigaciones y datos tanto oficiales, como los generados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), agrupaciones de voluntariado, socios del desarrollo y del equipo de las Naciones Unidas en Bolivia y a nivel regional. El DCP identifica oportunidades para acelerar el camino hacia el desarrollo sostenible e inclusivo y la consecución de los ODS en el país. Se presenta como un documento dinámico que irá actualizándose de acuerdo a la evolución del contexto nacional.

A. El enfoque central: Una mirada integral de futuro

Los eventos que ha vivido Bolivia en los últimos años delinean una coyuntura extraordinaria en la cual el país ha atravesado por una crisis múltiple signada por la emergencia política y social, la pandemia de COVID-19, y sus impactos socioeconómicos. Este escenario de alta complejidad requiere encarar el análisis del estado de situación del desarrollo en Bolivia bajo una perspectiva integral

• • • • •

- 1 La Agenda Patriótica 2025 es el documento de visión de largo plazo elaborado por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en 2012, cuyos principios se basan en el horizonte civilizatorio del Vivir Bien. El concepto de Vivir Bien significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades, en equidad y solidaridad y eliminando las desigualdades y los mecanismos de dominación. Se trata de una noción que plantea vivir bien entre las personas, con lo que nos rodea y consigo mismo.
- 2 UNSDG, 2019.
- 3 El enfoque del triple nexo entre acción humanitaria, desarrollo y paz parte del reconocimiento de que las crisis humanitarias pueden estar causadas o verse afectadas por acciones políticas que fomentan la desigualdad e incrementan la vulnerabilidad y el conflicto. Por tanto, un enfoque integral que tenga en cuenta el vínculo entre lo humanitario, el desarrollo y la paz puede ser una oportunidad para abordar las causas más profundas. De esta manera, la reducción de la vulnerabilidad y el trabajo hacia la paz se convierten en componentes fundamentales para un desarrollo sostenible (Roberts, 2020).

y prospectiva. Por ello, el análisis considera tanto las urgencias del corto plazo derivadas de la recuperación económica y social, como una reflexión a más largo plazo, que incluye una visión de futuro para el desarrollo sostenible e inclusivo.

En este contexto, el DCP plantea una ruta crítica de análisis en tres fases: i) diagnosticar los desafíos del presente desde una perspectiva integral, que considere la interrelación con el PDES 2021-2025; ii) identificar la afectación y factores que influyen sobre el ejercicio de derechos de los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad y excluidos del proceso de desarrollo nacional, de acuerdo al principio de “no dejar a nadie atrás”; y, iii) plantear las áreas temáticas más importantes con una mirada de futuro y abordando las prioridades emergentes de manera prospectiva.

B. Marco normativo

El marco conceptual de este análisis conjuga el horizonte normativo para el desarrollo en Bolivia, traducido en el concepto del Vivir Bien y operacionalizado en la Agenda Patriótica 2025⁴, en el PDES 2021-2025, así como en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual se sustenta en las normas internacionales de derechos humanos y fue refrendada por los Estados Miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2015⁵.

Los principios conceptuales y analíticos generales que se incluyen en el DCP son los siguientes⁶:

- El Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH)⁷.
- El Marco de Acción Compartido del Sistema de las Naciones Unidas para “no dejar a nadie atrás”, y la Guía operativa para los equipos de las Naciones Unidas en el país sobre este principio⁸.
- El Plan de Acción para el sistema del Equipo de las Naciones Unidas (ONU

• • • • •

4 También denominada Agenda Patriótica del Bicentenario.

5 Además, se incluye, como referencia, diferentes conferencias y acuerdos internacionales como la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD), el Consenso de Montevideo para la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer de Beijing y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Adicionalmente se toma en consideración las Normas Internacionales del Trabajo. En Bolivia están en vigor 47 convenios de la OIT que cubren los temas de libertad sindical, negociación colectiva y relaciones de trabajo; trabajo forzoso; eliminación del trabajo infantil y protección de los niños y los menores; igualdad de oportunidades y de trato; administración e inspección del trabajo; política y promoción del empleo; salarios; tiempo de trabajo; seguridad y salud en el trabajo; seguridad social; protección de la maternidad; política social; pueblos indígenas y tribales; y los/as trabajadores/as domésticos/as. Al respecto, véase la base de datos: Ratificación de Convenios de la OIT: Ratificación por Bolivia (Estado Plurinacional de) (ilo.org)

6 Para una referencia detallada de los principios conceptuales y analíticos, ver Anexo A.

7 Disponible en: <https://hrbportal.org/the-human-rights-based-approach-to-development-cooperation-towards-a-common-understanding-among-un-agencies/>

8 UNSDG, 2019.

SWAP)⁹ sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.

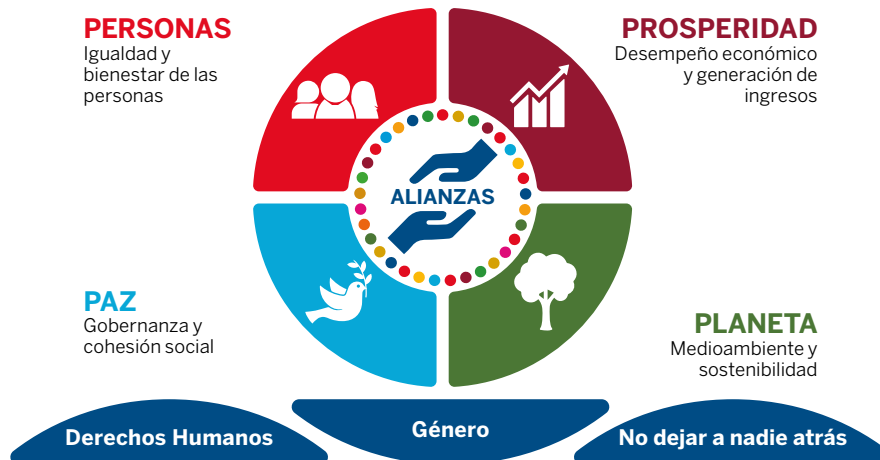
- Los principios establecidos en el documento La aspiración más elevada: Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos, de António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas¹⁰.
- Análisis de resiliencia/riesgo multidimensional.
- Análisis de Conflictividad (AC) y análisis de economía política.

C. El enfoque multidimensional basado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El DCP se basa en cuatro de las cinco dimensiones de la Agenda 2030¹¹:

- Personas: Se refiere a poner fin a la pobreza y el hambre en todas sus formas y asegurar la dignidad e igualdad de todas las personas.
- Planeta: Se centra en proteger los recursos naturales del planeta y combatir el cambio climático para asegurar un ambiente digno para las futuras generaciones.
- Prosperidad: Consiste en asegurar que todos puedan disfrutar una vida próspera en armonía con la naturaleza.
- Paz: Tiene como propósito fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

FIGURA 1.1. Diagnóstico Común de País: Aproximación multidimensional



Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL, 2018.

9 UN Women, 2012.

10 Naciones Unidas, 2020.

11 La Agenda 2030 está organizada en torno a cinco esferas que se denominan "Las 5 P del Desarrollo": Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas. Para el caso del DCP de Bolivia se adoptan las primeras cuatro, en tanto que la quinta esfera ("Alianzas") se asume como un mecanismo instrumental abordado de manera transversal a lo largo del documento (para más información, véase: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/43963>).

Estas cuatro dimensiones sirven de ejes ordenadores para abordar los ODS (ver figura 1.1). Las cuatro dimensiones del desarrollo están interrelacionadas pues los logros y las limitaciones en una de ellas tendrán impactos evidentes sobre las demás. Por ejemplo, las condiciones económicas pueden afectar el cuidado del medio ambiente, o las condiciones institucionales pueden impedir o favorecer el ejercicio de los derechos humanos.

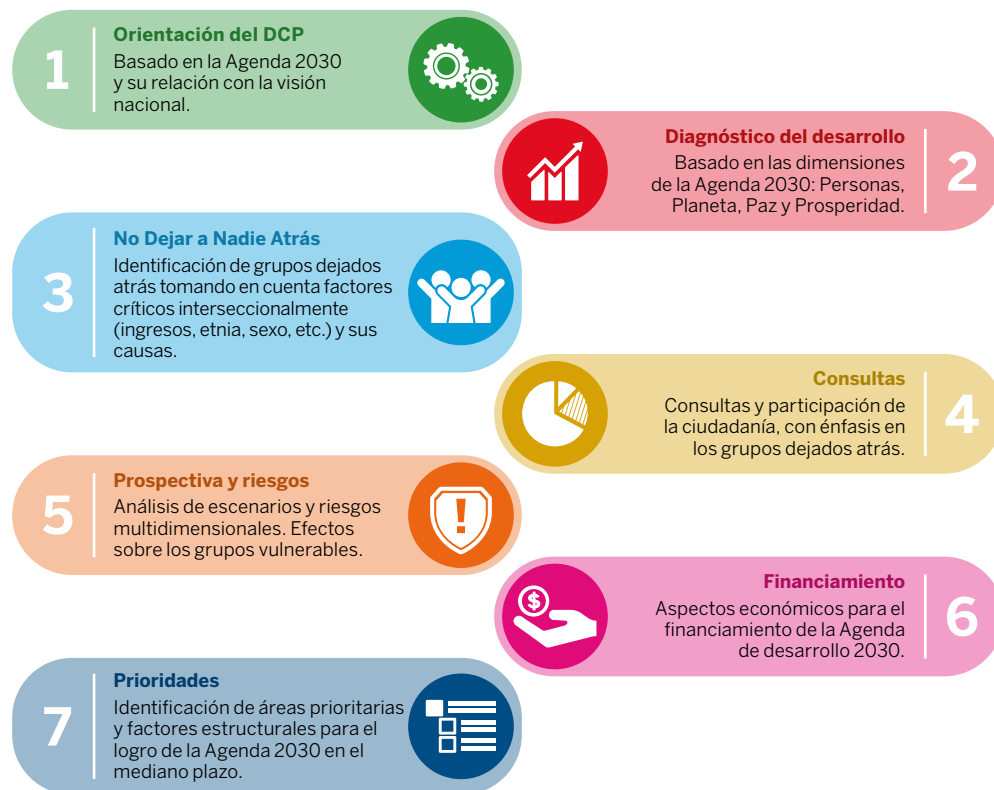
El análisis multidimensional implica utilizar datos desglosados no solo por ingresos, ubicación geográfica, sexo o edad, sino también por otros motivos que generan brechas en el ejercicio de derechos, tales como la condición de discapacidad, la autoidentificación étnica, el lugar de residencia, la condición migratoria, los aspectos demográficos y otros factores sistémicos que tienden a la exclusión. El análisis también profundiza en la forma en la que estas privaciones se cruzan creando situaciones de multiprivaciones, exacerbando así las condiciones de vulnerabilidad. Esta interseccionalidad permite, a su vez, la identificación de ciertos grupos y poblaciones en los cuales las condiciones de vulnerabilidad se hacen más evidentes. Para reflejar la multidimensionalidad y el entrecruzamiento de condiciones de exclusión, el DCP se basa en evidencia estadística y cualitativa sobre los indicadores seleccionados dentro de los ODS, así como otros relevantes para el análisis, utilizando estadísticas nacionales oficiales, macrodatos, documentos e información sectoriales, encuestas nacionales, evaluaciones y encuestas específicas, del mismo modo que cualquier otra información relevante producida por el Sistema de Naciones Unidas (SNU), la sociedad civil, el sector académico, etc.

D. Etapas en la construcción del Diagnóstico Común de País (DCP)

Las etapas de construcción del DCP implicaron un trabajo que, por una parte, se apoya en un análisis deductivo en el cual se abordan temas generales relativos al desarrollo del país orientados a la identificación de las áreas prioritarias de atención, grupos vulnerables, en riesgo y dejados atrás, así como las causas subyacentes de su situación. Esta aproximación fue complementada por la captura de las voces ciudadanas en los procesos de consulta previstos para el desarrollo de este ejercicio. En conjunto, esta combinación de fuentes, de carácter tanto cuantitativo como cualitativo, logró identificar factores estructurales y de acción prioritaria como base para señalar oportunidades del desarrollo sustentable e inclusivo en Bolivia.

Las etapas identificadas para la construcción del DCP se presentan de forma esquemática en la figura 1.2.

FIGURA 1.2. Etapas para la construcción del Diagnóstico Común de País (DCP)



Fuente: Elaboración propia.



**LA VISIÓN NACIONAL DE
DESARROLLO Y SU RELACIÓN
CON LA AGENDA 2030**

2

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 del Estado Plurinacional de Bolivia es el marco de planificación del Estado y se basa en la Agenda Patriótica del Bicentenario, presentada en 2012¹². El título del PDES –“Reconstruyendo la Economía para Vivir Bien: Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”– refleja la importancia de la recuperación económica como centro de las prioridades, conjugada con aspectos sociales, de buen gobierno y medioambientales. El plan tiene 10 ejes de desarrollo y 44 metas:

1. Reconstruyendo la Economía, Retomando la Estabilidad Macroeconómica y Social;
2. Industrialización con Sustitución de Importaciones;
3. Seguridad Alimentaria con Soberanía, Promoción de Exportaciones con Valor Agregado y Desarrollo Turístico;
4. Profundización del Proceso de Industrialización de los Recursos Naturales;
5. Educación, Investigación, Ciencia y Tecnología para el Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades y Potencialidades Productivas;
6. Salud y Deportes para Proteger la Vida con Cuidado Integral en Tiempos de Pandemia;
7. Reforma Judicial, Gestión Pública Digitalizada y Transparente; Seguridad y Defensa Integral con Soberanía Nacional;
8. Medio Ambiente Sustentable y Equilibrado en Armonía con la Madre Tierra;
9. Integración y Relaciones Internacionales con Soberanía;
10. Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, para la Revolución Democrática Cultural.

Esta visión comparte, en gran medida, el abordaje integral de la Agenda 2030, por lo cual sus ejes de desarrollo y metas pueden alinearse con los ODS, como se detalla en el cuadro 2.1.

CUADRO 2.1. Relación entre el PDES, la Agenda Patriótica y los ODS

| Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 | Agenda Patriótica 2025 | Objetivos de Desarrollo Sostenible |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EJE 1: RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA, RETOMANDO LA ESTABILIDAD MACROECONÓMICA Y SOCIAL | Pilar 1: Erradicación de la pobreza Pilar 2: Universalización de servicios básicos Pilar 5: Soberanía comunitaria financiera |           |
| EJE 2: INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES | Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación Pilar 7: Soberanía sobre nuestros propios recursos naturales |     |
| EJE 3: SEGURIDAD ALIMENTARIA CON SOBERANÍA, PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES CON VALOR AGREGADO Y DESARROLLO TURÍSTICO | Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación Pilar 8: Soberanía alimentaria |            |
| EJE 4: PROFUNDIZACIÓN DEL PROCESO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | Pilar 7: Soberanía sobre nuestros propios recursos naturales |       |
| EJE 5: EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS | Pilar 3: Salud, educación y deportes Pilar 4: Soberanía científica y tecnológica Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación |           |
| EJE 6: SALUD Y DEPORTES PARA PROTEGER LA VIDA CON CUIDADO INTEGRAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA | Pilar 3: Salud, educación y deportes |        |
| EJE 7: REFORMA JUDICIAL, GESTIÓN PÚBLICA DIGITALIZADA Y TRANSPARENTE; SEGURIDAD Y DEFENSA INTEGRAL CON SOBERANÍA NACIONAL | Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública Pilar 12: Disfrute y felicidad |        |
| EJE 8: MEDIOAMBIENTE SUSTENTABLE Y EQUILIBRADO EN ARMONÍA CON LA MADRE TIERRA | Pilar 9: Soberanía ambiental con desarrollo integral |       |
| EJE 9: INTEGRACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES CON SOBERANÍA | Pilar 10: Integración complementaria Pilar 13: Reencuentro soberano con nuestro mar |     |
| EJE 10: CULTURAS, DESCOLONIZACIÓN Y DESPATRIARCALIZACIÓN PARA LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA CULTURAL | Pilar 1: Erradicación de la pobreza Pilar 12: Disfrute y felicidad |        |

Fuente: Elaboración propia.

El Estado Plurinacional de Bolivia presentó su Primer Informe Voluntario Nacional (IVN)¹³ ante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible el 2021, en el que reafirma su compromiso de avanzar hacia la implementación de la Agenda 2030. Este documento muestra el progreso de los ODS en el país con base en datos oficiales, siempre en el marco de la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2016-2020. Los avances de los ODS analizados en dicho informe señalan un progreso especialmente positivo en referencia a los siguientes ODS: (1) Fin de la pobreza; (2) Hambre cero; (4) Educación de calidad; (5) Igualdad de Género; (9) Industria, innovación e infraestructura; y (11) Ciudades y comunidades sostenibles (figura 2.2). Tal como menciona el informe, aún quedan desafíos por cumplir, considerando los efectos negativos derivados de las múltiples crisis por las que ha atravesado el país en los últimos años¹⁴.

FIGURA 2.2. Desempeño nacional en el logro de los ODS



Fuente: Elaboración propia con base en UDAPE, 2021.

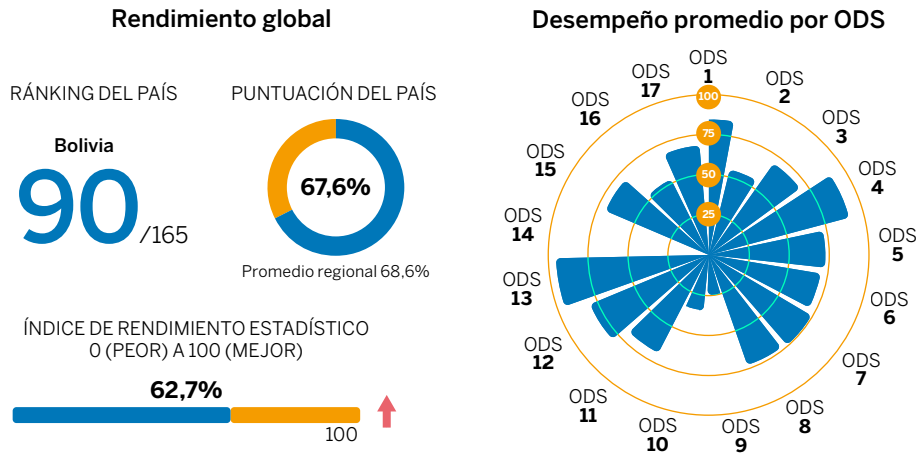
13 UDAPE, 2021.

14 El Informe Voluntario Nacional incluye 14 ODS, dejando fuera los siguientes tres: (12) Producción y consumo responsable; (13) Acción por el clima; y (14) Vida submarina. Se menciona que esto está motivado por lo siguiente: en el caso de los dos primeros, aún se encuentra en proceso de desarrollo la identificación de los indicadores apropiados, la metodología de cálculo y los sistemas de información. En el caso del ODS 14, en general no aplica para el caso boliviano por constituirse en un país mediterráneo.

A nivel subnacional, desde 2021, los cuatro municipios más poblados del país –Santa Cruz, El Alto, La Paz y Cochabamba– están desarrollando sus Reportes Voluntarios Locales de los ODS, usando el nuevo Marco Global de Monitoreo Urbano de la Comisión Estadística de Naciones Unidas¹⁵.

Por su parte, el Informe de Desarrollo Sostenible 2021: la década de acción para los ODS¹⁶ analiza el desempeño de cada país con respecto a los 17 ODS. En este, el Estado Plurinacional de Bolivia ocupa el puesto 90 de los 165 países estudiados, presentando desempeños favorables en el ODS 1: reducción de la pobreza; ODS 4: Educación de calidad; y ODS 13: Acción por el clima. El progreso del país, con base al análisis de este Informe, se puede observar en la figura 2.2¹⁷.

FIGURA 2.2. Desempeño nacional en el logro de los ODS



Fuente: Sachs et al., 2021.

• • • • •

15 ECOSOC, 2022.
 16 Sachs et al., 2021.
 17 El Informe Mundial de Desarrollo Sostenible y el Informe Voluntario Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia utilizan fuentes de información que no siempre son coincidentes. Mientras este último acude a información oficial del Gobierno, el primero combina alguna de esta información con indicadores desprendidos de otras fuentes internacionales.



ANÁLISIS DE LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO

3



A. PERSONAS: Igualdad y bienestar de las personas



La reversión de las mejoras en las condiciones de vida de la población que habían sido alcanzadas en la década pasada es un tema urgente de la agenda de derechos de las personas en el país. Los retrocesos en varios indicadores dan cuenta no solo de los impactos perversos de la pandemia sobre el bienestar de las personas, sino también de su efecto diferenciado en la población, observándose un mayor impacto negativo en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad. El aumento de la pobreza moderada y extrema, las restricciones en el acceso a la educación virtual de calidad, los retrocesos en el acceso a servicios esenciales de salud y el incremento en los casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes exacerbaron las disparidades existentes.

Por su parte, la introducción de la vacuna anti COVID-19 marcó un hito en la respuesta nacional a la pandemia. Además, el Estado boliviano implementó medidas de protección de los medios de vida de la población a través de bonos monetarios a los hogares en situación de mayor vulnerabilidad, de la devolución de aportes de jubilación, así como del incremento en las rentas de jubilación a la población adulta mayor. Asimismo, se implementaron políticas de reactivación productiva (créditos blandos, fondos de garantía) y de impulso de la demanda agregada, mediante la aceleración en la ejecución de la inversión pública.

Migración interna, urbanización y bono demográfico¹⁸

Para 2022 se estima que la población en el país alcanzará los 12 millones de personas y se proyecta que el año 2050 llegue a 16 millones¹⁹. Actualmente, Bolivia se encuentra en la etapa inicial del bono demográfico²⁰, que se estima durará hasta finales de 2050. La implementación de políticas educativas, de salud, de protección, económico-productivas y de empleo orientadas a este grupo poblacional económicamente activo tendrá un efecto multiplicador y repercutirá en mejoras en el bienestar para la población en general.

• • • • •

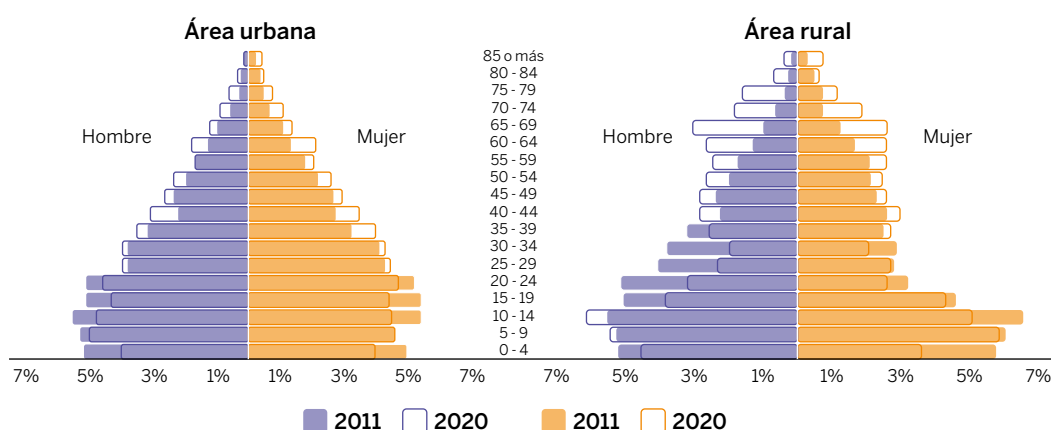
18 El "bono demográfico" hace referencia a una fase en la que el balance entre las edades de una determinada población genera una oportunidad para el desarrollo. Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de la primera en relación con la segunda (CEPAL, 2013).

19 CELADE-CEPAL y Naciones Unidas-Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2019.

20 Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2019.

En las últimas décadas, el país ha experimentado un acelerado proceso de urbanización. Para 2020, se estima que el 70% de la población vivía en áreas urbanas²¹, producto de procesos migratorios internos, particularmente de la población joven (el 46,9% de los migrantes tiene entre 15 y 29 años²²) que se traslada de áreas rurales a áreas urbanas y periurbanas del país en busca de mejores oportunidades de educación o empleo. Se estima que en 2050 la población urbana supere el 80%; es decir, que las ciudades bolivianas verán aumentar su población en 4,4 millones²³. Los desplazamientos internos del país, sumados a diferencias en las tasas de fecundidad, han ocasionado que la estructura poblacional de áreas urbanas y rurales sea diferente.

FIGURA 3.1. Población del área urbana y rural por grupo quinquenal de edad y sexo, 2011 y 2020 (%)



Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

La figura 3.1 muestra al área rural con una notoria reducción de la población joven por los procesos migratorios internos y una mayor tasa de dependencia demográfica²⁴ (101,2²⁵), lo cual refleja la existencia de una población mayoritaria de niñas y niños y adultos mayores.

Estos cambios demográficos urbano-rurales determinan la concentración del acervo demográfico (población de entre 15 y 64 años) en las ciudades, en condiciones diferenciadas. Datos del Censo de 2012 indican que el 44% de los hogares de las

21 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (www.ine.gob.bo).

22 UDAPE, INE, 2018.

23 Datos de ONU Habitat, 2021.

24 La tasa de dependencia demográfica es un indicador de dependencia económica potencial; mide la población en edades "teóricamente" inactivas en relación a la población en edades "teóricamente" activas. Se calcula como el total de población de 0 a 14 años más la población de 65 y más años, dividido por el total de población de 15 a 64 años, multiplicado por 100.

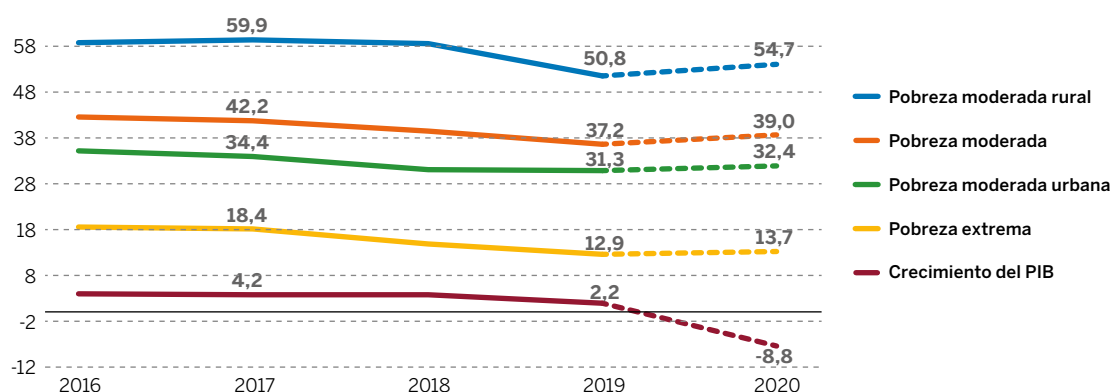
25 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

20 mayores ciudades del país tenían condiciones de vivienda que califican como “tugurios”²⁶ y los datos de la Encuesta de Hogares de 2019 indican que el déficit habitacional cualitativo en zonas urbanas alcanzó el 55%; la inmensa mayoría localizado en las periferias urbanas que reciben los migrantes del campo.

Pobreza e ingresos

La pandemia encontró a Bolivia en un escenario de desaceleración del crecimiento económico y ralentización en la reducción de indicadores de pobreza monetaria (figura 3.2). Como resultado, se observan importantes variaciones en ambos indicadores entre 2019 y 2020. Con una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) de -8,8% en 2020, la pobreza extrema y moderada aumentaron entre 1% y 2%, respectivamente, en dicho año. En términos generales, la pobreza moderada ascendió en 2020 a 39%, lo que equivale aproximadamente a 4,6 millones de personas en situación de pobreza; casi 300 mil personas más que el año anterior²⁷. De este total de personas en situación de pobreza, casi 2,7 millones se encontraba en el área urbana y alrededor de 1,9 millones en el área rural²⁸. Sin embargo, los incrementos más significativos se registraron en el área rural con un aumento de casi un 4%. Por último, del total de personas en situación de pobreza registrado en 2020, el 52% eran mujeres²⁹ y 1,6 millones se encontraban en pobreza extrema³⁰.

FIGURA 3.2. Crecimiento del PIB (%) e incidencia de pobreza moderada y extrema (% de personas) por área geográfica, 2016-2020

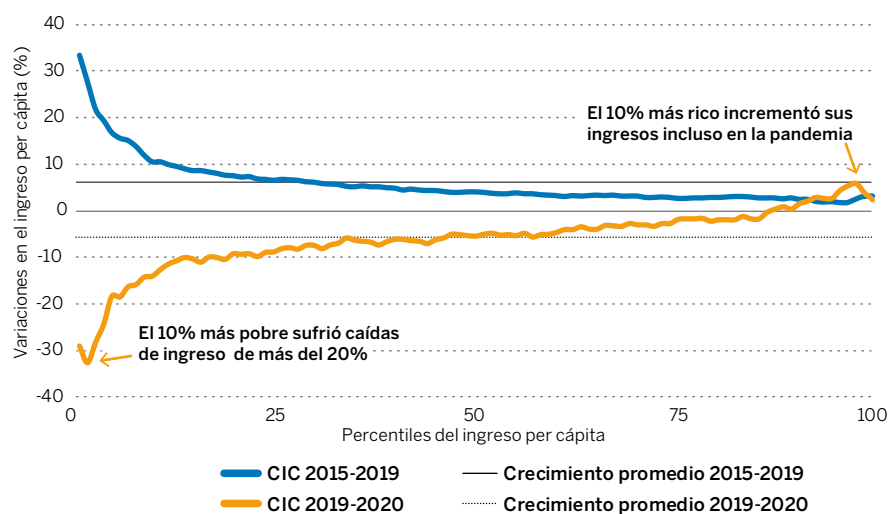


Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2016-2020) para las series de pobreza y para la serie de crecimiento del PIB³¹.

- 26 Se define como “hogares en tugurios” a aquellos cuya vivienda cumple uno o más de los siguientes criterios: materiales de construcción precarios, agua no segura, saneamiento inadecuado o hacinamiento (ONU Habitat Bolivia, 2021).
- 27 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- 28 Ibid.
- 29 Estimación a partir de Encuesta de Hogares (EH-2020).
- 30 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- 31 Los indicadores recalculados de pobreza a partir del 2016 contemplan la Canasta Básica Alimentaria construida con información de la Encuesta de Presupuestos Familiares 2015-2016.

Si bien la pandemia ha afectado a todas las personas, sus efectos han sido muy diferentes según los niveles educativos, el tamaño del hogar, el área de residencia y el sector económico en el que trabajan. El confinamiento afectó sobre todo a los hogares de menores ingresos (figura 3.3).

FIGURA 3.3. Curva de Incidencia del Crecimiento (CIC) en el ingreso per cápita, Bolivia 2015-2020



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2015-2020)³².

Resaltan dos resultados: i) Las tasas negativas de crecimiento económico entre los años 2019 y 2020 muestran que alrededor del 80% de la población sufrió impactos negativos en su ingreso; sin embargo, el impacto más considerable se dio en los hogares más pobres: el 20% más pobre registró reducciones en el ingreso entre -10% y -30%, valor notablemente mayor que el decrecimiento promedio de casi -5% (línea punteada horizontal). Por el contrario, el grupo de mayor ingreso de la población fue no solo el menos afectado, sino que incluso se observan tasas de crecimiento positivas en el ingreso de estos hogares; ii) Estos resultados son mucho más preocupantes cuando se contrastan con el promedio de los cuatro años anteriores a la pandemia. Entre 2015 y 2019 se observan tasas de crecimiento positivas en el ingreso per cápita para todos los percentiles de la población; sin embargo, las mayores ganancias de este periodo estaban concentradas en los percentiles más pobres. Se

VOCES CIUDADANAS)))

El 84% de los jóvenes y adolescentes del país piensa que la situación general del país es regular o mala; sin embargo, un 37% opina que su situación y la de su familia estará mejor dentro de 5 años.

Fuente: U-Report, UNICEF, 2022.

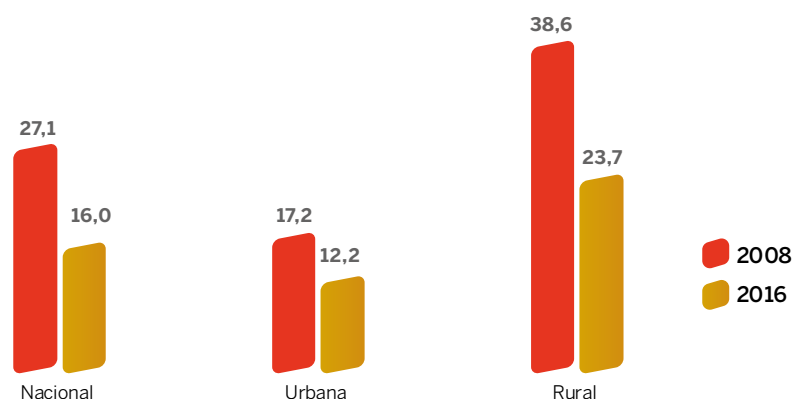
32 La Curva de Incidencia del Crecimiento (CIC) de 2015-2019 muestra el promedio de las curvas estimadas para los periodos 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019.

Es importante señalar que los altos niveles de informalidad, el peso del cuentapropismo en el total del empleo, así como las consecuentes brechas de protección social y la implementación de un piso mínimo de protección social constituyen una acción prioritaria en el marco de un sistema integral de protección social que garantice una cobertura universal a la salud, el acceso a los cuidados y a una seguridad del ingreso a lo largo de todo el ciclo vital.

• • • • •

36 UDAPE, 2021.

FIGURA 3.4. Prevalencia de la desnutrición crónica (%) en niños y niñas menores de 5 años, 2008 y 2016



Fuente: INE, Encuestas Nacionales de Demografía y Salud 2008 y 2016.

La transformación social y la acelerada reducción de la pobreza que experimentó Bolivia hasta 2013 resultó en un importante crecimiento de la clase media, que ese año congregaba al 56% de la población³⁷. Esta movilidad social ha estado relacionada con los medios de vida y el empleo, cuya dinámica se analizará en la siguiente sección (Prosperidad). Sin embargo, gran parte de este nuevo contingente social pertenecía al estrato medio vulnerable, es decir, personas con el suficiente ingreso para superar la línea de pobreza, pero que fácilmente podrían caer en pobreza ante un *shock* externo, como el acaecido en 2020.

Asimismo, las cifras evidencian que esta transformación social fue un fenómeno predominantemente urbano caracterizado por una alta migración campo-ciudad que, en definitiva, revela un secular problema en el ejercicio de derechos de las poblaciones rurales. Por estos motivos, resulta importante indagar el comportamiento de la movilidad económica en el periodo 2019-2020 (figura 3.5).

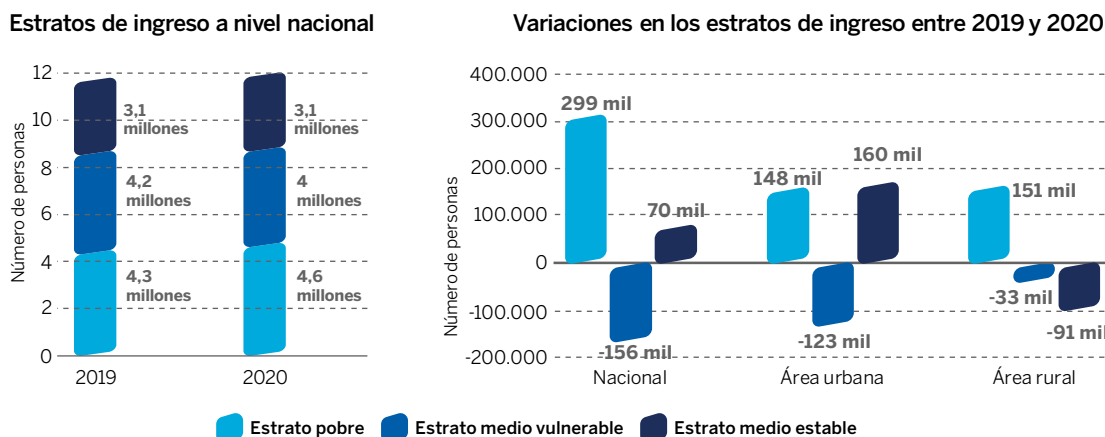
VOCES CIUDADANAS)))

Casi 6 de cada 10 personas opinan que la gestión del Gobierno en la lucha contra la pandemia puede ser calificada como satisfactoria. Esta percepción es particularmente positiva entre los estratos bajos y medio bajos de la población. No obstante, el 79% de los consultados se encuentra muy preocupado por el aumento de la pobreza y el deterioro de su situación económica.

Fuente: Encuesta Sociopolítica ONU-FES, 2021.

³⁷ La clase media, entendida como la población en el estrato medio vulnerable (33,9%), con ingresos mayores a una línea de pobreza pero inferiores a dos líneas de pobreza, y la población en el estrato medio estable (22,2%), que incluye a la población con ingresos mayores a dos líneas de pobreza, pero menor al ingreso del 5% más rico de la población (PNUD, 2015).

FIGURA 3.5. Estratos de ingreso a nivel nacional y variación por área geográfica, 2019-2020



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2019-2020)³⁸.

A nivel nacional se observa que el incremento en pobreza estuvo acompañado de una reducción de los grupos en situación de vulnerabilidad, sin variaciones de magnitud en el grupo de clase media estable, lo que implicaría que el incremento se dio, sobre todo, entre los hogares vulnerables. Por área geográfica, se observa un efecto similar en el área urbana, mientras que en el área rural el aumento de la pobreza (casi 4%) se produjo a costa tanto de los grupos de ingresos medios como en los hogares vulnerables. En términos absolutos, el incremento de 1,9% a nivel nacional en la pobreza monetaria implicaría un incremento de casi 300.000 nuevos pobres, de los cuales un poco más de la mitad (alrededor de 151.000 personas) se encontraría en el área rural. Respecto a las diferencias por género, tanto en el estrato pobre como en el medio vulnerable hay una tenue mayoría de mujeres (52% en ambos estratos), a diferencia del estrato medio estable que muestra una mayor concentración de hombres (52,5%). Por último, es importante señalar que los datos a 2020 muestran todavía una amplia representación de los grupos vulnerables entre la población que ha superado los umbrales de la pobreza (sobre todo en el área urbana, donde estos representan un 37% de toda la población).

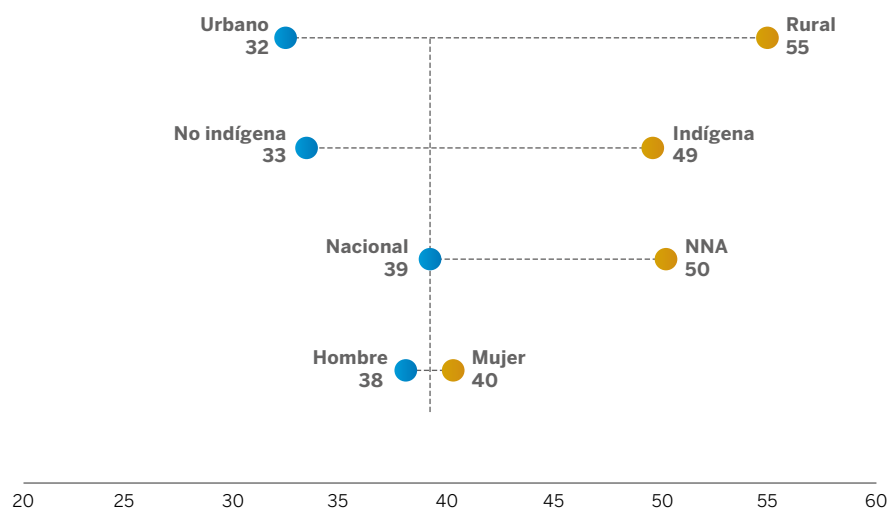
Las personas que viven en situación pobreza, cualquiera sea su condición, han quedado atrás en el progreso del desarrollo, carecen de las oportunidades para beneficiarse del mismo y ven impedido el ejercicio de sus derechos³⁹. Las mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNA), pueblos indígenas y personas del área rural son algunos de los grupos que han sido tradicionalmente reconocidos como vulnerables

38 Siguiendo la definición utilizada en el Informe de Desarrollo Humano (IDH) de 2015 para identificar los estratos de ingreso, el "estrato pobre" corresponde a la población con un ingreso menor a una línea de pobreza, mientras que el "estrato vulnerable" considera a la población cuyo ingreso es mayor a una línea de pobreza pero menor a dos líneas; por último, el "estrato medio estable" considera al resto de la población (PNUD, 2015).

39 UNDP, 2018.

en la sociedad y que están sobrerrepresentados entre los que han quedado atrás (figura 3.6). Sin embargo, al interior de estos grupos se encuentran poblaciones cuya realidad es invisible en el promedio general (por ello, el cuarto capítulo de este documento se dedica exclusivamente a la identificación de las personas con mayor vulneración de derechos).

FIGURA 3.6. Incidencia de pobreza monetaria (%) en subgrupos de la población, 2020



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2020).
 Condición étnica: Definida por Condición Étnica Lingüística (CEL)⁴⁰.
 Niños, niñas y adolescentes (NNA): Población de 0 a 17 años.

Las medidas orientadas a paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia se implementaron con una orientación a la protección de los medios de vida de la población. Se han otorgado bonos monetarios a los hogares en mayor situación de vulnerabilidad (Bono contra el Hambre, que benefició a 4.035.000 personas y que significó un gasto de Bs. 4.000 millones; Bono Familia, Bono Universal y Bono Canasta Familiar); por otra parte, la devolución de cotizaciones a los aportantes desempleados del seguro social de largo plazo benefició a 313.000 ciudadanos que solicitaron voluntariamente este beneficio; también se incrementaron las rentas de jubilación a la población adulta mayor. Asimismo, la política de dinamización económica se apoyó en un mayor ritmo de ejecución de la inversión pública afectada en el 2020. No obstante, dichas políticas no lograron contrarrestar totalmente los impactos tanto de las restricciones de la cuarentena⁴¹ como de la recesión económica derivada de dichas medidas. En este sentido, los efectos de la pandemia se han extendido hasta el presente, afectando de manera contundente al ejercicio de derechos económicos, así como al acceso a la educación, la atención

• • • • •

⁴⁰ Molina y Albó, 2006.

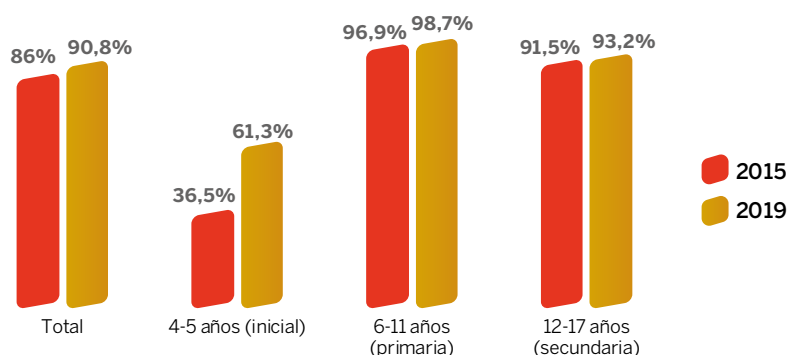
⁴¹ De acuerdo al análisis de UNICEF, el conjunto de transferencias condicionadas solo logró cubrir la pérdida de ingresos en los dos deciles inferiores de los hogares (UNICEF, 2020b).

de los servicios de salud y otros, como se verá más adelante. La pandemia de COVID-19 no concluyó en el año 2020, ni tampoco terminaron las medidas de contención que continúan afectando, al menos parcialmente, el desenvolvimiento normal de la sociedad. Mientras esta situación no se supere, el efecto de la pandemia sobre las condiciones socioeconómicas de la sociedad boliviana tendrá carácter acumulativo⁴².

Educación

Antes de la pandemia, las políticas públicas para el fomento del ejercicio del derecho a la educación estuvieron fundamentadas en la ampliación de la infraestructura educativa y en un aumento sostenido del presupuesto en todos los niveles. El gasto público en educación se mantuvo por encima de la media regional, llegando a superar el 8% del PIB en el periodo 2010-2014⁴³. Asimismo, los principales indicadores de asistencia (figura 3.7) y logro educativo, abandono escolar y deserción registraron una mejora significativa entre 2015 y 2019. Pese a ello, las brechas estructurales de desigualdad eran aún significativas entre grupos socioeconómicos y regiones en el periodo prepandemia; por otra parte, el país enfrentaba un importante rezago en la medición y resultados de la calidad educativa.

FIGURA 3.7. Tasa de asistencia escolar (%) en la población de 4 a 17 años, 2015-2019



Fuente: Encuesta de Hogares - INE.

Viejas y nuevas brechas educativas se hicieron más evidentes con la clausura del año escolar, en agosto de 2020, y con el uso de las modalidades a distancia y semipresencial en 2020 y 2021. Por un lado, emergieron brechas tecnológicas (acceso y habilidades para su uso) y, por otro, se exacerbaban diferencias en el acceso y la calidad de la educación entre escuelas públicas y privadas; urbanas y rurales. La brecha más grande en el acceso y calidad educativas se advierte entre

42 UNICEF, 2021a.

43 Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas, UDAPE (disponible en: https://www.udape.gob.bo/portales_html/dossierweb2020/https/doss0710.html).

niños, niñas y adolescentes del área urbana y rural: en 2019, 9 de cada 10 de niños, niñas y adolescentes del área urbana asistían a clases, frente a solamente 7 de 10 en áreas rurales. A partir de agosto de 2020, aún con reducciones en asistencia escolar tanto en el área urbana como rural, la brecha entre niños, niñas y adolescentes del área urbana y rural se amplía, pues 4 de 10 escolares en el área urbana continuaron asistiendo a clases mientras que en el área rural esta proporción solo alcanzó a 3 de 10 estudiantes⁴⁴.

Algunos análisis indican que los maestros de zonas rurales tuvieron aún más dificultades que los de zonas urbanas para utilizar las plataformas virtuales, pues no contaron con la suficiente capacitación o acceso a materiales que les ayudarán a nivelarse⁴⁵. Por otra parte, los hogares que dependen de la economía informal o del ingreso de todos los integrantes de la familia pudieron dedicar menos acompañamiento a niños, niñas y adolescentes en su educación a distancia, por el menor tiempo disponible de los padres y madres, así como por la inestabilidad en los ingresos económicos. En muchos casos, los niños, niñas y adolescentes se vieron forzados a ingresar al mercado de trabajo para apoyar económicamente a sus familias; lo que implica potenciales riesgos de abandono y deserción. Al mismo tiempo, la escasez de dispositivos de conexión y la falta de internet ilimitado, obligó, muchas veces, a restringir el acceso a la educación a un solo miembro del hogar, discriminando al resto de los hermanos. La pandemia evidenció las limitaciones de los sistemas de protección social y cuidado, así como la débil resiliencia de los hogares frente a este tipo de *shocks*, y las notables brechas digitales y de adecuación de sistemas educativos a nuevas modalidades de enseñanza. Respecto al acceso a internet en el hogar, este servicio registró un incremento sin precedentes (de más del doble) entre 2019 y 2020, de 23% a 55%⁴⁶. La brecha digital entre hombres y mujeres también se ha reducido, aunque, aún en 2020, esta brecha favorecía al primer grupo (62% de acceso en hombres y 58% en mujeres)⁴⁷.

El principal obstáculo para medir y hacer seguimiento a los logros y desafíos de la educación boliviana es la ausencia de información

VOCES CIUDADANAS)))

El 51% de los jóvenes y adolescentes consultados sobre la gestión del gobierno para implementar la educación a distancia y virtual, opina que los resultados han sido deficientes. Solo un 5% piensa que los resultados han sido muy buenos.

Asimismo, el 38% de los consultados piensa que lo más importante para su futuro es recibir una buena educación.

Fuente: U-Report, UNICEF, 2022.

44 UNICEF, 2021a.

45 León, 2022.

46 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

47 Ibid.

sistemática. El Estado boliviano ha creado el Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, una entidad descentralizada orientada precisamente a generar información sobre la calidad del proceso educativo. Esta entidad ha firmado convenios con entidades como el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE), el cual llevó a cabo una prueba piloto el año 2017 y tenía previsto implementar pruebas más amplias a partir de 2019. Los resultados de estos ejercicios, aún preliminares, sugieren que la calidad de la educación boliviana, en términos de los aprendizajes de los estudiantes, comparados con los de otros países, son deficitarios. Tanto en las pruebas aplicadas a estudiantes de 3^{er} grado como en las que se aplicaron a niños y niñas de 6^{to} grado, el desempeño de los estudiantes bolivianos es inferior al promedio latinoamericano. En todas las comparaciones (lectura y matemáticas), Bolivia obtiene resultados inferiores a los del promedio latinoamericano, registrando mayores porcentajes en el nivel I (mejor aprendizaje) y menores resultados en el nivel IV (mayores conocimientos y capacidades)⁴⁸.

Las restricciones que las generaciones en edad escolar afrontan para acceder a clases, sumadas a los bajos niveles de aprendizaje, podrían agravar y reproducir las desigualdades entre las familias de mayores y de menores ingresos en el futuro. Las nuevas generaciones de hogares con menores ingresos no podrán competir con las mismas capacidades y conocimientos producto de la educación formal que sus pares más ricos, resultando en menores oportunidades para los primeros. A su vez, la brecha de género también podría verse afectada, en tanto las mujeres tienen menos acceso a las tecnologías que los hombres y el rol doméstico y de cuidadoras, tradicionalmente asignado en el hogar, se agudizó durante la pandemia.

Salud

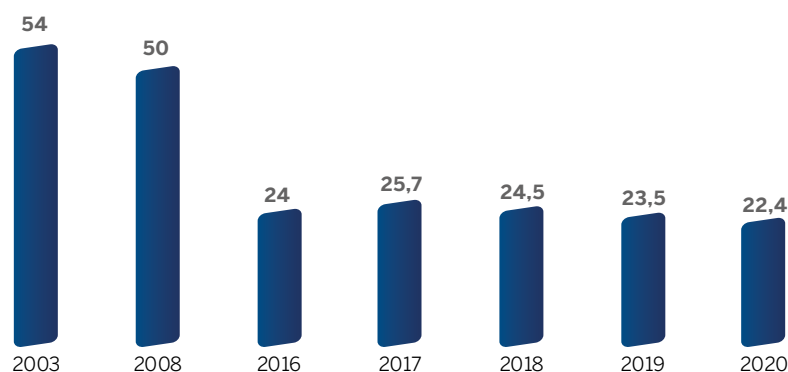
La trayectoria de mediano plazo muestra que se lograron importantes avances hacia la universalización en la atención de la salud materno-infantil con resultados de mejora de la atención prenatal, cobertura de partos institucionalizados, incremento de las tasas de vacunación infantil, acceso a métodos de anticonceptivos modernos, entre otros. Estos logros han sido atribuidos, entre otros factores, al impulso a la demanda por servicios de salud motivada por el Bono Juana Azurduy, así como a la implementación del programa SAFCI-Mi Salud, aunque todavía los problemas críticos del sistema incluyen altas tasas de mortalidad materno-infantil (figura 3.8).⁴⁹

• • • • •

48 UNICEF, 2021b.

49 Marconi, 2017.

FIGURA 3.8. Tasa de mortalidad infantil⁵⁰, 2003-2020



Fuente: Ministerio de Salud, INE.

Bolivia es uno de los países con la más alta tasa de mortalidad materna de la región. De acuerdo a estimaciones, en 2017 habrían ocurrido 155 muertes por cada 100 mil nacidos vivos, 81 puntos por encima del dato estimado para la región y solamente por debajo de Haití. Muchas de estas muertes pueden ser prevenidas. Según el último estudio de mortalidad materna, en 2011⁵¹ se registraron 169 muertes por 100 mil nacidos vivos. Los departamentos con mayor incidencia de mortalidad materna son La Paz y Potosí, seguidos de Cochabamba. Más de dos tercios de las muertes (68%) se produce en mujeres de origen indígena, el 14% en niñas menores de 15 años y el 42% en partos domésticos, es decir, por carencia de una adecuada atención médica. Por otro lado, pese a existir un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna (SVEMM), este no recoge toda la información y no se cuenta con datos actualizados sobre este indicador.

En 2022, dos años después de que el país se viera golpeado por la crisis sanitaria y tras la cuarta ola de contagios por COVID-19, Bolivia enfrenta el desafío de retomar la senda del ejercicio del derecho a la salud⁵². Desde que se inició la pandemia, Bolivia ha registrado más de 20.000 decesos a causa de esta enfermedad y se han acumulado más de 600 mil casos de contagios confirmados desde que se inició la emergencia sanitaria. La pandemia encontró al país en un

VOCES CIUDADANAS)))

A inicio del tercer año de la declaración de la pandemia en el país, los ciudadanos han hecho una valoración de la situación del sector de la salud. El 43% de los consultados piensa que el sistema de salud ha empeorado después de la pandemia, mientras que un 35% opina que el sistema de salud ha registrado mejoras en este tiempo.

Fuente: Encuesta Sociopolítica ONU-FES, 2021.

50 En niños y niñas menores de un año por cada mil nacidos vivos.

51 Ministerio de Salud, 2016.

52 OXFAM, 2022.

FIGURA 3.9. Cobertura de parto institucional (%), 2000-2020



• • • • •

55 *Idem.*

La implementación del Plan Estratégico de Lucha Contra la COVID-19 por parte del Estado Plurinacional se centró en mantener medidas para un diagnóstico gratuito y accesible, en la coordinación con los distintos niveles y actores del sector salud y, principalmente, en la implementación del Plan Nacional de Vacunación Anti COVID-19⁵⁶. Como resultado de este esfuerzo, el 39% de la población contaba en 2021 con el esquema completo de protección contra la COVID-19⁵⁷, mientras que la población mayor de 18 años alcanzó una cobertura de 59,6%⁵⁸.

La evidencia presentada revela un abanico de desafíos por abordar a futuro. En primer lugar, la pandemia ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de salud denotando una carencia de personal especializado en cuanto a la prestación de servicios esenciales y no diferibles de salud. En segundo lugar, en sentido prospectivo, existen nuevos y crecientes temas de salud pública (necesidades insatisfechas de anticoncepción, malnutrición, violencia sexual, enfermedades no transmisibles y otras de alta complejidad, brotes epidemiológicos, entre otros) que se añaden a otros temas no resueltos aun por la política de salud pública (como el VIH y la tuberculosis, en el rubro de enfermedades transmisibles⁵⁹) para los cuales la actual infraestructura y personal resultan insuficientes. En consecuencia, se hace necesario repensar la organización del servicio (redes de salud y apoyo del voluntariado local como promotores para la prevención) en función de la nueva distribución demográfica. Se debe fortalecer la capacidad del sistema para prepararse adecuadamente y responder a las crisis mientras se mantienen los servicios esenciales. Los Gobiernos Municipales tienen que cumplir con las obligaciones establecidas en los marcos normativos para garantizar el acceso a la salud, incluido el financiamiento y una distribución equitativa de los centros de atención en el territorio.

Agua y saneamiento básico

El acceso a fuentes mejoradas de agua e instalaciones de saneamiento ha recibido una importante atención en el país durante las últimas décadas. Esto ha sido consecuencia del esfuerzo conjunto de instituciones estatales y de la cooperación internacional⁶⁰ para mejorar la calidad de vida. En particular, el acceso a agua potable y el saneamiento básico contribuyen a reducir drásticamente las enfermedades infecciosas y diarreicas que afectan a la niñez y que son responsables de buena parte de la mortalidad entre la población más joven⁶¹.

• • • • •

56 Disponible en: <https://oiss.org/wp-content/uploads/2021/04/PLAN-DE-VACUNA-COVID19.pdf>

57 Datos de OPS/OMS (disponible en: https://ais.paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion-es.asp).

58 Datos del Ministerio de Salud.

59 Ministerio de Salud, 2021.

60 UNICEF, 2021b.

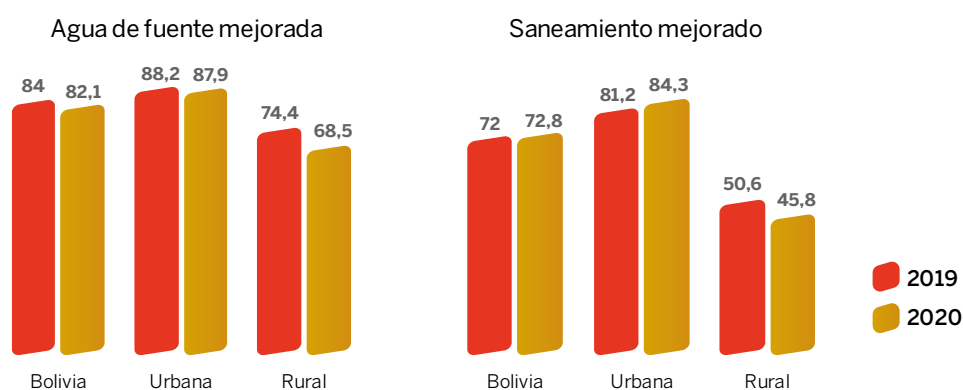
61 UDAPE, 2016.

A pesar del incremento sostenido en las dos últimas décadas en el acceso a agua de fuente mejorada, entre 2019 y 2020 la proporción de población con acceso a este servicio tuvo un retroceso casi dos puntos, pasando de 84% a 82,1%, lo cual denota un rezago en las inversiones del sector para continuar en la senda ascendente de coberturas (figura 3.10). El retroceso ha sido notablemente mayor en el área rural, donde el agua está ligada a los medios de vida de la población, acentuando la histórica brecha territorial que impide el acceso universal a este servicio⁶². El estancamiento o disminución de las coberturas en las áreas urbanas responde al fenómeno de migración campo-ciudad, el cual genera asentamientos no planificados en áreas periurbanas carentes de servicios.

Por otro lado, la cobertura, tanto en áreas rurales como urbanas, no está siempre acompañada por la calidad del servicio, que sufre frecuentes interrupciones; estas son causadas, en buena medida, por la degradación de las fuentes a raíz de la expansión descontrolada de las áreas urbanas.

En 2019, el 45% de los puntos de monitoreo presentaba calidad hídrica buena⁶³, registrando una reducción de 9% respecto a la línea de base de 2015. Para la implementación de la red de monitoreo se priorizan cuerpos de agua con problemas de deterioro en su calidad, debido a presiones causadas por la actividad humana, de origen minero, industrial y urbano⁶⁴.

FIGURA 3.10. Población con acceso a fuente mejorada de agua y saneamiento mejorado, según área, 2019-2020



Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Hogares.

62 UDAPE, 2021.

63 Medida por un indicador *proxy* para indicador de porcentaje de masas de agua de buena calidad. La determinación de la calidad hídrica se realiza en base a parámetros establecidos en normativa vigente.

64 Ibid.

En cuanto al acceso a saneamiento mejorado, la tendencia se ha mantenido positiva; entre 2019 y 2020 el aumento de cobertura mejoró en 0,8%. Sin embargo, la brecha rural-urbana es de 38,5%. Estos porcentajes, sin embargo, ocultan grandes diferencias que afectan sobre todo a los hogares más pobres. A nivel nacional, se observa una diferencia en el acceso a fuentes mejoradas de agua de 16% entre el quintil más rico y el más pobre (88,5% y 72,5%, respectivamente) y una diferencia de 36,6% entre estos dos grupos (89,1% y 52,5%, respectivamente), en cuanto a saneamiento mejorado.

Los desafíos en este ámbito se han mantenido pese a los avances que existieron en cuanto a cobertura y provisión. La pandemia ha contribuido a poner en evidencia la importancia de la higiene y, en consecuencia, del acceso al agua, para prevenir el contagio de COVID-19. Por su parte, el cambio climático pone en riesgo la provisión, el acceso y la calidad de los servicios por la disminución de los cuerpos de agua que alimentan los sistemas de provisión. Asimismo, los desastres naturales (incendios, inundaciones, entre otros) producen desplazamientos de las poblaciones más vulnerables limitando su acceso a servicios básicos. Las nuevas condiciones sanitarias marcan una importancia preponderante en la provisión y expansión de los servicios de agua potable y saneamiento, las cuales deberían concentrarse en los hogares pobres del área rural y urbana.

Violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes

La persistencia de una alta incidencia de las diversas formas de violencia contra las mujeres en Bolivia se mantiene. En efecto, 7 de cada 10 mujeres sufren y sobreviven a algún tipo de violencia en sus hogares, con graves consecuencias para su salud física y emocional; en torno al 70% de las mujeres padecen alguna forma de violencia sexual, psicológica, física o económica y, en un 75% de los casos, la violencia tiende a ser repetitiva, es decir, se sostiene en el tiempo, se torna cotidiana y no suele ser denunciada por las víctimas⁶⁵.

La Encuesta de Prevalencia y Características de la Violencia Contra las Mujeres en Bolivia, realizada en 2016, ha permitido establecer análisis comparativos con la región latinoamericana, ya que se incorporaron contenidos homologables a las estadísticas internacionales. Las cifras en relación a la violencia contra las mujeres en el ámbito público presentan, como forma de violencia predominante, la “humillación o menosprecio”; esta forma de violencia psicológica se registra en el 54,2% de los casos en las fuentes laborales. En ámbito educativo, 51,1% de las entrevistadas señalan sufrir este tipo de violencia. Se observa un alto nivel de naturalización de la violencia sexual simbólica que se presenta en los tres ámbitos,

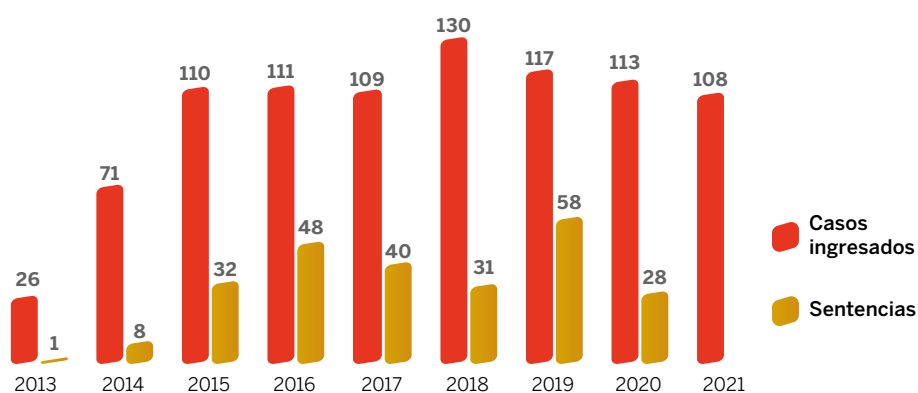
• • • • •

65 ONU Mujeres, 2021.

con porcentajes que alcanzan al 60% de las agresiones. Para las mujeres en Bolivia, los hogares, la calle, las instituciones educativas y el ámbito laboral no son, por lo tanto, lugares seguros⁶⁶.

De acuerdo al Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización (SEPMUD), con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la criminalidad denunciada más elevada en Bolivia es la referida a la violencia familiar o doméstica, cuyas víctimas son mayoritariamente mujeres, niños, niñas y adolescentes y, en menor medida, adultos mayores. Durante el 2020, la violencia “familiar o doméstica” fue el delito con mayor frecuencia, generando una elevada carga fiscal para el país. Durante la gestión 2020, en todo el territorio nacional se registraron 38.212 casos nuevos de violencia familiar⁶⁷.

FIGURA 3.11. Casos ingresados de feminicidio, 2013-2021*



Fuente: Ministerio Público, 2021.

* No se dispone de información sobre sentencias emitidas en 2021.

La respuesta del Estado muestra una gran mora procesal en este ámbito, pues el número de sentencias condenatorias en comparación con los casos ingresados es notablemente bajo. Para el 2020, existían 113 casos de feminicidios ingresados y solo 28 llegaron a sentencias condenatorias. El promedio de tiempo entre el periodo de denuncia y la sentencia es de 12 meses, con casos extremos que tuvieron una duración de tres años⁶⁸. Si a esto se suma el hecho de que las sentencias condenatorias son minoritarias en comparación con las absolutorias, es evidente el nivel de impunidad y limitada respuesta del sistema judicial para poner fin a la violencia contra las mujeres. Las cifras de feminicidio⁶⁹ que tienen como víctimas a niñas y mujeres de entre 15 y 20 años se han incrementado de

66 Ibid.

67 Ibid.

68 UNFPA, 2021.

69 UNICEF, 2021b.

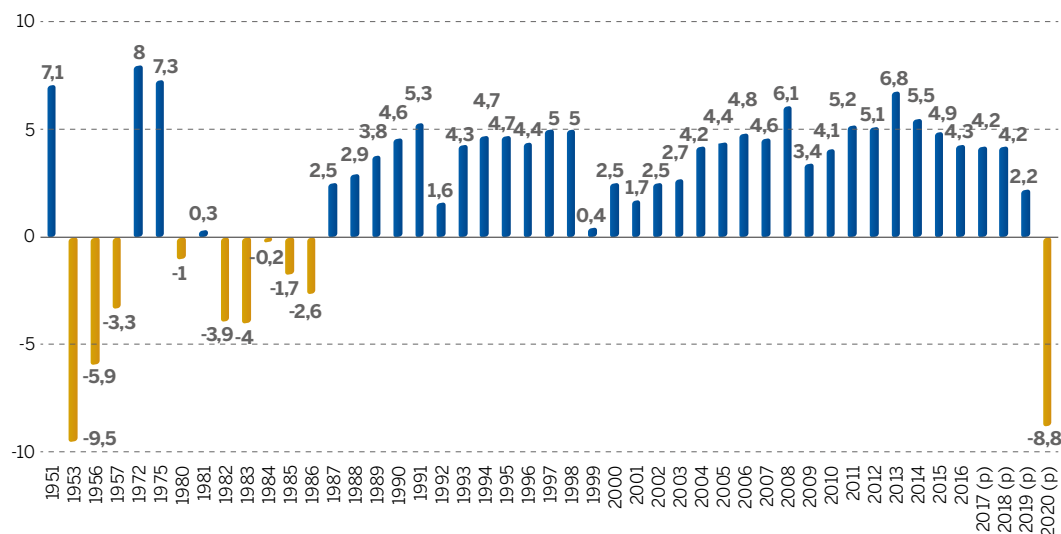
La violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres es otra forma de violencia que constituye una grave problemática social y de salud pública. Cuatro de cada 10 mujeres de 15 y más años sufrieron violencia sexual a lo largo de su vida⁷¹. El 2020, primer año de la pandemia con un largo periodo de cuarentena rígida, la Fiscalía General del Estado registró, entre enero y septiembre, 996 casos de violación a infante, niña/o y adolescentes, lo que significa un promedio de 4 casos por día. En 2021, el 19% de las denuncias por delitos relacionados con la Ley 348 “Para Garantizar a Las Mujeres una Vida Libre de Violencia” estaban referidos a violencia sexual, de los cuales el 40% corresponde a delitos contra niñas, niños y adolescentes.

71 INE, 2017.

Desde 2014, el crecimiento económico se ralentizó debido a la caída de los precios internacionales de las materias primas. A partir de ese año, la economía boliviana ha padecido recurrentes y crecientes déficits gemelos: déficit fiscal y déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos –fenómeno que coincide con los menores logros en reducción de pobreza anotados en el apartado 3.A (Personas: Igualdad y bienestar de las personas)–. Estos saldos deficitarios han sido financiados acudiendo al endeudamiento externo y a la utilización de las reservas internacionales, mediante créditos del Banco Central de Bolivia (BCB) al Tesoro General de la Nación. Con el tiempo, las reservas internacionales han disminuido aceleradamente, mientras que la deuda externa ha ido creciendo, aunque aún se mantiene en niveles aceptables de acuerdo a criterios de los entes financieros internacionales⁷⁴.

El año 2020 encuentra al país en un escenario de fin del “superciclo de precios internacionales”, lo que afectó especialmente al espacio fiscal que había servido para el financiamiento de un conjunto de políticas públicas sociales. En este contexto, la pandemia y las medidas de contención de la misma significaron un *shock* no previsto que se tradujo en una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del orden de 8,2% en 2020; una caída no observada desde la década de los años 50 del siglo XX.

FIGURA 3.12. Tasas de crecimiento del PIB real por año



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Las exportaciones cayeron, aunque en menor magnitud que las importaciones, lo que ha resultado en una cuenta corriente de balanza de pagos equilibrada, después de un lustro de déficits comerciales. No obstante, los recurrentes bajos niveles de inversión externa⁷⁵ en el país han debido de ser compensados con la adquisición

74 IMF, 2021.

75 UNCTAD, 2020.

de deuda externa y la caída en las reservas internacionales. Si bien la recesión ha corregido el déficit de cuenta corriente, un problema crítico es el déficit fiscal que el país arrastra. En efecto, en 2020 se registró el mayor déficit de los últimos años, del orden de los USD 4.676 millones (57,2% mayor al déficit en 2019), originado en una caída del 20% de los ingresos, frente a una disminución del 7,8% de los egresos totales. Para el año 2021, el déficit fiscal programado es del 9,7% del PIB⁷⁶.

VOCES CIUDADANAS)))

En una consulta a propietarios de MIPYMES, se indagó acerca de la afectación de sus negocios por la pandemia. Independientemente del tamaño o situación de formalidad, más del 60% de los consultados declararon que tuvieron que parar sus actividades totalmente. El principal problema que afrontaron fue el pago de salarios y obligaciones de la seguridad social, particularmente la empresas pequeñas y medianas formalmente constituidas.

Fuente: Encuesta a MIPYMES, PNUD, 2020.

La política económica durante el 2021 giró en torno a la reducción de las restricciones de contención sanitaria a medida que avanzaba el plan de vacunación y a la reactivación de la demanda interna a través del gasto público por el lado de la inversión pública en sectores de infraestructura y productivos⁷⁷. Adicionalmente a las medidas de protección de los ingresos de la población, se implementaron acciones de apoyo desde el sector financiero logrando la reprogramación de casi 300.000 operaciones crediticias por un valor de USD 6.290 millones. Finalmente, en lo que respecta al apoyo dirigido al sector empresarial, se constituyó el fideicomiso denominado SIBOLIVIA y el Fondo de Garantías FOGADIN con el objeto de apoyar a las empresas productivas dedicadas a rubros de sustitución de importaciones, que benefició a 5.700 empresas con un monto desembolsado de Bs. 604 millones⁷⁸.

El PDES prevé un crecimiento real del PIB de, al menos, el 5% a lo largo del quinquenio 2021-2025. En 2022, el Gobierno prevé un crecimiento económico del 5,1%, basado en la recuperación prevista de los hidrocarburos, la agroindustria y la minería. Sin embargo, otras previsiones son más modestas. El FMI y la CEPAL prevén que la economía boliviana crecerá al 3,2% y 3,5%, respectivamente, antes de disminuir a niveles inferiores al 3% para el año 2023⁷⁹, lo que, en definitiva, implica que la reciente recesión y las modestas proyecciones de crecimiento a medio plazo amenazan la posibilidad de un crecimiento sostenido de, al menos, el 7% necesario para alcanzar los ODS en los países en desarrollo⁸⁰.

• • • • •

76 Véase: <https://www.economiayfinanzas.gob.bo/el-ministro-de-economia-anuncia-un-crecimiento-cercano-al-6-y-exportaciones-superiores-a-us-10000-millones-para-2021.html>

77 Ministerio de Economía y Finanzas (2022).

78 A junio de 2021, según información del BCB.

79 CEPAL, 2022.

80 El PDES no incluye una proyección a nivel de sectores productivos (transables y no transables), ni la descomposición de crecimiento por factores y gasto, así como tampoco su reflejo en empleos (independientes o dependientes) y su impacto en reducción de pobreza.

Las condiciones económicas y la severa recesión del 2020, además de una recuperación que no ha logrado revertir del todo los impactos de la pandemia, han tenido un claro efecto en el ejercicio de los derechos económicos de las y los bolivianos, particularmente a través del mercado laboral.

En relación al ámbito laboral, se observan dos grandes tendencias⁸¹ (figura 3.13): i) Las tasas de participación laboral mantienen brechas de género históricas que hasta el día de hoy no se han cerrado. La sobrerrepresentación de las mujeres en la Población Económicamente Inactiva (PEI) supera el 60%, mientras que los hombres son el grupo mayoritario en la Población Económicamente Activa (PEA). Esto coincide con la persistencia de los roles históricos asignados en cuanto a cuidado y quehaceres domésticos que recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres⁸²; ii) Con la caída de la participación laboral durante la cuarentena y la posterior recuperación de la actividad en 2021, se observa que las diferencias de género se mantienen (figura 3.14). La evidencia coincide con los datos regionales que han mostrado una mayor afectación a las mujeres en Latinoamérica, situación que amenaza con hacer retroceder los avances en participación laboral en aproximadamente 10 años⁸³. Entre las principales razones de lo anterior cabe señalar que las mujeres tienen una mayor participación en los sectores más afectados por la pandemia, como el comercio, la educación, la salud, el trabajo doméstico y el turismo⁸⁴.

El impacto del confinamiento no solo fue de magnitud en la participación en el mercado laboral; también tuvo una importante repercusión en la desocupación. Los niveles de empleo han mejorado tras la crisis de 2019, sin embargo, en el tercer trimestre de 2020, cuando el mercado laboral empezaba a reactivarse, la tasa de desempleo en el área urbana se situaba en el orden del 10,8%, cifra notablemente superior al dato histórico de los últimos 10 años (figura 3.14).

• • • • •

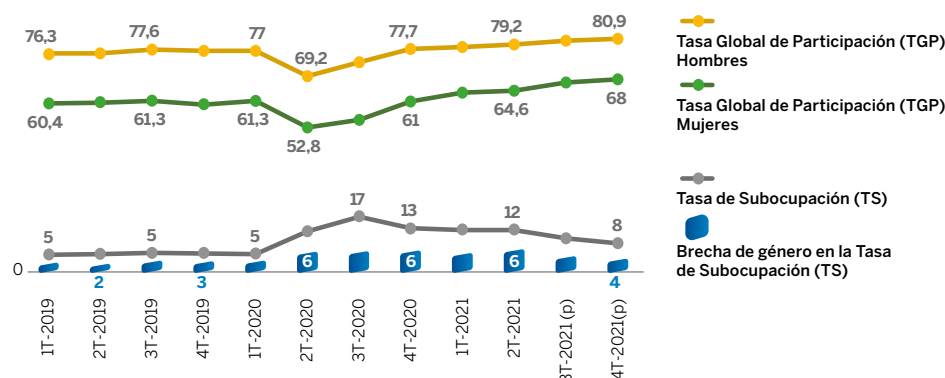
81 Los datos que se refieren a continuación provienen del Instituto Nacional de Estadística (INE) y han sido elaborados a partir de la Encuesta Continua de Empleo (ECE). Cabe señalar que se trata de información representativa a nivel del área urbana y que no se dispone de información sobre el empleo en el área rural en el periodo de abril a diciembre de 2020, debido a la situación de cuarentena.

82 La Población Económica Activa (PEA) considera a las personas que en determinado periodo de tiempo trabajaron o buscaron trabajo activamente. La Población Económica Inactiva (PEI) contempla a las personas que no trabajan ni buscan trabajo. Está conformada principalmente por estudiantes, responsable de los quehaceres del hogar, personas mayores o jubilados y otros, como personas con discapacidad.

83 López-Calva, 2021.

84 OIT, 2021a; López-Calva, 2021; OIT, 2021.

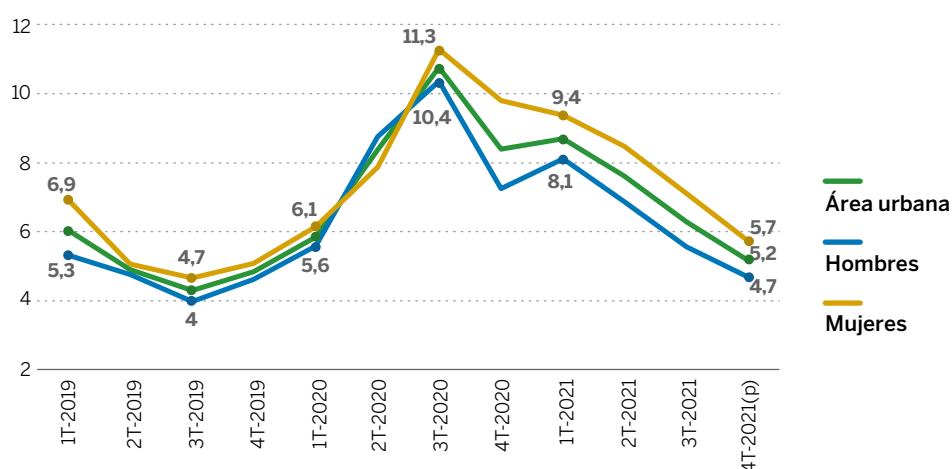
FIGURA 3.13. Área urbana: Tasa global de participación laboral trimestral y tasa de subocupación, 1T/2019-4T/2021



Fuente: Elaboración con base en Instituto Nacional de Estadística - Encuesta Continua de Empleo 2019-2021(p).

Tasa Global de Participación (TGP) = Población Económicamente Activa (PEA)/Población en Edad de Trabajar (PET).

FIGURA 3.14. Área urbana: Tasa de desocupación trimestral por género, 1T/2019-4T/2021



Fuente: Elaboración con base en Instituto Nacional de Estadística con datos de la Encuesta Continua de Empleo 2019-2021(p).

Tasa de Desocupación (TD) = Población Desocupada (PD)/Población Económicamente Activa (PEA).

La recuperación de la actividad laboral se da ahora en condiciones de menor calidad de empleo. Se percibe un deterioro de las condiciones de empleo y de los ingresos. Nuevamente es la población más pobre y con menor capacidad de lidiar con el *shock* sanitario y socioeconómico la más afectada. La tasa de subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo⁸⁵ revela que, en promedio, en

85 Este indicador captura información sobre la cantidad de personas ocupadas que trabajan menos de un umbral de 40 horas a la semana, pero desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo.

el periodo preconfinamiento (trimestres anteriores a 2T-2020) el 5% de la población ocupada se encontraba subocupada, mientras que en el periodo postconfinamiento (trimestres después de 2T-2020) este valor se duplica llegando a 13,4%⁸⁶. Es importante notar que la tasa de subocupación es, en todos los trimestres, superior para las mujeres respecto a los hombres en el área urbana. Este indicador, al segundo trimestre de 2021, todavía está muy distante de volver a la situación preconfinamiento (figura 3.13).

Contracciones en el ingreso laboral

Los efectos de la crisis económica derivada de la pandemia sobre la calidad del empleo repercuten también en el comportamiento del ingreso laboral; este es el vínculo entre la actividad económica y el ejercicio de derechos económicos y las condiciones de vida de la población. En general se observa que los ingresos laborales han sufrido una caída importante durante el confinamiento, situación que no ha podido ser revertida hasta ahora, según los últimos datos disponibles⁸⁷. La evidencia revela que tres grupos son los más afectados por dicha caída: mujeres, trabajadores con bajos niveles educativos y empleados informales⁸⁸.

El análisis del ingreso con enfoque de género revela una amplia brecha entre hombres y mujeres a favor del primer grupo, de más de Bs. 600 (USD 86) en todos los casos, según los últimos datos disponibles (2020-2021) (figura 3.14). Respecto a las diferencias por niveles educativos, se observa una brecha de más del doble entre los trabajadores con bajos niveles educativos y aquellos con educación terciaria, a favor de este último grupo. En este grupo se advierte un ingreso promedio más alto con respecto a las otras categorías. Al igual que en la desagregación anterior, el ingreso laboral presenta una reducción constante en todas las categorías hasta el tercer trimestre de 2020. Por último, se evidencia que los trabajadores más afectados en la reducción del ingreso son aquellos con educación primaria y secundaria (escuela), que presentan una reducción de 19,5% entre el primer y el tercer trimestre de 2020 (figura 3.14).

VOCES CIUDADANAS)))

En una consulta a propietarios de MIPYMES, se indagó acerca de la afectación de sus negocios por la pandemia. Independientemente del tamaño o situación de formalidad, más del 60% de los consultados declararon que tuvieron que parar sus actividades totalmente. El principal problema que afrontaron fue el pago de salarios y obligaciones de la seguridad social, particularmente la empresas pequeñas y medianas formalmente constituidas.

Fuente: Encuesta a MIPYMES, PNUD, 2020.

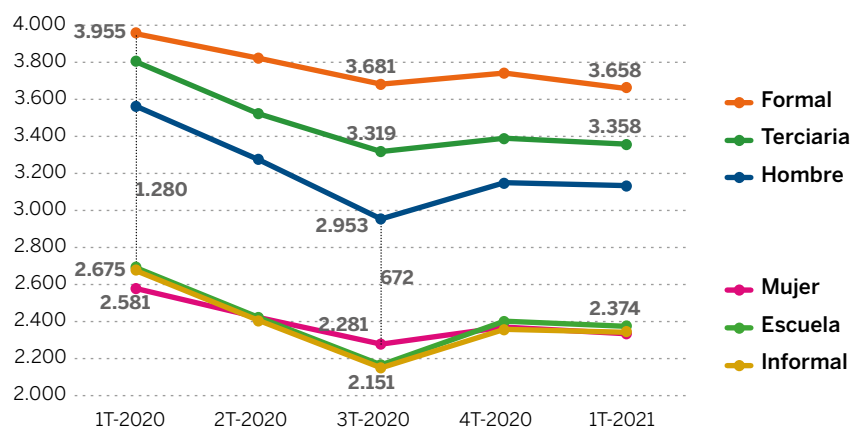
86 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

87 Al igual que en la parte anterior, los datos se obtienen a partir de la Encuesta Continua de Empleo (ECE), sin embargo, por la disponibilidad de datos el análisis cubre solamente hasta el primer trimestre de 2021.

88 Azuara et al., 2021, Sánchez-Páramo et al., 2021, Kugler et al., 2021, Cruz-Aguayo et al., 2021.

Por otra parte, se observa un mayor impacto en el ingreso promedio en el sector informal, con una reducción de 20% durante el confinamiento versus una reducción de 7% en el sector formal en el mismo periodo. Esto da cuenta no solo de una brecha importante entre trabajadores formales e informales (una diferencia promedio de más de Bs. 1.200 [USD 172] el periodo 2020-2021), sino también una alta vulnerabilidad de las ocupaciones informales ante *shocks* como el vivido (figura 3.15).

FIGURA 3.15. Área urbana: Ingreso promedio en la ocupación principal de la población de 14 años y más por género, niveles educativos y sector de ocupación (Bs.), 1T/2020 - 1T/2021



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta Continua de Empleo 2020-2021(p), Instituto Nacional de Estadística.

Niveles educativos: Escuela considera a los trabajadores con máximo nivel educativo alcanzado la primaria o secundaria. Empleo en el sector informal: Empleo en el sector informal medido por productividad⁸⁹.

El panorama del mercado laboral boliviano es el reflejo de un ecosistema empresarial desarticulado entre sectores formales e informales con amplias brechas en la productividad, condiciones laborales y de crecimiento. Bolivia, con una de las economías informales más grandes de la región⁹⁰, enfrenta enormes desafíos para el bienestar de la población. Además de que los trabajadores informales están menos protegidos y tienen un mayor riesgo de caer en la pobreza, la informalidad está fuertemente asociada con el autoempleo y/o con el empleo en empresas muy pequeñas de baja productividad⁹¹. En este sentido, existen serias

89 El empleo en el sector informal medido por productividad corresponde a la población ocupada en unidades de baja productividad, con bajo nivel organizacional y uso de capital y tecnología, incluyendo: a) Trabajadoras y trabajadores por cuenta propia (excluyendo a los profesionales independientes); b) Trabajadores familiares y empleadas del hogar; c) Obreros, empleados, cooperativistas, socios(as), patrones o empleadores de establecimientos donde trabajan menos de 5 personas (EMINPRO-INESAD).

90 Figueroa y Machicado, 2020.

91 PNUD, 2021.

limitaciones para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) en cuanto a acceso a capital de inversión, tecnología y otros factores productivos que restringen sus niveles de competitividad, a pesar de que estas son responsables del 98,9% de la base empresarial boliviana⁹². Por consiguiente, su participación en los mercados nacionales e internacionales es limitada, siendo este un factor principal que desincentiva la implementación de procesos productivos más competitivos, basados en nuevas tecnologías e innovación, limitación que perpetúa los bajos niveles de productividad.

VOCES CIUDADANAS)))

La principal oportunidad que las empresas identifican en el contexto de la crisis es poder mejorar el uso de las TIC y desarrollar medios digitales para sus productos y servicios. Del mismo modo, acciones de prevención como la elaboración de planes de contingencia ante posibles futuras crisis, así como encontrar alternativas de distribución de productos o servicios, también son identificadas como oportunidades frente a la crisis.

Fuente: Encuesta a MIPYMES, PNUD (2020).

Según el informe del año 2020 de Doing Business⁹³ del Banco Mundial⁹⁴, Bolivia ocupa el lugar 150 con una caída de cuatro posiciones el último año, ubicándose solo por encima de países de la región como Venezuela, Haití y Surinam. Las calificaciones más bajas para el país se encuentran en las categorías referidas a la facilidad para abrir un negocio, cargas impositivas y obtención de créditos, situación que indica la existencia de un margen amplio para simplificar o agilizar las reglas a fin de aumentar la facilidad de hacer negocios, permitir que la actividad empresarial prospere y posibilitar que la actividad económica alcance su pleno potencial⁹⁵.

Por otra parte, el contrabando es parte de los factores estructurales que limitan el crecimiento del país, pues tiene la capacidad de liquidar cualquier intento de crecimiento y desarrollo del sector formal, y con ello la generación de fuentes laborales más estables y de mejor calidad. El contrabando podría ser igual o mayor en valor que el comercio formal y llega a representar entre el 61,5% y el 81% de la oferta del sector manufacturero en los mercados bolivianos⁹⁶. Actualmente se dispone de poca información respecto al impacto del contrabando en otros sectores estratégicos como el agropecuario y el tecnológico.

• • • • •

92 Viceministerio de la Mediana y Pequeña Empresa (2020) (incluye unidades económicas agropecuarias).

93 El Doing Business Report mide nueve dimensiones para estimar la facilidad de hacer negocios en los diferentes países: 1) Apertura de una empresa; 2) Permisos de construcción; 3) Registro de propiedades; 4) Obtención de crédito; 5) Protección de inversores; 6) Pago de impuestos; 7) Comercio internacional y transfronterizo; 8) Cumplimiento de contratos; 9) Cierre de la empresa (World Bank, 2020).

94 World Bank, 2020.

95 Zogbi, 2021.

96 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, 2020.

Adicionalmente, se estima que entre USD 2.000 millones y 2.500 millones por año es el movimiento económico de la actividad ilícita de las drogas en Bolivia⁹⁷, cifra que representa el 5% del PIB, aproximadamente. Asimismo, en términos de capital, si se mide cómo estos flujos se volvieron casas y patrimonio, puede calcularse un impacto de entre el 7% y 10% del PIB (esto representa entre USD 2.800 millones y 4.000 millones). Son cifras alarmantes que, además, coinciden con las evidencias que se reportan del impacto y crecimiento del narcotráfico en Bolivia a través de la presencia cada vez más evidente de cárteles y grupos delictivos de mucho poder, a la par de la enorme cantidad de laboratorios para elaborar y refinar la droga.

La marcha hacia la reactivación económica y el crecimiento sostenido plantea la necesidad de iniciativas de diversificación con creación de empleos de calidad, incluyendo un sistema de incentivos tributarios que privilegie la inversión público-privada y el emprendedurismo nacional para crear nuevas oportunidades productivas, así como un clima adecuado de seguridad jurídica para las inversiones, particularmente aquellas orientadas a la transformación en sectores que pueden, de manera paulatina, generar una base industrial y de servicios sólida y con empleos dignos⁹⁸. Rubros de alimentos, sectores agroindustriales, servicios tecnológicos, economía naranja⁹⁹, son solo algunos de los ejemplos.

Para lograr dichas transformaciones serán necesarios acuerdos entre Gobierno y actores económicos privados –tanto empresa privada como sectores gremiales, cooperativistas y grupos ligados a actividades informales– sobre distribución de recursos fiscales y contenidos de política económica. Sin embargo, las consultas ciudadanas revelan que, a pesar de que la población mayoritariamente apoya la idea de generar acuerdos para la gestión económica, solo un reducido porcentaje cree que sea factible alcanzarlos¹⁰⁰.

Existen retos a la gestión de la política económica derivados de diferentes visiones de modelo económico (por ejemplo, entre posiciones e intereses extractivistas y modelos conservacionistas), así como desafíos relativos a sectores que operan al margen de la institucionalidad y de la política fiscal, como es el caso de las actividades informales ligadas al contrabando y al comercio no regulado. A todo ello hay que añadir el reducido espacio fiscal y los espacios limitados de acuerdo son los problemas de economía política que enfrenta el país para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible y diversificado.

• • • • •

97 Ver: "Bolivia y los narcodólares" (editorial), *Página Siete*, 22 de marzo de 2022, en: <https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2022/3/22/bolivia-los-narcodolares-326476.html>

98 Cornick, 2016.

99 Economía naranja es como se denomina al conjunto de actividades que consisten en la transformación de ideas en bienes y servicios de carácter cultural. En este sentido, dentro de la economía naranja, el valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual (Francisco Coll Morales, (2020). (Véase: <https://economipedia.com/definiciones/economia-naranja.html>)

100 Encuesta Flash, ONU-FES, mayo de 2021.



C. PLANETA: Emergencia climática y medioambiental



La emergencia climática y medioambiental está impactando a Bolivia de manera notable, a pesar de los esfuerzos nacionales encaminados a promover un contexto de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la naturaleza. Las consecuencias de esta emergencia se reflejan en inseguridad alimentaria, problemas de acceso al agua, mayor incidencia de enfermedades, deforestación, contaminación ambiental, mayor frecuencia e intensidad de desastres, pérdida de biodiversidad y afectación a los medios de subsistencia de un importante contingente poblacional. La mayoría de los problemas relativos a la afectación del medio ambiente en el país se derivan de actividades económicas vinculadas con modelos de explotación de recursos que impactan en los ecosistemas; todo esto en el contexto de un proceso de urbanización y migración interna que tienen un impacto en la salud y en los medios de vida de la población.

Bolivia tiene una política de Estado de desarrollo integral en armonía y equilibrio con la naturaleza que se resume en el concepto del Vivir Bien, definido como la vida en plenitud: “Es saber vivir en armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma de existencia. Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad; implica primero saber vivir y luego convivir. No se puede Vivir Bien si los demás viven mal, o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir Bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto”¹⁰¹. Este enfoque está reflejado en los compromisos internacionales del país¹⁰².

Los retos en materia medioambiental se han visto exacerbados por la pandemia, que ha supuesto un empeoramiento en las condiciones para la acción de protección ambiental y la lucha contra el cambio climático¹⁰³. El crecimiento de la informalidad laboral y la reducción de los ingresos personales¹⁰⁴ suponen una mayor intensidad en las actividades responsables del aumento de los niveles de deforestación, de la minería ilegal que contamina suelo y agua, y de la multiplicación de residuos sólidos, lo que ocasiona mayor presión sobre los ecosistemas y recursos naturales¹⁰⁵. La

• • • • •

101 Ministerio de Relaciones Exteriores, 2021.

102 Ver Anexo B, para referencia de Firmas y ratificaciones de Bolivia de instrumentos internacionales medioambientales claves.

103 Sánchez y Torres, 2020.

104 Ibid.

105 Ibid.

pobreza y las brechas de ingresos económicos y de acceso a la tecnología han incrementado las condiciones de vulnerabilidad en toda la población, principalmente entre mujeres, niños, niñas, jóvenes e indígenas, afectando sus capacidades de resiliencia frente al cambio climático y la crisis medioambiental. En Bolivia, más de 2,1 millones de niños, niñas y adolescentes habitan en lugares con alto riesgo de sufrir inundaciones, y más de 600 mil viven en zonas de alto riesgo de sequía¹⁰⁶. Seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes de las áreas urbanas viven con un nivel muy alto de precarización en cuanto a las condiciones habitacionales, el nivel educativo y los ingresos familiares¹⁰⁷. El cambio climático y la pandemia de COVID-19 también impactan negativamente en los sistemas alimentarios haciendo necesaria la integración con las áreas rurales. El 2016 se registraba en las zonas rurales un 23,7% de desnutrición crónica en menores de 5 años y un 1,6% de desnutrición aguda, tras las severas sequías sufridas desde el 2013¹⁰⁸. En los últimos 50 años se han modificado los patrones de enfermedades de la niñez¹⁰⁹, existiendo sólida evidencia de que el cambio climático y la exposición a un medio ambiente degradado¹¹⁰ son importantes disparadores de enfermedades tales como el asma y el dengue¹¹¹.

De acuerdo a las conclusiones de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021¹¹² y a los análisis de las comunidades más vulnerables ante la inseguridad alimentaria¹¹³, han empeorado los medios de vida del sector alimentario por efectos climáticos en el acceso al agua, variaciones climáticas y degradación de suelos. Este sector tiene gran importancia en la economía nacional. En 2019, la agricultura, a nivel nacional, empleó a más del 29% de la fuerza laboral y aportó el 15,3% al PIB nacional¹¹⁴.

VOCES CIUDADANAS)))

A través de la innovadora consulta ciudadana “Diálogos Digitales, Bolivia Conversa”, los participantes identificaron de manera mayoritaria que uno de los grandes tesoros del país es la diversidad ecológica y los recursos naturales (30%) y la Pachamama o Madre tierra (11%). Adicionalmente, casi el 86% cree que uno de los factores imprescindibles para el futuro de Bolivia es el cuidado del medio ambiente y los recursos naturales (junto con temas económicos, de salud y justicia).

Fuente: Diálogos Digitales, 2021.

106 Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2014.

107 Landrigan y Etzel, 2013.

108 INE, 2016.

109 Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018.

110 Datos proporcionados por el Programa Nacional de Gestión de la Calidad del Aire, en el marco del Informe Nacional de Calidad Ambiental Gestión 2017 (inédito) (MMAyA y PNGCA, 2018).

111 CEPAL y UNFPA, 2009.

112 Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, 2021.

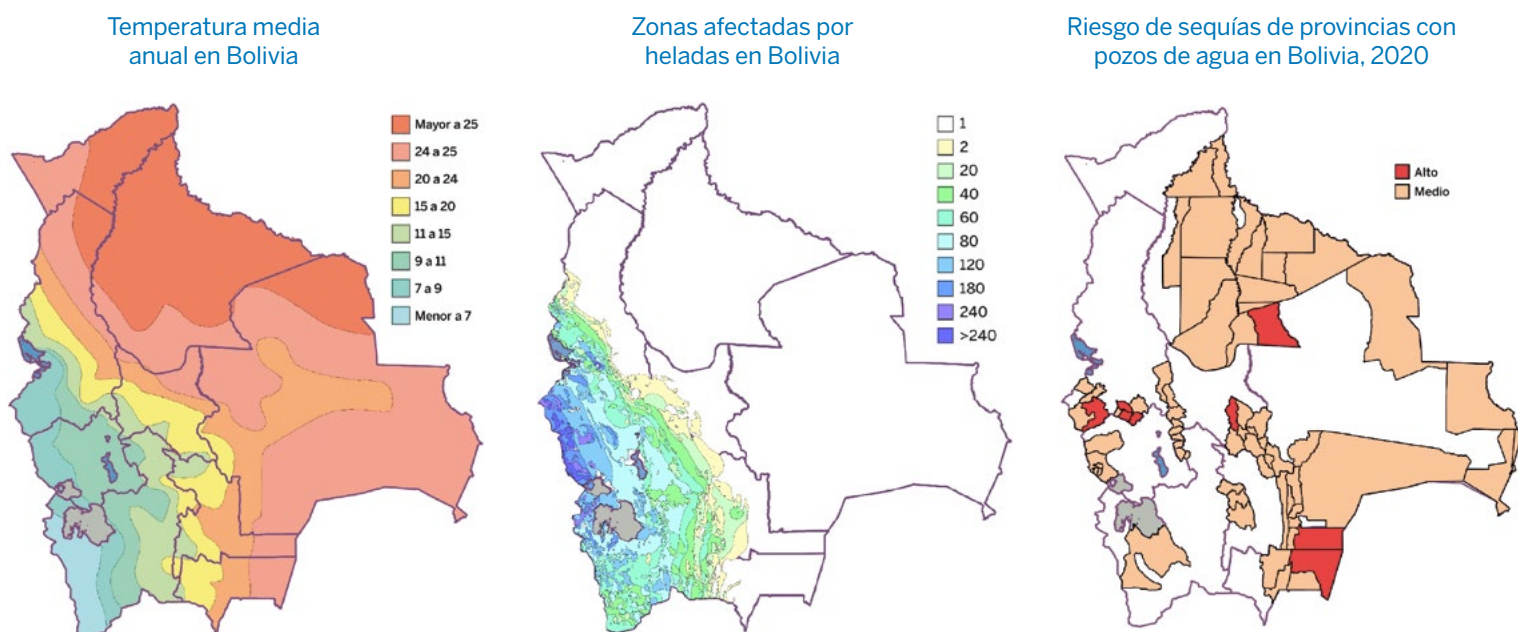
113 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y Programa Mundial de Alimentos, ICA, 2020.

114 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2020.

La crisis climática en Bolivia

Antes de la pandemia de COVID-19, Bolivia ya se encontraba entre los 10 países más vulnerables al cambio climático a nivel mundial¹¹⁵, el segundo país más vulnerable de Sudamérica, con “riesgo extremo al cambio climático”¹¹⁶, y el quinto menos preparado en el continente para mitigar los daños de este fenómeno¹¹⁷. En los últimos 30 años la temperatura media anual ha sufrido incrementos de hasta 1 °C en algunas regiones del país, mientras que las precipitaciones muestran una reducción en sus valores anuales de hasta -19%¹¹⁸. Bolivia se encuentra en el centro de tres subregiones climáticas y por ello se ve impactada por variaciones extremas¹¹⁹.

MAPA 3.1. Variabilidad climática en Bolivia



Fuente: Ministerio de Planificación del Desarrollo y Viceministerio de Defensa Civil (Sistema Integrado de Información y Alerta para la Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER - SAT) con base en información en GeoBolivia.

En la última década, Bolivia ha experimentado una agudización de los impactos del cambio climático, con 700 inundaciones, más de 500 granizadas, casi 300 eventos de sequías y medio centenar de incendios forestales de gran magnitud^[20]. Se estima que las inundaciones llevan cada año a la pobreza a 26.112 personas^[21].

115 Germanwatch, 2021.

116 Corporación Andina de Fomento - Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

117 Universidad de Notre Dame, 2021.

118 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).

119 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021a; Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2021b.

120 Unidad de Contingencia Rural (UCR) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 2021.

121 BID, 2017.

Contexto para la resiliencia y la aceleración de la acción climática

Mitigación: Hasta el 2030 proyecta realizar esfuerzos en materia de transición en la matriz de generación eléctrica nacional hacia un sistema fuertemente basado en energías renovables, a través de la mejora de la eficiencia energética y de la gestión integral y sustentable de bosques.

VOCES CIUDADANAS)))

Fuente: U-Report, UNICEF, 2022.

126 Las contribuciones determinadas a nivel nacional son el núcleo del Acuerdo de París y de la consecución de esos objetivos a largo plazo; por lo tanto, dichas contribuciones encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio climático (UNFCCC, 2015).

el 100% de cobertura de agua potable para todos los bolivianos y bolivianas, e incrementar la superficie bajo riego resiliente con el objetivo de garantizar la producción de alimentos. Se plantea la mejora de las funciones ambientales de los sitios Ramsar¹²⁷ y las cabeceras de las cuencas, además del impulso a la gestión integral de los recursos hídricos.

Acciones Conjuntas de Mitigación y Adaptación para el Manejo Integral y Sustentable de Bosques: Tienen la finalidad de incrementar la resiliencia de los sistemas productivos, la capacidad de adaptación de las sociedades y sus sistemas de vida.

Atención a grupos en situación de vulnerabilidad: Es preciso orientar acciones hacia indígenas, mujeres, niños y niñas para reducir su exposición, sensibilidad y aumentar su capacidad adaptativa al cambio climático, que ha de tener un enfoque territorial y basado en el diálogo social¹²⁸, en pos de una transición ecológica¹²⁹ con sectores verdes¹³⁰, respetando el Convenio 169¹³¹, especialmente para comunidades indígenas en mayor riesgo en el Altiplano Sur, Chiquitanía, Chaco y Norte Amazónico.

Resiliencia comunitaria

En este ámbito hay muchas oportunidades de mejora en la gestión de riesgos pues de 339 municipios solo 2 cumplieron con los requisitos y estándares para la homologación de sus Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT) ante el órgano rector¹³². Asimismo, una evaluación de la resiliencia en 11 municipios urbanos¹³³ constató falta de simulacros ante emergencias. Trinidad, La Paz, Cobija y Santa Cruz tienen sistemas de alerta temprana en funcionamiento. En el área rural, la Chiquitanía ha desarrollado también su propio sistema de alerta temprana en 2020.

127 Un sitio Ramsar es un humedal designado como de importancia internacional bajo el Convenio de Ramsar. La Convención sobre Humedales, conocida como la Convención de Ramsar, es un tratado ambiental intergubernamental establecido en 1971 por la UNESCO, que entró en vigor en 1975. Proporciona la base para la acción nacional y cooperación internacional con respecto a la conservación de humedales y el uso racional y sostenible de sus recursos (ver www.Ramsar.org).

128 OIT-BID, 2020.

129 OIT, 2015.

130 OIT, 2018.

131 Existen recomendaciones de los órganos de control al respecto de estos convenios y pueden encontrarse en: OSB C169 y SD C169.

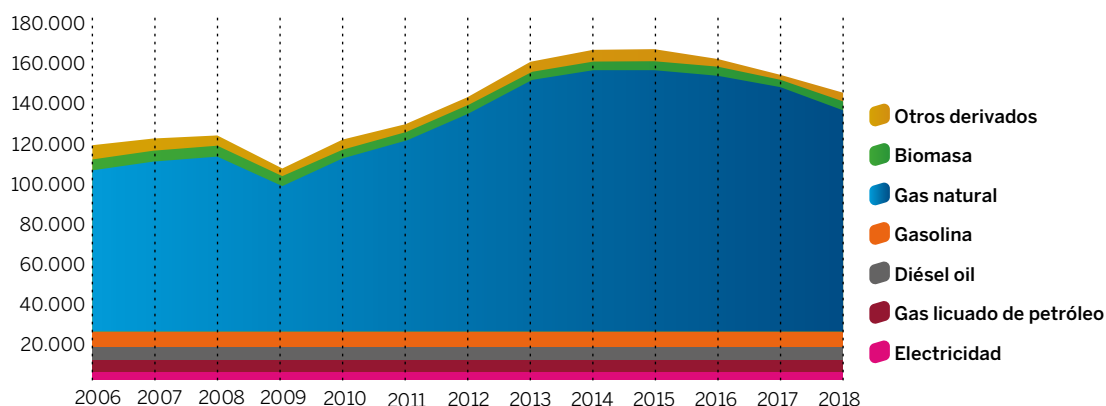
132 Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, 2016.

133 Cobija, Cochabamba, Guardia, Oruro, Potosí, Sacaba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Trinidad y Yacuiba, ONU Habitat, 2019.

Eficiencia y matriz energética

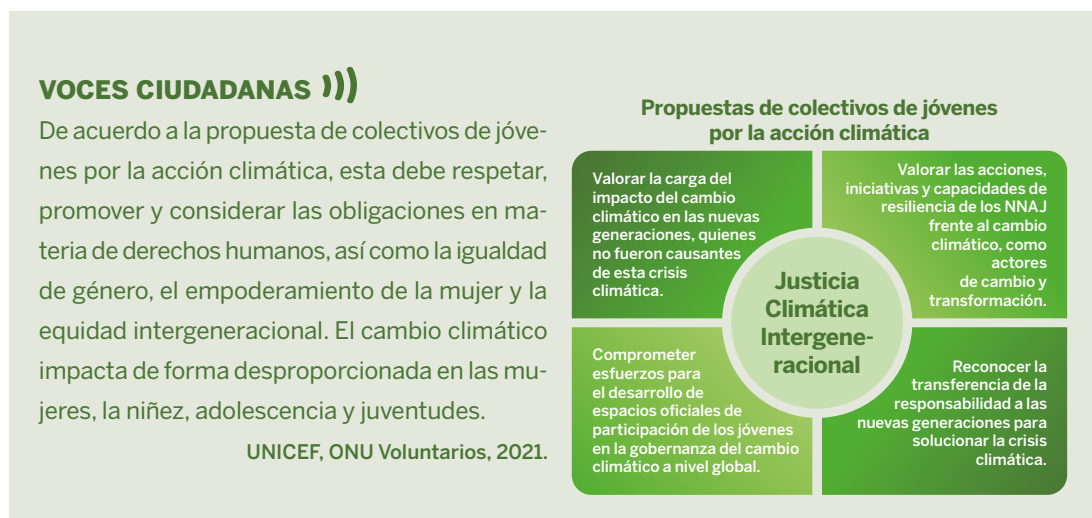
El gas natural constituye el principal recurso energético del Estado Plurinacional de Bolivia. La figura 3.16 revela que el sistema energético nacional es altamente dependiente del uso de combustibles fósiles.

FIGURA 3.16. Evolución del consumo total energético y fuente de energía en Bolivia (expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo, kBEP)



Fuente: Ministerio de Hidrocarburos, 2019.

En línea con la CND, la política energética del Estado Plurinacional de Bolivia está orientada a la diversificación de la matriz energética mediante el uso de fuentes renovables. Para ello se han impulsado diferentes proyectos de energías hidroeléctricas, solares, eólicas y geotérmicas que permiten el uso de fuentes limpias y renovables¹³⁴.



¹³⁴ Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2021.

OPORTUNIDAD DE ACCIÓN TRANSFRONTERIZA Y MULTIDIMENSIONAL EN EL GRAN CHACO AMERICANO

El Gran Chaco Americano es una frontera climática. Es el segundo bosque seco más grande del mundo con una extensión de 1.100.000 km² en Argentina, Bolivia, Paraguay y una parte de Brasil, donde existen grandes desafíos relacionados con el cambio climático, la deforestación y la falta de agua. Estos desafíos se encuentran invisibilizados por estadísticas de países de renta media y son de tal magnitud que requieren de una acción integral y transfronteriza.

En la región se presenta una coexistencia de modelos de desarrollo que privilegian el extractivismo y la ganadería extensiva con aquellos de índole comunitario y conservacionista. Estas diferencias potencian las inequidades existentes que afectan principalmente a comunidades indígenas y pequeños campesinos, y pueden ser una fuente potencial de conflicto. Esto se debe a que grandes y medianos productores agropecuarios y colonos, por su consumo de agua, reducen la cantidad disponible para los pueblos indígenas y pequeños productores asentados en la región. En el Gran Chaco Boliviano, la vulnerabilidad en niñas y mujeres es particularmente significativa, pues estas representan el 53,5% de la población, con un 43,4% de adolescentes y un 26,5% de mujeres jóvenes, entre los 20 y 34 años. Unos 2 millones de personas de los 9 millones que habitan el Gran Chaco están en riesgo de pobreza extrema por una mayor exclusión en el acceso al agua y a la seguridad alimentaria.

Ante estos desafíos, el Gran Chaco Americano representa una oportunidad de acción integral y de cooperación transfronteriza, donde las dimensiones de desarrollo, promoción de la paz y prevención del conflicto se pueden combinar con intervenciones de corte humanitario. Por sus particulares características, esta frontera climática requiere de acciones destinadas a generar datos e información que den visibilidad a las exclusiones y disparidades, al tiempo de construir resiliencia comunitaria y gobernanza inclusiva.

Biodiversidad y medio ambiente

Los índices de Biodiversidad¹³⁵ en Bolivia están empeorando debido al cambio climático, a las actividades antrópicas y al tráfico ilegal de vida silvestre. El índice de Resiliencia Bioclimática para Bolivia, que evalúa la capacidad de los ecosistemas para retener la biodiversidad frente al cambio climático, fue de hasta un 0,408 en 2015. Este índice ha venido disminuyendo desde 2005 a una tasa anual del -0,062%. Por otra parte, el Indicador Global de Compromiso con la Biodiversidad, que mide la conciencia pública y apreciación de la biodiversidad, fue de un 10,6 en 2018¹³⁶.

• • • • •

135 Disponibles en: <https://bipdashboard.natureserve.org/SelectIndicator.html?iso=BOL®=SouthAmerica>

136 Disponible en: <https://unstats.un.org/sdgs/UNSDG/countryprofiles/BOL#goal-15>

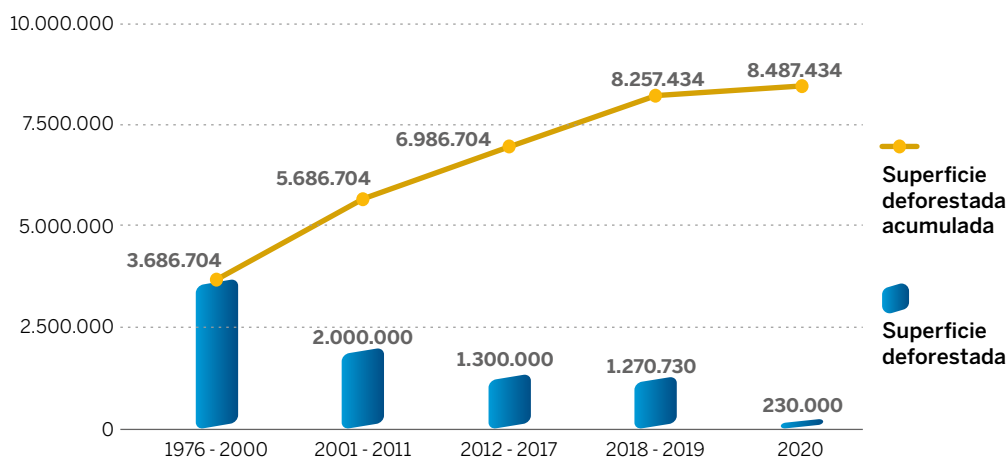
CUADRO 3.1. Áreas protegidas en Bolivia



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Servicio Nacional de Áreas Protegidas.

La deforestación se ha incrementado debido a varios factores:¹³⁷ el desmonte para justificar los derechos de propiedad agraria, en el marco del saneamiento de tierras¹³⁸; el incremento de la demanda de tierras por parte de capitales nacionales y extranjeros para el financiamiento de actividades agropecuarias en tierras forestales o zonas de bosques bolivianos; la construcción de obras de infraestructura caminera y energética; el desarrollo urbano sobre zonas de bosques y tierras forestales¹³⁹; la quema de bosques para realizar actividades agropecuarias y la tala ilegal y selectiva de bosques. La evolución de la deforestación¹⁴⁰ se presenta en la figura 3.17.

FIGURA 3.17. Evolución de la deforestación (en ha)



Fuente: FAO, 2021; Wilson Rocha.

137 Müller et al., 2014.

138 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2013.

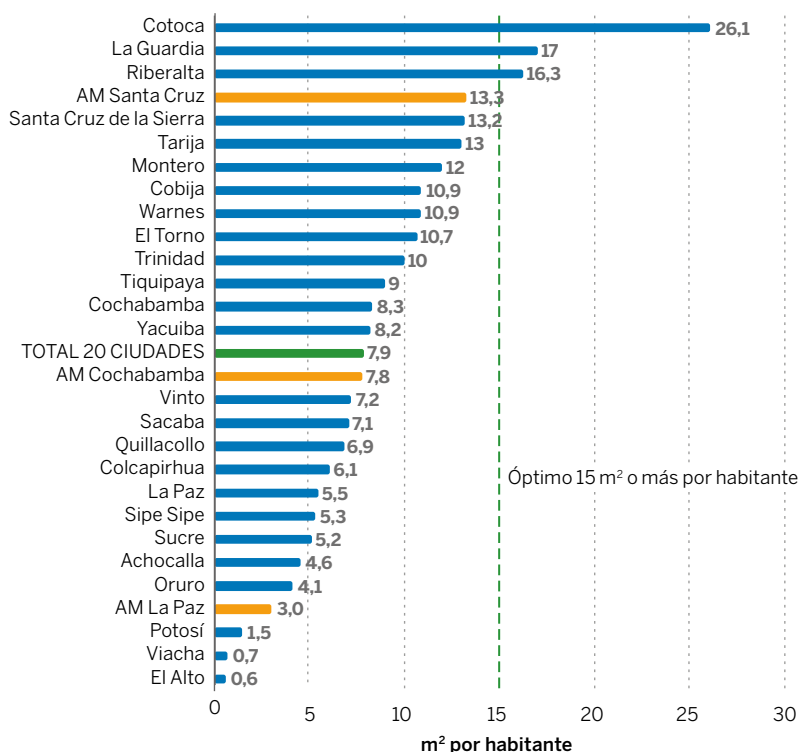
139 BOLFOR II, 2006.

140 Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2020.

Ciudades y cuidado ambiental

En Bolivia más del 70% de la población vive en ciudades¹⁴¹ y más del 70% de toda la contaminación atmosférica de las ciudades es generada por el parque automotor¹⁴², que se triplicó entre 2010 y 2020¹⁴³. El promedio de áreas verdes en las 20 mayores ciudades de Bolivia es de 7,9 m² por habitante, siendo el valor óptimo 15 m² por habitante¹⁴⁴. Además, las superficies de áreas verdes no están distribuidas de forma homogénea, siendo más escasas aún en zonas con mayores índices de necesidades básicas insatisfechas (figura 3.18).

FIGURA 3.18. Superficie de áreas verdes por habitante en ciudades



Fuente: ONU Habitat, 2020.

Actualmente, solo se cuenta con 26 municipios que han puesto en marcha políticas de gestión de residuos sólidos, lo cual representa el 7,7% del total de municipios a nivel nacional¹⁴⁵. Del 2005 al 2021 hubo un aumento del 90% en la generación de residuos sólidos (de 751.485 a 1.448.045 toneladas), con un 85% de origen

141 PNUD, 2015.

142 Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, 2016.

143 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

144 ONU Habitat, 2021.

145 Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2021.

domiciliario en 2021¹⁴⁶. Las ciudades de La Paz y Potosí, por ejemplo, no cuentan con sistemas de tratamiento de aguas residuales, mientras que Cochabamba, Tarija, El Alto y Sucre disponen de plantas de tratamiento con bajo desempeño ambiental¹⁴⁷. En cuanto a las huellas hídricas medidas para cinco ciudades, el sector residencial consume un 81% del total de agua utilizada por las ciudades, principalmente por el uso de inodoros, duchas y grifos. A los sectores comercial, industrial y público se les asocia, en promedio, el 11%, 4% y 4% del consumo, respectivamente¹⁴⁸. La huella ecológica per cápita de Bolivia ha tenido un aumento sostenido desde los años 70 ubicándose, en 2014, en 3.074 hectáreas. Esta evolución requiere de una estrategia de conservación que articule diferentes elementos como la promoción de áreas protegidas, la reforestación y lucha contra la desertificación, la conservación de los sistemas montañosos y la promoción de las ciudades con áreas verdes.

CUADRO 3.2. Incremento de residuos sólidos



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.

En síntesis, la emergencia climática y medioambiental está impactando a Bolivia en un contexto de contradicción entre tendencias extractivistas y contaminantes frente a aquellas que privilegian una relación más armoniosa con la naturaleza. Para buscar puntos de encuentro es clave el diálogo institucional entre los diferentes niveles de gobierno, sector privado y organizaciones indígenas, originarias campesinas. Y este diálogo tiene que incluir espacios de deliberación intercultural e intergeneracional. Es necesario que todas las voces sean escuchadas para lograr acuerdos sobre cómo disminuir la inequidad en el acceso a recursos como la tierra y el agua y hacer más resiliente al país ante el cambio climático.

• • • • •

146 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
147 Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2017.
148 CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, 2019.



D. PAZ: Gobernanza y cohesión social



Con la celebración de elecciones nacionales en 2020 y subnacionales en 2021, Bolivia reconfiguró la institucionalidad democrática y cerró un ciclo de intensos conflictos derivados de la crisis política e institucional acaecida entre 2019 y 2020. A pesar de estos avances, persisten desafíos importantes para la gobernanza y la convivencia social en materia de disminución de la polarización política, aumento de la confianza ciudadana en las instituciones y logro de acuerdos nacionales para avanzar en reformas institucionales y en la ruta de la reactivación postpandemia.

Gestión pública y conflictividad

El sistema político boliviano tiene una alta densidad de actores que le otorgan una dinámica particular, caracterizada por una activa participación de actores colectivos corporativos, tales como partidos políticos, organizaciones sociales y cívicas, naciones y pueblos indígena originario campesinos, sindicatos y confederaciones sindicales, y una ciudadanía con alta predisposición a la movilización social¹⁴⁹. Esta dinámica da forma a una política nacional en la cual los actores corporativos y la sociedad civil organizada son los principales decisores. Ya sea a través de mecanismos electorales o mediante la movilización social en las calles, dichos actores tienen capacidad para modificar la agenda de políticas públicas¹⁵⁰.

Así, la capacidad del Estado Plurinacional en la gestión de tensiones internas o externas derivadas de las demandas de organizaciones corporativas resulta crucial para la estabilidad política y la eficacia de la gestión pública. Las tensiones no resueltas frecuentemente dan lugar a medidas no concertadas y retrocesos en la implementación de leyes, normas y políticas públicas. En el contexto nacional actual, donde la reactivación económica, las reformas institucionales y las medidas innovadoras en materia de agenda social son prioritarias, la gestión institucional y eficiente de demandas y tensiones resulta crucial para avanzar en la senda del desarrollo.

La confianza de la población hacia las instituciones públicas es un elemento fundamental para acompañar la gestión pública. Dicha confianza ciudadana ha sido

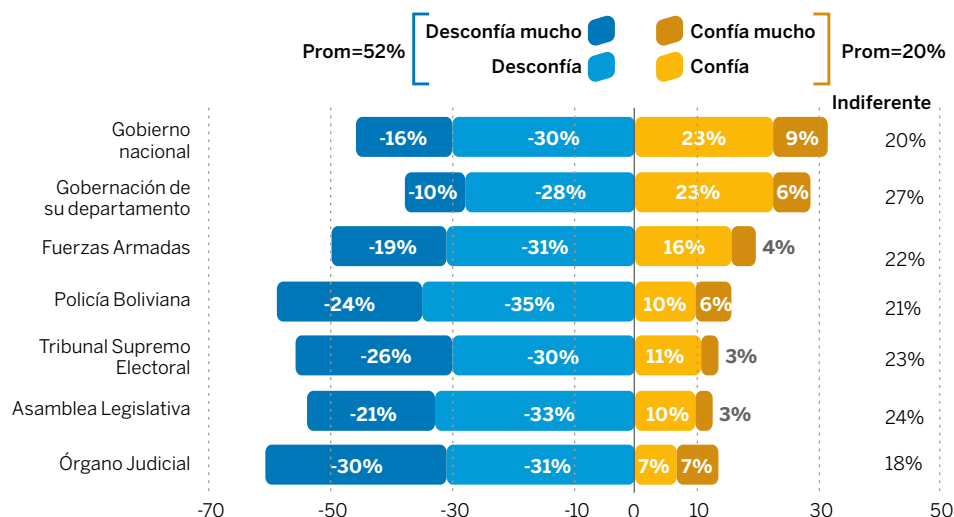
• • • • •

149 Paz Ballivián, 2021.

150 Huanca, 2021.

históricamente baja en Bolivia, según varios estudios.¹⁵¹ Mediciones más recientes¹⁵² dan cuenta que el promedio de confianza hacia los actores institucionales no supera el 20%; las instituciones que gozan de mayor confianza son el Gobierno nacional (32%) y los Gobiernos Departamentales (29%); en el otro extremo, con solo el 7%, aparece el Órgano Judicial.

FIGURA 3.19. Niveles de confianza institucional (en porcentaje según institución)



Fuente: Encuesta de opinión pública urbano-rural, noviembre 2021.

Entre las instituciones afectadas por la baja confianza pública están aquellas encargadas de la mediación Estado-sociedad, lo cual puede derivar en una reducción de su capacidad para canalizar y encauzar por la vía institucional las demandas y tensiones coyunturales y estructurales que enfrenta el país. Los niveles de confianza en la Asamblea Legislativa (13%), en el Órgano Electoral (14%), en los partidos políticos (13%) y en la Policía Boliviana (15%) son bajos.

La desconfianza no se manifiesta solamente desde la ciudadanía hacia las instituciones, sino también entre los diferentes niveles de gobierno. En los últimos años se han constatado dificultades para establecer espacios de diálogo entre actores institucionales, en particular, entre actores territoriales y actores nacionales. En este sentido, se observan desafíos relacionados con la restitución de canales de comunicación institucionales y espacios de diálogo que faciliten la coordinación de políticas, tanto en el ámbito intersectorial como, particularmente, entre niveles

151 Encuesta Latinobarómetro, Encuesta LAPOP y Encuesta Mundial de Valores.

152 Los datos se obtuvieron a través de dos estudios: i) Encuesta Flash sociopolítica; encuesta de opinión pública por vía telefónica, con una muestra aproximada de 1.000 casos distribuidos en los 9 departamentos del país, con alcance urbano y rural, una representatividad del 95% para un margen de error de +/- 3%, realizada entre el 2 y el 9 de mayo de 2021 (ONU Bolivia, 2021) y; ii) Encuesta de opinión sociopolítica realizada en hogares, con 2.500 casos distribuidos a nivel nacional, urbano y rural, con una representatividad del 95% y un margen de error de +/-1.96%, realizada entre el 12 y 20 de noviembre de 2021 (ONU Bolivia-FES, 2021).

de gobierno y con la sociedad civil, lo cual resulta clave para abordar una gestión pública con eficacia y basada en acuerdos amplios¹⁵³.

La polarización política tiene como antecedente un proceso de polarización social y territorial de larga data, en el que los clivajes regionales y étnicos predeterminan las interpretaciones sobre la realidad del país y sus desafíos, y sobre la orientación del desarrollo y la construcción del Estado. Las identidades regionales, políticas¹⁵⁴ y étnicas¹⁵⁵ operan en el discurso y en la práctica como condiciones de inclusión y/o exclusión.

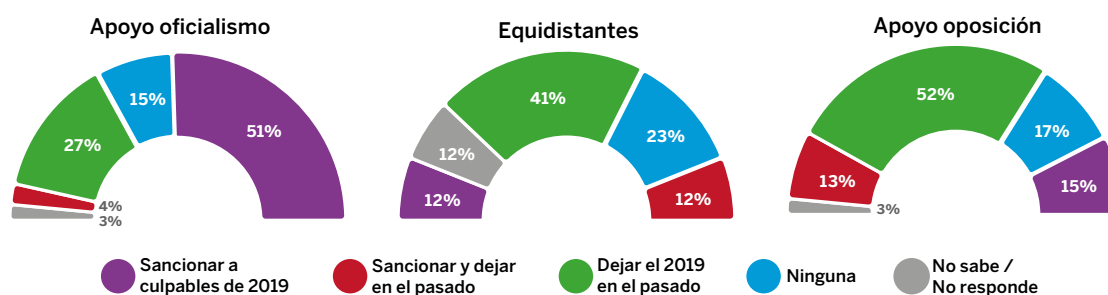
VOCES CIUDADANAS)))

81% de las empresas declara que la polarización política constituye un obstáculo para la concertación de medidas económicas. El sector Información y comunicaciones es el que se declara más afectado.

Fuente: Encuesta CEPB-EPES, 2021.

En el contexto nacional actual, la polarización política se traduce en las diferentes interpretaciones acerca de la crisis institucional de 2019 y opiniones sobre cómo procesar ese pasado. Al respecto, resultados de una encuesta de opinión (ver figura 3.20) indican que el 55% de las personas encuestadas opina que “los conflictos de 2019 no pueden olvidarse, se debe investigar qué sucedió y sancionar a los responsables”; en tanto que el 40% opina que “los conflictos de 2019 ya pasaron, ahora toca olvidarse de lo que sucedió y seguir adelante como país”. Esta polarización de opiniones se diluye, sin embargo, frente a una coincidencia mayoritaria de que en 2019 hubo acciones de violencia racista y vulneración de derechos ciudadanos. Desde la opinión pública se percibe que la polarización es responsabilidad de los políticos: 57% de la población encuestada opina que en el país “no hay polarización política, son los políticos los que nos dividen”.

FIGURA 3.20. ¿Se debe sancionar a los culpables de la crisis del 2019 o dejar la crisis en el pasado? (Encuesta de opinión, en % según afinidad política)



Fuente: Encuesta de opinión pública, urbano-rural, noviembre 2021 (ONU Bolivia - FES, 2021).

153 Faguet, 2017.

154 Mayorga, 2021.

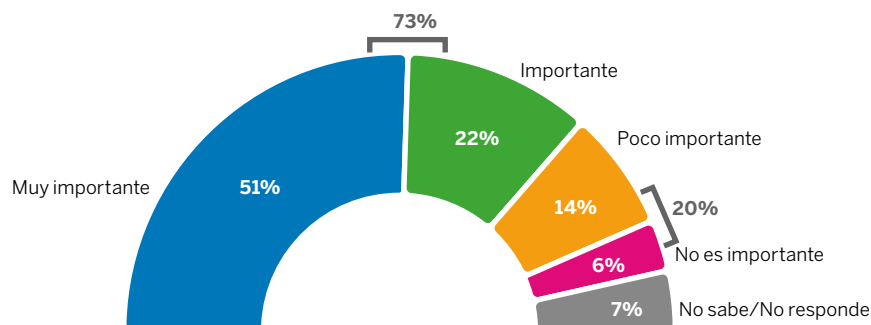
155 Molina, 2021.

Justicia y Estado de Derecho

Según un estudio de opinión pública¹⁵⁶, solo el 6% de la población consultada confía en el Órgano Judicial: 8 de cada 10 encuestados (83%) no confían en la justicia y la mayoría (60%) estima que la justicia no es independiente sino que depende de intereses políticos.

Sobre el mismo tema, a través del monitoreo de redes sociales¹⁵⁷ se observa un consenso sobre la necesidad de reformar el sistema judicial, ampliamente percibido como corrupto y nada transparente. De acuerdo con este informe, la narrativa que concita mayor atención en los actores es la “crítica a la corrupción de la justicia”, la cual está directamente relacionada con la narrativa menor de “el Tribunal Constitucional Plurinacional es corrupto”.

FIGURA 3.21. ¿Considera importante la reforma de justicia? (Encuesta de opinión)



Fuente: Encuesta de opinión pública, urbano-rural, noviembre 2021 (ONU Bolivia - FES, 2021).

Desde los colectivos de mujeres¹⁵⁸ se vincula la violencia de género con el acceso restringido a la justicia y el costo que esto genera, lo que devendría en una dinámica que estimula la impunidad. Las mujeres consultadas perciben que la situación de confinamiento ante la pandemia por COVID-19 empeoró la situación de vulnerabilidad de las mujeres y NNA, al haberse encontrado estas, muchas veces, encerradas con sus propios agresores. Frente a ello, las mujeres denuncian la dificultad en el acceso a la justicia ante los casos de violencia de género y plantean la necesidad de una transformación con un enfoque de justicia restaurativa y preventiva.

156 Encuesta realizada en hogares, entre el 12 y 20 de noviembre de 2021, con 2.500 casos distribuidos a nivel nacional, urbano y rural, con una representatividad del 95% y un margen de error de +/- 1.96% (ONU Bolivia - FES, 2021).

157 Monitoreo de medios digitales y redes sociales (Facebook y Twitter) realizado entre diciembre de 2020 y mayo de 2021 (PNUD, 2021).

158 Se realizaron una serie de tres consultas tipo conversatorio con referentes de organizaciones de mujeres y población LGBTQI+. Estas consultas fueron facilitadas por una experta en el tema y participaron un total de 65 referentes de movimientos de mujeres o LGBTQI+ y activistas independientes. Formaron parte de las mismas un total de 56 organizaciones de diversos lugares del país.

En 2021 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)¹⁵⁹ realizó una evaluación sobre la protección de los derechos humanos y la estabilidad democrática en Bolivia. Su informe enfatizó el análisis en la situación del sistema de justicia, seguridad pública y estabilidad democrática, racismo, violencia sexual y de género, y protesta social y libertad de expresión.

En materia de justicia se abordaron cuatro aspectos: i) la falta de independencia de la administración de justicia, identificada como un problema estructural que afecta la credibilidad y la confianza de la sociedad en su conjunto, así como la consolidación de un Estado de derecho. En la observación del funcionamiento del sistema se advirtió que operadores del sistema están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular, de sectores políticos. El carácter transitorio y rotativo de jueces y fiscales y el presupuesto restringido son percibidos como factores que han contribuido a la injerencia política, por lo que se considera que garantizar la independencia y la autonomía del sistema judicial requiere del fortalecimiento de sus capacidades económicas y humanas; ii) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para fines políticos; iii) el uso abusivo de la prisión preventiva. Se advirtió que pese al reconocimiento de estándares internacionales y pese a la propia normativa interna del Estado boliviano en cuanto a la restricción del uso de la prisión preventiva, se mantienen prácticas distorsivas que no son objeto de control jurisdiccional por parte de jueces; y iv) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia. Esa evaluación se inserta en el cumplimiento del mandato del GIEI de recomendar medidas de fortalecimiento institucional en materia penal¹⁶⁰.

VOCES CIUDADANAS)))

Dos tercios de la población califican como importante o muy importante avanzar en una reforma de la justicia, pero el 40% también considera que el Gobierno no tiene voluntad para esta reforma. Por ello mismo un tercio de la población estaría dispuesta a apoyar iniciativas ciudadanas independientes para la reforma de la justicia vía referéndum, aunque una amplia mayoría (70%) cree que las altas autoridades del Órgano de Justicia deben seguir siendo electas mediante voto popular. En promedio, la ciudadanía encuestada estima que la reforma a la justicia necesita un promedio de 1,8 años para ser implementada.

Fuente: Encuesta Sociopolítica ONU-FES, 2021.

Sobre estos elementos, el GIEI señaló que el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el

159 Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), 2021.

160 Ibid., pp. 258, 259, 260, 278, 279, 285.

Como parte de la respuesta gubernamental ante los problemas de justicia, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI) ha formulado una propuesta de reforma de la justicia a partir de seis ejes: i) balanceo del conflicto territorial en la distribución de jueces, fiscales y personal en el servicio de justicia; ii) Mejora en el acceso a la justicia; iii) Independencia del Órgano Judicial; iv) Uso de tecnologías de la información y comunicación para la mejora en la prestación de servicios de justicia; v) Desarrollo normativo de políticas públicas para el fortalecimiento de la justicia; y vi) Transparencia institucional. Los mencionados ejes tienen el propósito de lograr un sistema de justicia eficaz, eficiente e independiente, orientado a revertir los problemas estructurales en los servicios de justicia, tales como la retardación, que afecta hoy en día a más de 300.000 familias¹⁶⁴. Este proceso pretende lograr acuerdos mínimos con diferentes actores de la sociedad para avanzar de manera paulatina con la reforma a lo largo del actual periodo de gobierno.

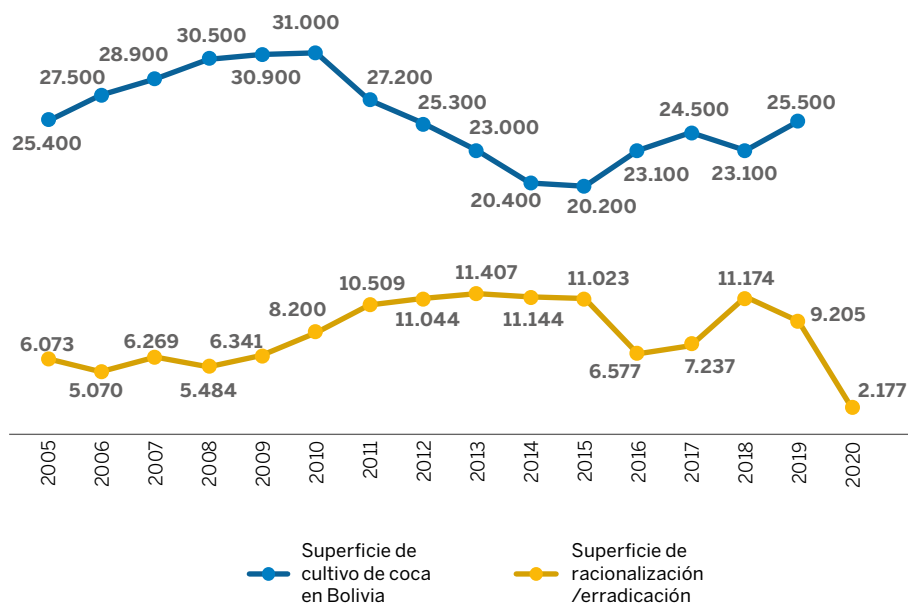
Narcotráfico, trata de personas, criminalidad y violencia

• • • • •

166 Disponible en: https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Bolivia/Bolivia_Informe_Monitoreo_Coca_2019.pdf. Este informe provee información sobre la cuantificación de la extensión del cultivo de hoja de coca en Bolivia. Además, brinda información complementaria suministrada por instituciones estatales acerca de los precios de la hoja de coca, su comercialización, racionalización/erradicación y otros temas relacionados.

muestran un 15% de incremento de la superficie con cultivos de coca con respecto a 2019¹⁶⁷, estimándose una superficie de 29.400 ha (62% en la región de los Yungas, 36% en el Trópico de Cochabamba y 2% en el norte de La Paz). Según el Informe de Monitoreo para 2020, de las 22 áreas protegidas existentes en Bolivia, 6 están afectadas –en mayor o menor medida– por los cultivos de hoja de coca. Así, el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Amboró, el Parque Nacional Carrasco, el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba y el Parque Nacional y Área Natural y de Manejo Integrado Cotapata registran un incremento en los cultivos de hoja de coca que oscila entre el 17% y el 117%. En total, la suma de la superficie con cultivos de coca dentro de las áreas protegidas fue de 454 ha para 2020, un 44% de incremento respecto a 2019 (incremento, por otra parte, registrado por segundo año consecutivo). El Gobierno ha dado prioridad a este tema tal como se refleja en el marco de las política en la materia, cuyos esfuerzos se ven reflejados en el marco del Principio de Responsabilidad Común y Compartida¹⁶⁸.

FIGURA 3.22. Superficie y reducción de cultivos de coca en Bolivia (en ha)



Fuente: Estrategia contra el Tráfico de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025.

Debido a su ubicación geográfica, el territorio boliviano es aprovechado para desarrollar actividades ilícitas relacionadas a la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, el tráfico de madera y especies silvestres¹⁶⁹, así como para la

167 Que, a su vez, evidencia un incremento de cultivos del 10% en relación al año anterior.

168 UNODC, 2016.

169 Véase: <https://ocindex.net/country/bolivia> y <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>

producción y tránsito de cocaína¹⁷⁰, a través de vías terrestres, fluviales y aéreas (avionetas ligeras), con destino final en países de la región y otros continentes¹⁷¹.

En cuanto a la trata, en los últimos años, la sociedad boliviana ha desarrollado una conciencia acerca del serio problema que representa este delito, agravado por la difícil situación socioeconómica en algunas regiones, principalmente en áreas fronterizas. Con relación al tráfico ilícito de migrantes, continúa siendo importante profundizar la sensibilidad de las autoridades y de la población civil respecto a este fenómeno delictivo¹⁷².

Si bien en Bolivia, los índices de criminalidad y violencia asociados a la delincuencia organizada (transnacional y nacional) son bajos¹⁷³ y las muertes violentas, en comparación a Sudamérica¹⁷⁴, son inferiores, en contadas ocasiones estos delitos se manifiestan de manera violenta, afectando la vida de los ciudadanos y la seguridad pública. Principalmente en medios de prensa y de manera reciente, se ha informado la presencia de grupos delincuenciales extranjeros que operan en Bolivia en coordinación con grupos delictivos de carácter nacional establecidos sobre bases y lazos de origen familiar, principalmente¹⁷⁵.

Gobernanza subnacional

Las dinámicas territoriales seguirán siendo fundamentales en la agenda política y en la orientación de las políticas públicas, dadas las prioridades nacionales para los próximos años. Entre estas hay que considerar el Censo Nacional de Población y Vivienda, declarado prioridad nacional a través del Decreto Supremo 4546, y cuya realización está prevista para el 16 de noviembre de 2022. El Censo es el referente principal para la elaboración de políticas públicas en general, y muy especialmente para determinar las transferencias fiscales a los Gobiernos Autónomos Subnacionales y la distribución de escaños por población en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

170 Véase: “Ministro afirma que en Bolivia no es rentable producir pasta base de droga por el precio de la coca”, Agencia de Noticias Fides (ANF), 12 de abril de 2022, en: <https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/ministro-afirma-que-en-bolivia-no-es-rentable-producir-pasta-base-de-droga-por-el-precio-de-coca-414751>. En cuanto a la cadena de producción de drogas, según los datos contenidos en la Estrategia Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025, el número de fábricas de elaboración de cocaína destruidas de 2016 a 2019 asciende a 9.151 y el número de laboratorios de cristalización de cocaína desmantelados fue de 202 durante el mismo periodo.

171 Véase: <https://bit.ly/3vOu5aS>

172 Véase: "Tráfico de personas: cómo opera la red que traslada a haitianos a través de 4 países rumbo a Chile (y que los pone en riesgo de explotación laboral y sexual)", Boris Miranda, BBC News Mundo, 7 de septiembre de 2020, en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54033973>

173 Reyes Rodas, Gabriela (2017).

174 Bolivia evidencia una tasa de 7 homicidios por cada 100 mil habitantes, siendo el promedio sudamericano de 21 por cada 100 mil (véase: Homicide Country Data | data UNODC).

175 Véase: "Narcos operan en Bolivia a través de clanes y emisarios de los cárteles", Wilson Aguilar, *Los Tiempos*, 6 de febrero de 2022, en: <https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20220206/narcos-operan-bolivia-traves-clanes-emisarios-carteles>

Los departamentos del eje metropolitano (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), que concentran aproximadamente el 70% de padrón electoral, persistirán como los principales espacios territoriales desde donde se despliegue y proyecte la política nacional. Las organizaciones sociales de base territorial, vecinal y sindical de El Alto, el Trópico de Cochabamba y la ciudad de Santa Cruz se articulan alrededor de identidades territoriales muy marcadas, cuya acción política influye de manera protagónica en la gobernabilidad territorial y nacional.

Con las elecciones subnacionales del año 2021, muchas entidades territoriales subnacionales han cerrado largos ciclos políticos –algunos de más de 15 años– dando lugar a nuevos actores políticos cuya capacidad territorial de gestión y orientación política es muy diversa. En este nuevo contexto territorial pueden existir oportunidades para impulsar otras formas de hacer política y para pensar modelos de desarrollo desde lo local, aprovechando constructivamente la apropiación social del territorio.

Sin duda, la resolución positiva de las tensiones territoriales será un desafío en el mediano plazo. Sin embargo, también es posible que la necesidad de abordar los efectos negativos de la pandemia y avanzar en la reactivación económica actúen como incentivos para disminuir la conflictividad territorial y aumentar la probabilidad de acuerdos y colaboración intergubernamental. Mantener la transferencia de recursos hacia los Gobiernos Subnacionales será determinante en este escenario, por lo que es previsible que la conflictividad regional se oriente en función a la capacidad macroeconómica del Estado.

En suma, la dinámica relacional entre actores estratégicos del Estado y la sociedad será clave para la generación de acuerdos en una coyuntura en la que el país requiere articular acciones para enfrentar la reactivación y recuperación postpandemia con una compleja agenda de reformas institucionales y diseño de políticas públicas. En los próximos años, por diseño normativo y constitucional, el país deberá revisar la distribución de los recursos fiscales que se asignan a los Gobiernos Subnacionales y también se deberá adecuar la representación por población en la ALP, lo que implicará que algunos departamentos del país ganen representantes y otros los pierdan. Los actores políticos nacionales y regionales deberán abordar un proceso de negociación sobre recursos de poder y financieros.

En este contexto, las expectativas de la ciudadanía podrían actuar como incentivo para el logro de acuerdos. El 93% de los participantes en una encuesta de opinión¹⁷⁶

• • • • •

176 Encuesta de opinión pública por vía telefónica, con una muestra aproximada de 1.000 casos distribuidos en los nueve departamentos del país, con alcance urbano y rural, una representatividad del 95% para un margen de error de +/- 3%, realizada entre el 2 y el 9 de mayo de 2021 (ONU Bolivia, 2021).

manifestaron estar de acuerdo con el inicio de un proceso de diálogo entre actores nacionales y subnacionales. Desde el punto de vista de la mayoría de las personas encuestadas (96%), los acuerdos entre Gobierno Nacional y Gobiernos Departamentales son muy necesarios, tanto como que el oficialismo y los partidos de oposición lleguen a acuerdos (90%), al igual que los comités cívicos y el Gobierno Nacional (88%). Más allá de cualquier consideración ideológica, estos resultados indican una amplia coincidencia en la necesidad del diálogo y la negociación. Sin embargo, solo la mitad de la población encuestada confía en la voluntad de las partes para llegar a acuerdos.



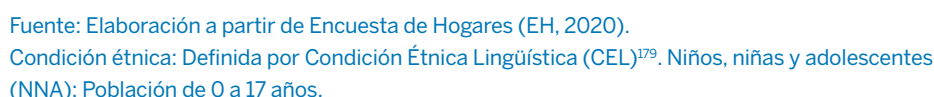
**PERSONAS CON MAYOR
VULNERACIÓN DE DERECHOS**

4

A continuación, se identifica a los grupos que sufren mayor afectación en sus derechos. Para tal efecto, se han combinado fuentes de información cuantitativas y cualitativas que permiten identificar contingentes excluidos en el progreso del desarrollo.

En 2020, las proyecciones indican que los niños, niñas y adolescentes (NNA) representan el 35% de la población boliviana¹⁷⁸. La combinación de dos factores estructurales (lugar de residencia y condición étnica) determina la situación de vulnerabilidad de este grupo.

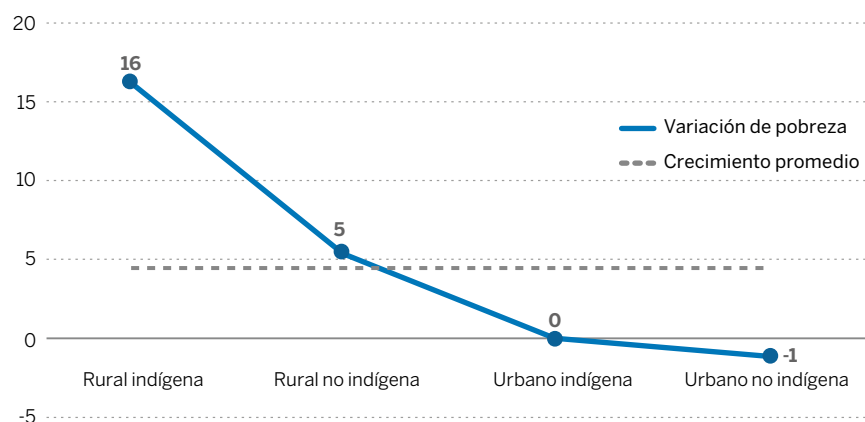
FIGURA 4.2. Incidencia de la pobreza en niños, niñas y adolescentes por subgrupos (%), 2020



DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021 63

Los NNA no solo presentan la mayor incidencia de pobreza, también han sido más afectados por la pandemia. La figura 4.3 evidencia que entre 2019 y 2020 los NNA indígenas del área rural experimentaron un incremento de la pobreza en más de 15%, un aumento tres veces mayor al promedio de la población total y cuatro veces mayor a NNA no indígenas del área urbana.

FIGURA 4.3. Variación en la pobreza en niños, niñas y adolescentes (NNA) por subgrupos (%), 2019-2020



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2020).
Condición étnica: Definida por Condición Étnica Lingüística (CEL)¹⁸⁰.

La brecha en el indicador de desnutrición crónica (baja talla para la edad), es casi el doble en el área rural que en el área urbana (12,2% versus 23,7%)¹⁸¹. Las niñas y adolescentes indígenas del área rural están más expuestas a la violencia y a las prácticas nocivas como el matrimonio u otras formas de unión, embarazo y maternidad temprana que sus pares de las ciudades.

Existen otros subgrupos de NNA invisibles en el promedio general. Por ejemplo, NNA con dificultad permanente¹⁸² reportan casi tres veces más acoso escolar (39% en 2019) que sus pares¹⁸³; por otra parte, NNA que sufren violencia en el hogar se ven expuestos a trabajos peligrosos. Del mismo modo sucede con niñas víctimas de trata y explotación sexual, niños viviendo en centros de acogida o en recintos penitenciarios, o adolescentes en conflicto con la ley¹⁸⁴.

180 Molina y Albó, 2006.

181 INE, 2019.

182 Defensoría del Pueblo, 2010.

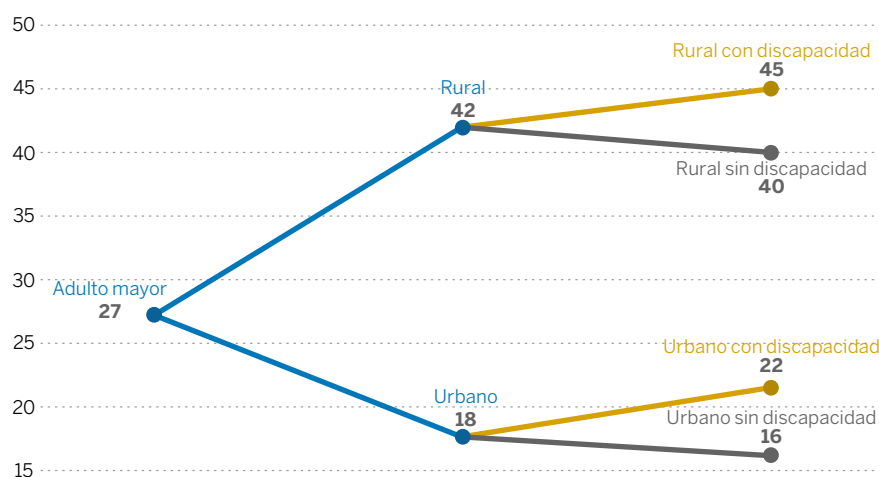
183 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI) y UNFPA, 2020.

184 UNICEF, 2021a.

B. Personas adultas mayores con discapacidad del área rural

En 2020, la población de personas adultas mayores de 60 años representaba el 11% del total¹⁸⁵. La figura 4.4 muestra que los adultos mayores con discapacidad del área rural tienen una probabilidad casi tres veces mayor de vivir en pobreza que sus pares sin discapacidad del área urbana.

FIGURA 4.4. Incidencia de pobreza de la población adulta mayor por subgrupos (%), 2019



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2019).

Persona con discapacidad: Considera a las personas con cualquier grado de dificultad permanente.

Adulto mayor: Población de 60 años y más. Coeficientes de variación inferiores al 20%.

La variable “con discapacidad” adquiere mucha importancia en este grupo, puesto que en 2019 se estimaba un total de alrededor de 750 mil personas con cualquier grado de dificultad permanente en Bolivia, de las cuales más de la mitad (54%) eran adultos mayores y la gran mayoría tenía como origen de la discapacidad la edad avanzada¹⁸⁶. Los hogares con personas con discapacidad tienen más probabilidades de experimentar privaciones materiales debido a mayores gastos en cuidados de salud. En 2019 se calculaba que esos gastos eran cuatro veces mayores respecto a los hogares sin un integrante con discapacidad¹⁸⁷.

185 Proyecciones de población, revisión 2020 (INE).

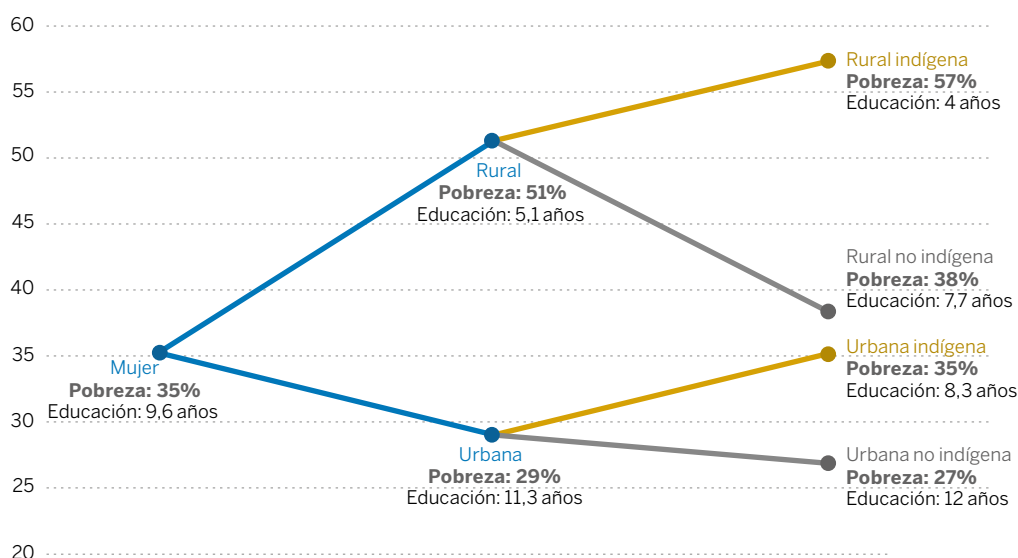
186 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI) y UNFPA, 2020.

187 Ibid.

C. Mujeres indígenas del área rural

En la figura 4.5 se observa que las mujeres indígenas del área rural presentan más del doble de probabilidades de vivir en pobreza respecto a las mujeres no indígenas del área urbana. Según datos de la Encuesta de Hogares 2019 del INE, las mujeres ganan por el mismo trabajo 26,5% menos que los varones, siendo este porcentaje mayor para las mujeres indígenas, afrobolivianas, migrantes y madres. Adicionalmente, las mujeres indígenas del área rural es el grupo que registra los menores niveles educativos con un promedio de cuatro años de escolaridad, indicador tres veces menor que una mujer no indígena del área urbana (12 años de escolaridad).

FIGURA 4.5. Incidencia de la pobreza y años promedio de educación en mujeres de 19 años y más por subgrupos (%), 2020



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2020).
Condición étnica: Definida por Condición Étnica Lingüística (CEL)¹⁸⁸.

Este grupo padece mayores tasas de mortalidad materna, así como diversas formas de violencia de género y restricción en el ejercicio de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En efecto, el 68%¹⁸⁹ de las muertes maternas ocurren en mujeres indígenas del área rural de Bolivia, quienes, además, tienen menores tasas de participación laboral y están mayoritariamente empleadas en el sector informal, al margen de cualquier sistema de seguridad social.

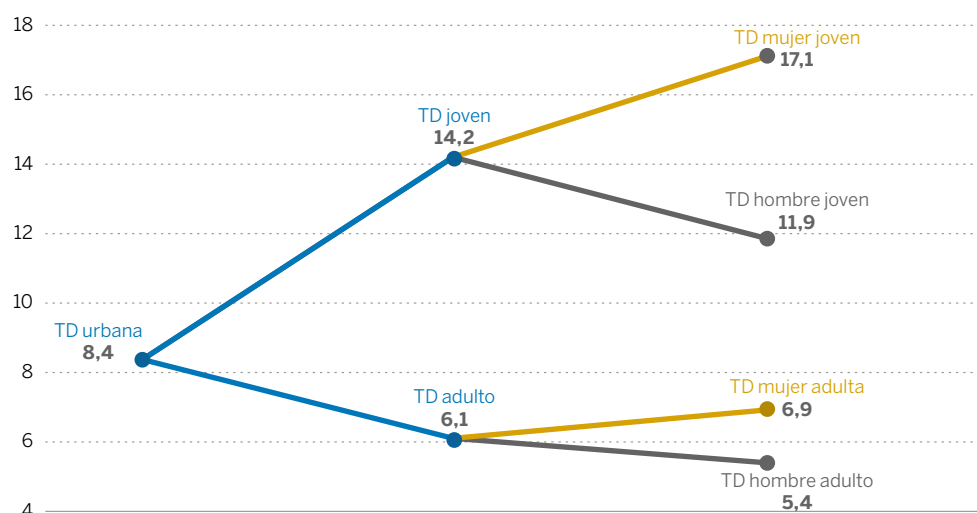
188 Molina y Albó, 2006.

189 Ministerio de Salud y Deportes, 2016.

D. Jóvenes mujeres y con empleo en el sector informal

Entre la población de jóvenes, las mujeres con empleo en el sector informal urbano experimentan las mayores desventajas en el mercado laboral. La figura 4.6 muestra que un joven enfrenta casi el doble de posibilidades de estar desocupado que un adulto, mientras las mujeres jóvenes registran una tasa de desocupación tres veces mayor a la de un adulto hombre. Estas cifras están vinculadas al “empleo frágil”, característica laboral del grupo joven, por la alta empleabilidad en trabajos menos protegidos, temporales o en el sector informal y bajos costos de despido asociados a la poca experiencia¹⁹⁰.

FIGURA 4.6. Tasa de Desocupación (TD) por subgrupos de edad (%), área urbana 4T/2020



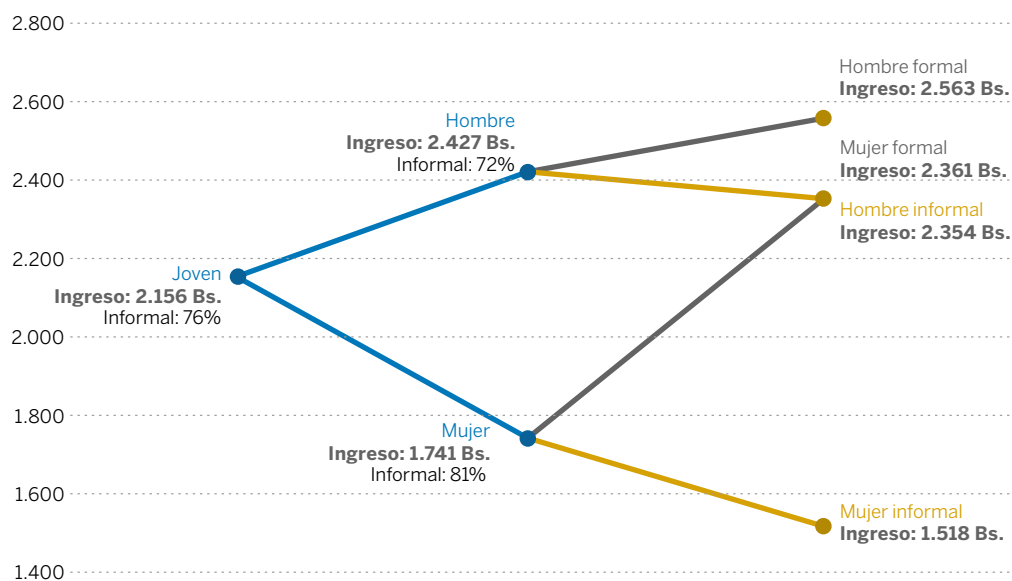
Fuente: Elaboración a partir de Encuesta Continua de Empleo (ECE - 4T/2020).

Joven: Población de 16 a 28 años.

Las mujeres jóvenes no solo enfrentan las mayores tasas de desocupación, sino además están sobrerrepresentadas en el sector informal (8 de cada 10 mujeres pertenecen a este sector), reciben las remuneraciones más bajas del promedio en el grupo joven (figura 4.7) y sobre ellas se concentra la mayor responsabilidad del cuidado familiar. Las medidas adoptadas como respuesta a la pandemia, el confinamiento y consecuente caída en la actividad económica, han afectado en mayor proporción a este grupo, particularmente en el sector informal, cuyos ingresos dependen del trabajo diario y presencial. En consecuencia, no solo es uno de los grupos que ha quedado mucho más atrás, también es uno de los más vulnerables frente al nuevo contexto.

190 OIT, 2020.

FIGURA 4.7. Ingreso en la ocupación principal (Bs.) y empleo en el sector informal (%) en el grupo joven por subgrupos, área urbana 4T/2020



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta Continua de Empleo (ECE - 4T/2020)
 Empleo informal: Empleo en el sector informal medido por productividad¹⁹¹,
 EMINPRO-INESAD. Joven: Población de 16 a 28 años.

E. Jóvenes en búsqueda de un empleo

Se puede distinguir dos grupos de jóvenes en el mercado laboral: los que ya están empleados y aquellos que se encuentran en la búsqueda de un empleo, ya sea por primera vez o con algo de experiencia. El primer grupo está ampliamente representado en el sector informal, mientras que el segundo presenta una probabilidad casi tres veces mayor de estar desocupado que un adulto¹⁹². Ambos grupos se han visto afectados de forma desproporcionada en la pandemia. Para los jóvenes que ya tenían un empleo, las mayores pérdidas de trabajo se han concentrado en los trabajadores con bajos niveles educativos y del sector informal. Por el contrario, la pérdida fue menor para aquellos con un empleo asociado a un mayor nivel educativo o terciario¹⁹³.

Para el grupo en busca de un trabajo, la pandemia también ha marcado una importante distinción entre los jóvenes según su nivel de instrucción. Este resultado

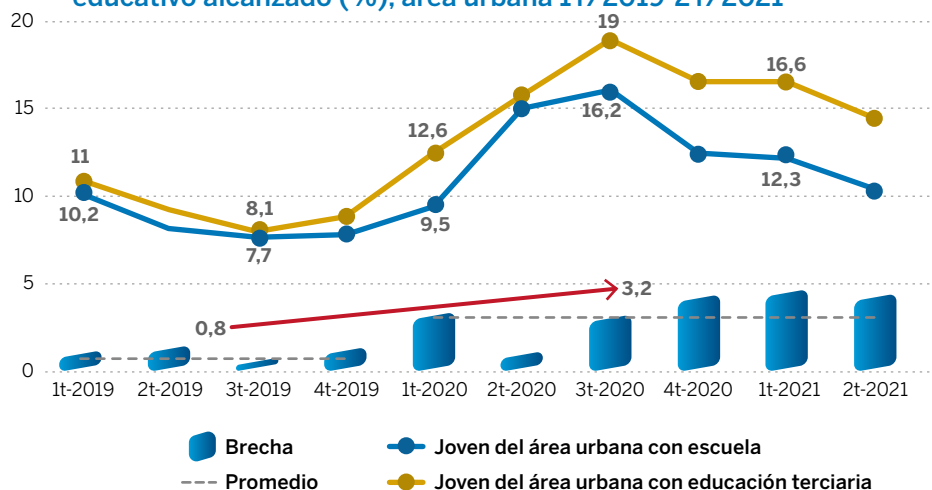
191 Considera a la población ocupada en unidades de baja productividad, con bajo nivel organizacional y escaso uso de capital y tecnología. Incluye a trabajadores por cuenta propia (excluyendo a los profesionales independientes), trabajadores familiares y empleadas del hogar, obreros y empleados, cooperativistas, socios, patrones o empleadores de establecimientos donde trabajan menos de cinco personas.

192 CEPAL, 2021; OIT, 2020.

193 CEPAL, 2021.

se ilustra en la figura 4.8. La brecha por nivel de instrucción, casi inexistente antes del confinamiento, se triplica en el periodo posterior y presenta los niveles más altos en el periodo de recuperación (a partir del último trimestre de 2020).

FIGURA 4.8. Tasa de Desocupación (TD) en el grupo joven por máximo nivel educativo alcanzado (%), área urbana 1T/2019-2T/2021



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta Continua de Empleo (ECE - 1T/2019-2T/2021).
Máximo nivel educativo alcanzado: Considera dos categorías: i) Escuela: Con máximo nivel educativo la primaria o secundaria; y ii) Educación terciaria.
Joven: Población de 16 a 28 años.

Este resultado se debe, en gran parte, a que la recuperación parcial del empleo ha sido impulsada y liderada casi por completo por el sector informal, concentrándose en mano de obra con menores niveles educativos, temporal e independiente¹⁹⁴. Los periodos prolongados de inactividad entre jóvenes resultan en un amplio descontento y desaliento en esta población, y además pone en riesgo la capitalización del “bono demográfico” por el que atraviesa el país que se extenderá hasta mediados del presente siglo¹⁹⁵.

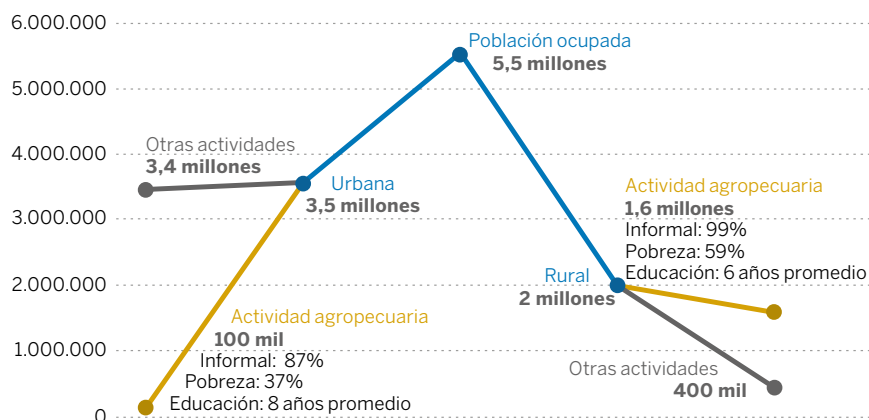
F. Trabajadores del sector agropecuario

En 2020 se registraban en el país un poco más de 5,5 millones de trabajadores, de los cuales cerca de 2 millones pertenecían al área rural. De este grupo de trabajadores rurales, casi el 80% (1,6 millones) tenía como actividad principal la agricultura, ganadería, caza, pesca o silvicultura; sectores altamente vulnerables a los efectos del cambio climático (figura 4.9).

194 CEPAL/OIT, 2021; OIT, 2020.

195 UNFPA, 2020.

FIGURA 4.9. Población ocupada de 14 años y más por área geográfica y principal actividad económica, 2020



Fuente: Elaboración a partir de Encuesta de Hogares (EH, 2020).

Empleo informal: Empleo en el sector informal medido por productividad¹⁹⁶, EMINPRO-INESAD.

La situación socioeconómica de los trabajadores del sector agropecuario es un reflejo de las deficiencias estructurales del área rural que refuerzan los ciclos de pobreza de sus habitantes, quienes mayoritariamente (99%) se emplean en el sector informal o de baja productividad. Se trata de trabajadores por cuenta propia, trabajadores familiares y empleados o empleadores de establecimientos pequeños (menos de 5 personas). En este grupo, 6 de cada 10 trabajadores se encuentran en situación de pobreza y tienen bajos niveles educativos (en promedio 6 años), con reducidos niveles de protección social y laboral.

G. Niñas y adolescentes embarazadas o madres

La Tasa Específica de Fecundidad en la Adolescencia (TEFA) correspondiente al tramo de edad de 15 a 19 años es de 71 nacimientos por cada mil adolescentes, siendo mayor en el área rural (109 nacimientos por cada mil adolescentes)¹⁹⁷. Para 2020, dicha tasa se tradujo en 39.999 nacimientos de madres niñas y adolescentes. Por otra parte, un 14,8% de las adolescentes del país ya son madres o han estado embarazadas; proporción que es seis veces mayor en el caso de adolescentes que solo alcanzaron el nivel educativo primario con relación a las adolescentes que alcanzaron la educación superior. Las adolescentes que pertenecen a pueblos indígenas tienen un mayor riesgo de cursar un embarazo temprano¹⁹⁸.

196 Considera a la población ocupada en unidades de baja productividad, con bajo nivel organizacional y uso de capital y tecnología. Incluye a trabajadores por cuenta propia (excluyendo a los profesionales independientes), trabajadores familiares y empleadas del hogar, obreros y empleados, cooperativistas, socios, patrones o empleadores de establecimientos donde trabajan menos de 5 personas (EMINPRO-INESAD).

197 Instituto Nacional de Estadística (INE), 2016.

198 Ibid.

EL COSTO DE LA MATERNIDAD ADOLESCENTE

El embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana afectan el proyecto de vida de las madres jóvenes de múltiples maneras. En comparación con mujeres que fueron madres en edad adulta, una mujer que fue madre en la adolescencia tiene menos probabilidad de alcanzar el nivel de educación universitaria (7% contra 18,8%, respectivamente). Perciben 28,1% menos ingreso; sufren mayores niveles de desempleo (5,7% contra 3,5%, respectivamente) y mayores niveles de inactividad laboral (33,7% contra 32,2%, respectivamente). El impacto agregado debido a la pérdida de ingresos, empleo y actividad laboral que representan los costos económicos del embarazo en la adolescencia y de la maternidad temprana para Bolivia asciende a USD 373,3 millones anuales, equivalente a 0,91% del PIB¹⁹⁹.

Las adolescentes bolivianas enfrentan limitaciones en el acceso a métodos anticonceptivos, así como falta de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva. Más del 60% de las mujeres encuestadas de entre 15 y 19 años por la EDSA en 2016 no sabían dónde acudir para obtener un método anticonceptivo, situación que puede tener su origen en la falta de servicios de salud adaptados y amigables para adolescentes y jóvenes. Las niñas embarazadas y niñas madres están sujetas a múltiples actos de discriminación y violencia social estructural. Por otro lado, el acceso a anticonceptivos por parte de niñas y adolescentes menores de 15 años es cuestionado socialmente y en el sistema público de salud. El 46,1% de las adolescentes casadas o unidas que no desean tener hijos o más hijos no usan ningún método anticonceptivo: este dato es el doble que el de las mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años, y tres veces mayor que el de las mujeres de entre 25 y 39 años²⁰⁰. El 13,8%²⁰¹ de las muertes maternas en el país ocurren en mujeres menores de 19 años.

En el periodo 2017 al 2021, según el Sistema Nacional de Información en Salud y Vigilancia Epidemiológica (SNIS-VE), 13.368 niñas de 14 años y menos realizaron controles prenatales en establecimientos públicos del país, mayormente con embarazos producto de violencia sexual, en los cuales, muchas veces, se obligó a la niña a ser madre. Asimismo, estos embarazos se producen con mayor frecuencia en los departamentos del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), así como en el área rural y en poblaciones indígenas. La población de niñas embarazadas y niñas madres está sujeta a múltiples factores sociales, culturales, económicos y religiosos que determinan la continuidad o no del embarazo, en franca vulneración de sus derechos.

199 UNFPA, 2022.

200 Instituto Nacional de Estadística (INE), 2016.

201 Ministerio de Salud, 2016.

H. Grupos de atención especial con las mayores privaciones en ejercicio de derechos

Existen poblaciones cuya realidad es estadísticamente invisible según la información disponible. Con la finalidad de hacer visibles estos colectivos, este apartado identifica de manera cualitativa aquellas poblaciones que ven afectados sus derechos de la manera más aguda.

Personas adultas, niños, niñas y adolescentes con discapacidad

El grupo de personas con discapacidad se ve expuesto a constantes limitantes en el ejercicio de sus derechos en todo el ciclo de vida. En la población de NNA con dificultad permanente (entre 4 y 20 años) que asistió a algún establecimiento educativo en 2019, se reporta tres veces más acoso escolar o bullying en la escuela que en sus pares sin discapacidad²⁰². En cuanto al derecho a la educación y en el mismo año, el 40% de las personas con discapacidad no contaba con ningún nivel de instrucción y solo un 7% tenía educación terciaria²⁰³. Asimismo, mostraban una mayor probabilidad de no asistir a la escuela (el mismo año solo un 13% de la población mayor a 4 años declaró estar inscrito en algún nivel educativo²⁰⁴).

Estos resultados se replican e influyen directamente en la inserción laboral de este grupo poblacional, que ve disminuidas sus posibilidades de conseguir mejores oportunidades laborales (solo un 30% de las personas con discapacidad estaban ocupadas en 2019²⁰⁵) y cuando las consiguen perciben ingresos muy inferiores a las personas sin discapacidad (en promedio, un ingreso inferior en hasta Bs. 1.500²⁰⁶). En conjunto, todas estas desventajas se traducen en mayores niveles de vulnerabilidad y de pobreza en este grupo, que en 2019 se estimaba en alrededor del 42%²⁰⁷. Por último, y en relación a la falta de información sobre este grupo –lo que se constituye en un problema fundamental para su identificación–, en 2019 el 75% de las personas con dificultad permanente no estaban registradas en el Sistema de Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad (SIPRUNPCD) y, por tanto, no contaban con un carnet que las acredite como discapacitadas²⁰⁸.

• • • • •

202 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI) y UNFPA, 2020.

203 Ibid.

204 Valores referenciales con coeficiente de variación mayor a 20% (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, MJTI, y UNFPA, 2020).

205 Ibid.

206 Ibid.

207 Ibid.

208 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI) y UNFPA, 2020.

Niños, niñas y adolescentes que no viven en los hogares familiares

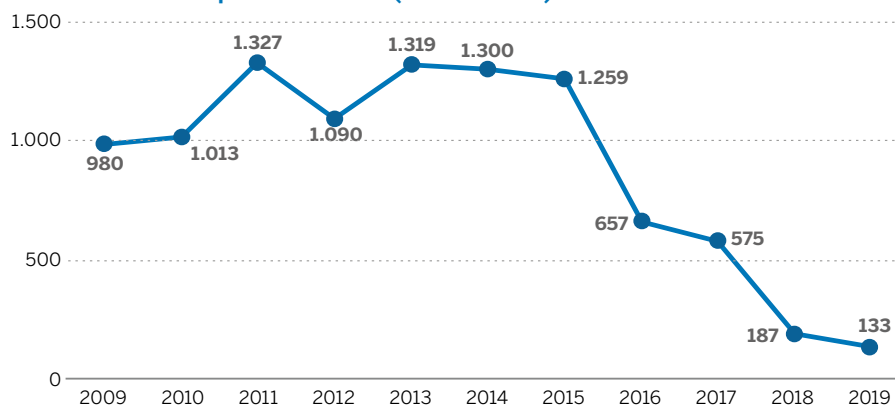
NNA en Centros de Acogida

Los Centros de Acogida (CDA) son un espacio institucional definido por el Código Niño, Niña y Adolescente de 2014 para la internación excepcional y transitoria de personas menores de 18 años, buscando su protección cuando por alguna razón no pueden vivir en sus familias por razones de orfandad, embarazo adolescente, discapacidad o disfuncionalidad familiar. Según datos de un estudio reciente, en Bolivia funcionan 180 CDA, la mayoría de ellos privados. En 2019 existían 1.307 NNA en CDA²⁰⁹ en una situación de limbo jurídico: no tienen familia y no podrán tenerla hasta que su situación no se defina legalmente.

Recintos penitenciarios

La existencia de menores que viven con sus padres en recintos penitenciarios es una característica particular del sistema penal boliviano. En 2019 se registraron 133 niñas y niños viviendo en centros penitenciarios de mujeres, en su mayoría menores de seis años, según datos publicados por el INE (figura 4.10). Estos niños y niñas asisten por lo general a centros educativos externos y pasan las noches con sus madres en el centro de reclusión donde ellas están privadas de libertad. La cantidad de niños y niñas viviendo en estas condiciones se ha reducido durante los últimos años. Este descenso marca un avance en el cumplimiento de la legislación y los convenios internacionales que protegen los derechos de los niños y adolescentes bolivianos para vivir en un ambiente seguro y adecuado a sus necesidades.

FIGURA 4.10. Niños de cero a seis años que viven con sus madres en un centro penitenciario (2009-2019)



Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario; Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y Lucha Contra las Drogas; INE.

209 UNICEF, 2020a.

Adolescentes internados con responsabilidad penal

En estudios realizados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI) y UNICEF sobre la problemática de los adolescentes en conflicto con la ley²¹⁰, se señala que en 2015 hubo 1.930 adolescentes con responsabilidad penal, cifra que subió a 2.302 para 2016. Proporcionalmente, estas cifras representan 22 y 25 por cada 10.000 adolescentes de 14 y 17 años, respectivamente.

En situación de calle

En las calles de las ciudades bolivianas vive una cantidad no cuantificada de niños y adolescentes, ya sea en compañía de sus padres o de manera independiente²¹¹. Existen deficiencias institucionales importantes en la cuantificación de este grupo. Estudios recientes señalan que los NNA que viven en situación de calle están expuestos a diversas formas de violencia, discriminación y exclusión estructural, no tienen derecho a una vivienda digna, a la educación, a la salud, ni oportunidades de trabajo que contribuyan a dejar su situación de calle. Existen una serie de limitaciones institucionales para proteger a esta población y brindarles apoyo sostenido para su rehabilitación y reinserción en sus entornos familiares, sociales o comunitarios.

Personas refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad

La población venezolana constituye, al menos desde 2020, el grupo de personas migrantes más numeroso que arriba al país cada año, tanto con intención de permanecer en Bolivia o en tránsito hacia terceros países, principalmente Chile y, en menor medida, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Según estimaciones de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)²¹², en diciembre de 2021 había 12.100 venezolanas y venezolanos en Bolivia con estatus migratorio regular, mientras que más de un 65% adicional se encontraba de manera irregular con vocación de permanecer en Bolivia o transitando hacia un tercer país. Se estimaba que esta cifra alcanzaría las 22.200 personas para fines de 2022. La situación de irregularidad migratoria limita el acceso a insumos y servicios esenciales, incluidos salud, alimentación y agua, educación y servicios de protección que brinda el

•••••

210 Ministerio de Justicia, 2013; Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJTI), 2018; UNICEF, 2013.

211 Los datos disponibles, que son parciales, indican que 31,3% de las personas en situación de calle tienen menos de 19 años (Viceministerio de Defensa Social; INE; Red Nacional, 2015).

212 Esta plataforma está conformada por casi 200 organizaciones (incluyendo agencias ONU, sociedad civil, organizaciones religiosas y ONG, entre otras) que coordinan sus esfuerzos bajo el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP, por sus siglas en inglés) en 17 países de América Latina y el Caribe. La Plataforma está coliderada por la OIM y ACNUR, respondiendo al pedido, en 2018, del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

Estado. Adicionalmente, la condición de irregularidad es un obstáculo para que la población refugiada y migrante pueda integrarse en Bolivia a través del acceso a oportunidades de generación de ingresos económicos sostenibles. En cuanto a las personas que permanecen en Bolivia, según datos recientes, un 49% de los venezolanos encuestados ya se encontraban viviendo en el país o tenían la intención de quedarse a residir, principalmente en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba.

La situación de las venezolanas y venezolanos en tránsito hacia terceros países, principalmente hacia Chile, continúa produciéndose en condiciones de alto riesgo para sus vidas e integridad física y mental. Durante 2021 al menos 15 personas refugiadas o migrantes murieron en la ruta que se inicia en Desaguadero, en la frontera norte entre Bolivia y Perú, y continúa con distintos itinerarios a través de Bolivia hasta ingresar a Chile, principalmente en el cruce entre la ciudad de Pisiga, en Oruro, hacia la ciudad de Colchane, ya en territorio chileno. En zonas de altura, con poca infraestructura y escasa presencia del Estado, las situaciones de tráfico de personas se agravan y, en muchos casos, afectan a familias con niñas, niños y adolescentes que ya llevan varios días de recorrido por tierra en condiciones precarias. Según observaciones regulares de las zonas de tránsito fronterizo Pisiga-Colchane, hasta 300 personas cruzan diariamente la frontera entre Bolivia y Chile, muchas veces de manera irregular. Estas personas son mayormente venezolanas, así como, en menor medida, colombianas y haitianas.

La capacidad del Gobierno de Bolivia para responder a las necesidades de la población refugiada y migrante es limitada. Si bien existen esfuerzos recientes para promover la integración socioeconómica de la población migrante, como por ejemplo la promulgación en el 2021 del Decreto Supremo 4576 de Regularización Migratoria –que permite la regularización migratoria excepcional de la población migrante en situación irregular– y la implementación por parte del Ministerio de Salud y Deportes de la Campaña Nacional de Adscripción de la Población Migrante al Sistema Único de Salud (SUS), todavía se requiere fortalecer la incorporación de la dimensión migratoria en políticas nacionales y locales en diferentes sectores. Asimismo, el acceso a la protección como refugiado enfrenta dificultades para gran parte de la población en movilidad humana, ya sea por restricciones de naturaleza legal o administrativa como por obstáculos de la práctica u operativos.

Víctimas de trata de personas

Los contextos de la migración en Bolivia, tanto internacional como interna, generan factores de vulnerabilidad en relación a la trata de personas. En cuanto a la migración interna, se señala la incidencia de factores culturales. Un ejemplo es la práctica de recibir a familiares, generalmente mujeres jóvenes provenientes de medios rurales, quienes desarrollan tareas en el ámbito doméstico sin recibir

remuneración (lo que se conoce como servidumbre costumbrista o padrinazgo). En lo que respecta a la emigración de bolivianos y bolivianas, se detectan efectos negativos en las familias y comunidades de origen, incluyendo una mayor incidencia de distintas formas de violencia y problemáticas sociales que afectan a grupos específicos, como el consumo de drogas y el embarazo adolescente²¹³.

La principal fuente oficial de información sobre trata de personas es el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Lucha contra las Drogas (OBCSD), sin embargo, al tratarse de un delito complejo que, además, no cuenta con protocolos específicos para la recolección de datos y en su registro se encuentra ligado al tráfico ilícito de migrantes, la información que se produce discrepa entre diferentes instituciones (Ministerio Público, Policía, organizaciones de la sociedad civil, INE y OBCSD).

Poblaciones LGBTQI+

La población LGBTQI+ es un colectivo que se halla en condiciones de alta vulnerabilidad en términos de discriminación, violencia y acoso, entre las principales vulneraciones de derechos²¹⁴ directamente relacionadas con su identidad sexual, su orientación y expresión de género. Pese a la existencia de la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, aún persiste la violencia “LGBTQI+fóbica” y otras formas de violencia contra esta población específica en diversos grupos etarios. La violencia que más sufren las poblaciones LGBTQI+ en espacios públicos es la verbal expresada en acoso callejero o en palabras con intención peyorativa, también se reconoce la existencia de violencia física en el espacio público, especialmente en lugares de recreación nocturna, situación que generalmente se relaciona con el alto consumo de alcohol. De acuerdo a UNFPA, el 37% de las personas encuestadas han sido víctimas de violencia física y un 39% han sufrido violencia psicológica en espacios públicos²¹⁵.

Si bien la normativa nacional, en el marco de la Ley 1152 del Sistema Único de Salud, garantiza el acceso a servicios de salud para toda la población sin exclusión o discriminación alguna, es patente la falta de protocolos de atención médica especializada a personas LGBTQI+ que respondan a sus necesidades médicas específicas, obligando a la población de diversidades sexo-genéricas a acudir a servicios de salud privados o, en última instancia, a automedicarse. Esta situación se convierte en un riesgo para la salud y la vida particularmente de la población trans.

Los prejuicios y estereotipos imperantes en la sociedad boliviana afectan las posibilidades de ingreso a empleos justos y dignos a la población LGBTQI+; el 28%

213 OIM, 2020.

214 UNFPA, 2018.

215 Ibid.

La población LGBTQI+ es igualmente la más afectada por el VIH y por el estigma y discriminación interseccional que vivir con VIH conlleva²¹⁶. Es así que, mientras la población en general aun presenta menos del 1% de prevalencia del VIH en el país, las mujeres transgénero por ejemplo presentan una prevalencia del VIH del 30,8%, y los hombres que tienen sexo con otros hombres (categoría epidemiológica que incluye hombres gays, bisexuales y otros) tienen una prevalencia del VIH de 25,7%²¹⁷. Similar desproporción se evidencia cuando se analiza las prevalencias de otras ITS, y también al corroborar que menos de la mitad de la población LGBTQI+ accede a los servicios de salud y prevención²¹⁸.

Como parte del ejercicio de identificación de los grupos dejados atrás en el ejercicio de sus derechos, la figura 4.11 muestra el número de personas identificadas en los acápite precedentes. En términos generales, existe una alta concentración de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en el área rural, particularmente cuando se evalúa su situación en términos de pobreza monetaria. Por otra parte, en el área urbana se concentra la mayor parte de la población joven en situación de vulnerabilidad.

| Grupo | Número |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Trabajadores del sector agropecuario rurales en pobreza | 915 mil |
| Mujeres adultas rurales indígenas en pobreza | 431 mil |
| NNA rurales indígenas en pobreza | 416 mil |
| Mujeres jóvenes urbanas con empleo en el sector informal | 349 mil |
| Jóvenes desocupados en el área urbana | 165 mil |
| Adultos mayores rurales con discapacidad en pobreza | 88 mil |
| N.º de nacimientos en la población adolescente | 40 mil |

• • • • •

219 La cuantificación de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad considera criterios interseccionales, por lo que la suma de la población de los grupos no es directa.

Este ejercicio permite una visualización del número absoluto de los grupos analizados revelando la globalidad del desafío en materia de ejercicio de derechos más allá del promedio. No obstante, cabe señalar que no incluye a las poblaciones cuyas realidades no se ven reflejadas en la media y que, por lo tanto, son estadísticamente invisibles en la información disponible. Esta carencia de información es una barrera importante para llegar a muchos de los grupos que enfrentan las privaciones más extremas y que han quedado mucho más atrás en el progreso, lo cual indica la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de la gestión de información, registros y otras herramientas que permitan abordar a estas poblaciones con base en evidencia sólida. De otra manera, es muy probable que estos grupos continúen excluidos del progreso global y sean incapaces de beneficiarse del mismo²²⁰.

J. ¿Dónde se encuentran las poblaciones vulneradas en sus derechos?

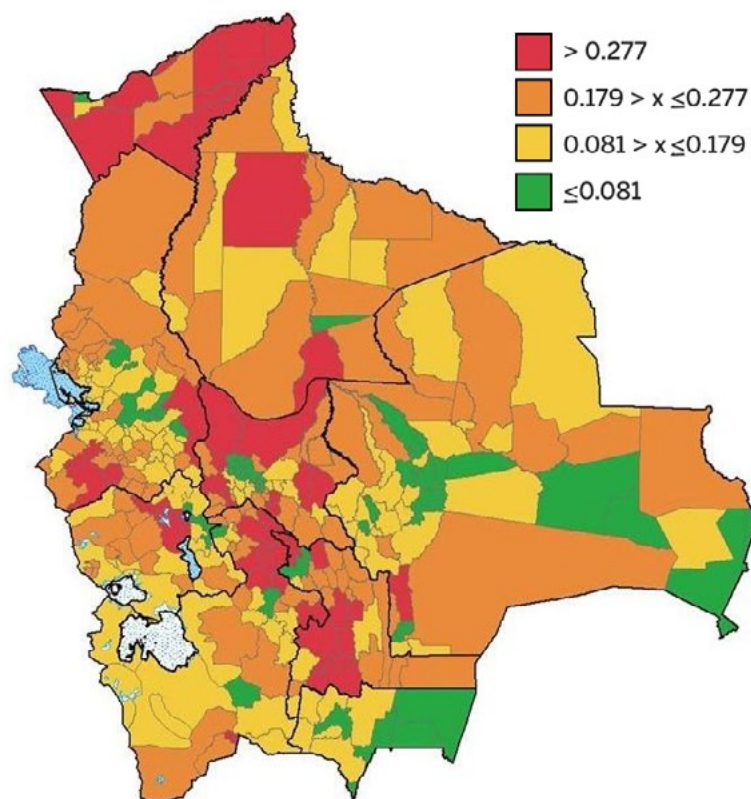
La disposición de información territorial desagregada y actualizada es una de las principales limitantes para el análisis geográfico de los grupos con mayor vulneración en el ejercicio de sus derechos. El último Censo Nacional de Población y Vivienda (2012) es la mejor fuente de datos para la identificación territorial de grupos vulnerables. A partir de esta información se ha estimado un Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) a nivel de hogares que considera tres dimensiones: i) la falta de poder y voz; ii) la falta de oportunidades y elección; y iii) la falta de recursos (cada dimensión con tres indicadores)²²¹. Los resultados a nivel nacional muestran que de los casi 2,8 millones de hogares en Bolivia (18% del total) medio millón se encontraba en pobreza multidimensional extrema (con carencias simultáneas en 4 o más de los 9 indicadores priorizados). Asimismo, un 54% de los hogares se encontraba en pobreza moderada (con carencias simultáneas en 1 a 3 de los indicadores priorizados). El mapa 4.1 muestra los resultados a nivel territorial a través del IPM para los 339 municipios del país. Si bien existe bastante variación entre municipios, es posible identificar las áreas geográficas con los mayores niveles de pobreza extrema (municipios en rojo).

• • • • •

220 UNDP, 2018.

221 Ante la carencia de una definición oficial de pobreza multidimensional en Bolivia, el SDSN-Bolivia estimó un IPM que priorizo 9 indicadores en 3 dimensiones de la pobreza: i) La falta de poder y voz, midiendo analfabetismo, disponibilidad de documento de identidad y acceso a comunicación (teléfono en el hogar); ii) La falta de oportunidades y elección: salud, embarazo adolescente y educación; y iii) La falta de recursos: acceso a agua potable, electricidad y saneamiento básico (Andersen et al., 2020).

MAPA 4.1. Incidencia de la pobreza multidimensional por municipio, 2012



Fuente: Sustainable Development Solutions Network (SDSN), 2020 (preliminar).

Concretamente, entre las áreas y municipios que presentan el mayor porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional se encuentran: i) el norte amazónico en los departamentos de Beni y Pando (los municipios de Exaltación, San Pedro y El Sena); ii) los valles interandinos de Chuquisaca (los municipios de Incahuasi, Azurduy y Poroma); iii) el norte de Potosí (los municipios de Ckochas, Tacobamba y San Pedro de Buena Vista); iv) el cono sur en Cochabamba (los municipios de Cocapata, Vila Vila y Alalay); v) el altiplano sur de Oruro y La Paz (los municipios de Callapa, Toledo y El Choro); y vi) el área del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS)²²². Sin embargo, debe notarse que en todos los municipios del país existen, en menor o mayor medida, hogares en situación de extrema pobreza. De hecho, muchos de ellos se encuentran en las ciudades principales y/o municipios de las áreas metropolitanas²²³.

222 Datos del Atlas Municipal de los ODS en Bolivia 2020 (Andersen et al., 2020).

223 Las ciudades de El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba y Sucre se encuentran entre los diez municipios con mayor número de hogares extremadamente pobre (Andersen et al., 2020).



**MATRIZ DE RIESGOS
MULTIDIMENSIONALES Y
ESCENARIOS PROSPECTIVOS**

5

A. Matriz de riesgos multidimensionales

Este ejercicio capta los riesgos multidimensionales existentes y potenciales que pueden afectar a la trayectoria de desarrollo de Bolivia, en particular, en las poblaciones más rezagadas. El análisis de riesgos arroja luz sobre los diversos elementos que amenazan los esfuerzos nacionales para el ejercicio pleno de derechos, la promoción de un crecimiento económico inclusivo y la reducción de los patrones de desigualdad, exclusión, privación de derechos y discriminación de las poblaciones más rezagadas.

CUADRO 5.1. Matriz de riesgos multidimensionales

| ÁREA DE RIESGO | DESCRIPCIÓN | PROBABILIDAD | IMPACTO |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensión político-institucional | La intensificación de la polarización política bloquea espacios de coordinación y diálogo interinstitucional e interterritorial. | Media | Ralentización de la gestión pública por falta de acuerdos sobre agenda de políticas. |
| | La ausencia de intermediarios creíbles y equidistantes dificulta la gestión de la conflictividad y su encauzamiento institucional y/o político. | Media baja | La conflictividad social escala con mayor rapidez y con mayor radicalidad. |
| | Las revocatorias de mandato adelantan el calendario electoral. | Media alta | Adelanto de procesos de campaña y de la incertidumbre política. |
| | La corrupción y el narcotráfico permean distintas instituciones del Estado. | Media baja | Desconfianza y distanciamiento de la población respecto a las instituciones; deterioro institucional y político. |
| | El Órgano Electoral Plurinacional no logra recuperar la confianza pública y es instrumentalizado para fines políticos particulares. | Media alta | Autoridades electas con baja legitimidad de origen; conflictividad y deterioro de la institucionalidad democrática. |
| | El Censo Nacional de Población y Vivienda genera conflictividad a nivel territorial y político en su diseño, relevamiento y resultados. | Alta | Potencial articulación de la conflictividad a nivel social, territorial y político; disputas por la redistribución de escaños en la ALP y por la distribución de recursos fiscales. |
| | La reforma judicial se realiza sin la profundidad necesaria. | Media alta | Persistencia de los problemas de acceso, probidad y dependencia en la justicia; deterioro de las expectativas ciudadanas; deterioro del Estado de Derecho. |
| Dimensión socioeconómica | Persistencia de déficits fiscales, agotamiento de reservas y déficits en cuenta corriente y capital en la balanza de pagos. | Media alta | Deterioro de las condiciones de vida y pérdida de estabilidad económica con conflicto social y espiral de desconfianza de los actores económicos. |
| | Retrasos en el desarrollo de sectores estratégicos para la captura de excedentes económicos (litio, energía, biodiésel, etc.). | Alta | Persistencia de un crecimiento bajo y potencial deterioro de la capacidad fiscal para financiar la agenda del desarrollo. |
| | Imposibilidad de acuerdos entre actores públicos y privados para la implementación de políticas que permitan atracción de inversiones nacionales e internacionales y la consecuente generación de empleo e ingresos. | Media alta | Pérdida de oportunidades de inversión productiva y menor capacidad de crecimiento de las actividades económicas e ingresos. |
| | Amenazas de desastres (sequías, inundaciones) con efectos sobre la producción agropecuaria nacional. | Alta | Desabastecimiento de productos agropecuarios con efectos sobre los precios de la canasta alimentaria, inseguridad alimentaria y afectación de condiciones de vida de pequeños productores de la economía campesina. |
| | Diferenciales de precios entre producción nacional de alimentos con productores de países vecinos. Desincentivo a la producción nacional. | Media | Impactos sobre cadenas de valor nacionales de producción de alimentos. |
| | Persistencia de la situación de excepción en la asistencia a clases debido a la pandemia. | Media alta | Afectación en el ejercicio de los derechos a la educación. Afectación de capital humano en el mediano plazo. |
| | Permanencia de la pandemia con la consiguiente presión sobre el servicio sanitario. | Media alta | Persistencia de desigualdades en el acceso y calidad del servicio de salud. |
| | Restricciones fiscales impiden el financiamiento en servicios sociales básicos. | Media | Eventuales estancamientos y/o retrocesos en la cobertura, acceso y mejora de la calidad de los servicios sociales básicos. |

(Continúa en la página siguiente)

por un proceso de agotamiento de los motores de crecimiento en el que la sostenibilidad de las políticas de desarrollo depende del impulso de nuevas formas de generación de excedente, pero también de la calidad y orientación de la inversión pública y social. El gran desafío es cómo financiar el desarrollo de manera sostenible. Probablemente, en el corto a mediano plazo este financiamiento sea a través de la emisión de bonos, préstamos, mejoras en la recaudación tributaria y ampliación de la base imponible, mientras que a futuro las fuentes podrían ser las actividades vinculadas a la agroindustria, pero también la innovación de los modelos productivos, aprovechando el capital humano del bono demográfico.

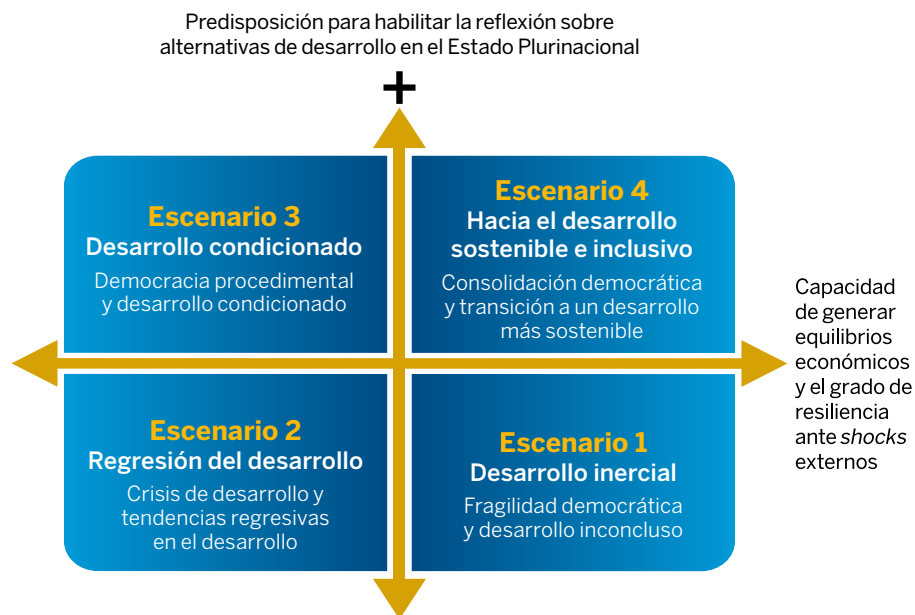
ii) *La predisposición de los actores para habilitar la reflexión sobre alternativas de desarrollo (variable político-institucional)*: Esta variable se refiere a la disposición y las capacidades políticas de actores públicos y privados para abrir espacios de debate sobre la orientación del desarrollo del país. Como ya ha sido mencionado, la desconfianza y la polarización son las características del contexto político y social del país; por tal razón, la capacidad que tengan las y los líderes, por una parte, y la población, por otra, para demandar y habilitar espacios de deliberación pública sobre la agenda de reformas institucionales será determinante de cara a la construcción de consensos mínimos sobre la orientación del desarrollo y la institucionalidad democrática para garantizar el ejercicio de derechos.

Los escenarios del desarrollo 2022-2025

El objetivo de los escenarios es proponer una imagen prospectiva, plausible y posible, sobre la orientación del desarrollo y la institucionalidad democrática para garantizar el ejercicio de derechos. Más que realizar predicciones, se trata de ir más allá de las visiones de corto plazo, para alentar el debate sobre los desafíos de mediano plazo y los derroteros posibles del desarrollo.

En la figura 5.1 se esquematizan los escenarios de desarrollo del país hacia 2025, cuya lógica se construye en un *continuum* que va de mayor a menor sobre las variables socioeconómicas y político-institucionales descritas más arriba. Cada escenario resulta de la diferente combinación de las mismas, lo que da por resultado cuatro escenarios posibles. Cabe notar que la complejidad de la realidad supera el esquematismo de cualquier esfuerzo analítico por más exhaustivo que este pueda ser.

FIGURA 5.1. Escenarios de desarrollo, 2022-2025



Fuente: Elaboración propia.

Escenario 1: Desarrollo inercial

Se trata de un escenario en el que una administración prudente y relativamente ortodoxa de la economía y del déficit fiscal permite continuar inercialmente con el enfoque de las políticas públicas, pero no existe disposición para activar espacios de deliberación sobre los retos estructurales del desarrollo. La generación de ingresos se centra en acciones relacionadas a la ampliación de la frontera agrícola, la minería y los hidrocarburos, y no se logran acuerdos transformacionales en el campo económico. El Estado sostiene una relación tensa con los actores sociales y políticos, primando dinámicas de imposición y bloqueo mutuo, con limitado espacio para el diálogo sobre los motores de crecimiento y fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Escenario 2: Regresión del desarrollo

Shocks externos (económicos, sanitarios o medioambientales) y una pobre gestión de los mismos llevan al país a una marcada recesión económica con pocas posibilidades de reencauzar los recursos hacia una senda de desarrollo inclusivo y sostenible. La conflictividad social y territorial se profundiza, generando dinámicas de polarización y confrontación de visiones de país y de desarrollo, en la que las posiciones de los actores más polares se endurecen y limitan cualquier forma de diálogo y reforma institucional debilitando la democracia.



Bolivia necesita de importantes niveles de recursos financieros para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque no existe una estimación precisa, el PDES 2021-2025 calcula que el país requiere, aproximadamente, USD 33.000 millones de inversión para financiar las prioridades de desarrollo en el siguiente quinquenio. Dichas prioridades dirigidas al desarrollo productivo, infraestructura y al sector social²²⁴. Las limitaciones de financiamiento y la reducción del espacio fiscal imponen importantes retos para hacer realidad las políticas programadas. A pesar de que el país ha logrado una gestión del financiamiento prudente en materia de deuda externa e interna, así como en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, debe enfrentarse a nuevas condiciones derivadas de la pandemia de COVID-19, y más recientemente, del conflicto bélico en Ucrania, que genera desaceleración económica mundial, interrupción de las cadenas de suministro e inflación. Todo ello puede afectar no solo la movilización de recursos de financiamiento, sino también los niveles de AOD. Este panorama se complejiza si se considera que Bolivia se encuentra entre el grupo de países graduados como países de renta media desde 2014, lo que implica condiciones menos ventajosas en endeudamiento multilateral y la recepción de AOD. La mejora de la movilización de recursos nacionales, la transparencia y la rendición de cuentas, así como el aprovechamiento del apoyo del sector privado serán importantes para que el país acelere el progreso hacia los ODS.

El financiamiento del desarrollo de Bolivia es uno de los temas prioritarios de atención en el futuro inmediato, dadas las cada vez mayores restricciones que enfrenta el país en materia de espacio fiscal, en un contexto que requiere de altos niveles de recursos, no solo para hacer frente a los desafíos pendientes en materia de logro de los ODS, sino para la reactivación y recuperación económica luego de la recesión sufrida en 2020.

En los años previos a la pandemia, la tasa de Inversión Pública se situó en más del 10% del PIB, una de las más altas entre los países de la región. No obstante, la insuficiencia de recursos y las necesidades de reforzar la protección social y el gasto social (salud, transferencias monetarias directas, entre otras) en el contexto de pandemia, llevaron a un severo ajuste al gasto de capital en 2020, con el consecuente impacto sobre el desempeño económico²²⁵. Desde el 2021, la inversión pública vuelve a tener una tendencia positiva de crecimiento, aunque en niveles mucho más bajos (comparables con los del periodo 2010-2013).

• • • • •

224 Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2021.

225 Fundación ARU, 2021.

Financiamiento interno: 61%

Financiamiento externo: 39%

Productivo: 53%

Infraestructura: 34%

Social: 11%

Multisectorial: 2%

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 prevé movilizar recursos por USD 33.000 millones de dólares en los próximos cinco años, dirigidos a los siguientes sectores: productivo (53%), infraestructura (34%), social (11%) y multisectorial (2%). Se estima que el 39% del financiamiento provendrá de fuentes externas y el 61% de recursos internos (figura 6.1).

Para el 2022, el Gobierno ha estimado una reducción de déficit fiscal del 9,7% al 8% del PIB y un aumento de la inversión pública en 25%. Estas previsiones se basan en la expectativa de un crecimiento del 15% de los ingresos tributarios, en razón de la recuperación económica, así como también al aumento de los precios internacionales.

| Ano | Dívida Interna (milhões de euros) | Dívida Externa (milhões de euros) |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2014 | 4.112 | 6.613 |
| 2015 | 4.540 | 9.428 |
| 2016 | 6.454 | 11.268 |
| 2017 | 10.356 | 12.172 |
| 2018 | 11.000 | 12.566 |

● ● ● DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021

FIGURA 6.3. Principales financiadores externos (en millones de USD, desembolsos a junio 2021)



FIGURA 6.4. Estructura de las Reservas Internacionales Netas (RIN), 2015-2021 (en millones de USD)



En el caso de la inversión extranjera directa, se observa que la misma ha registrado niveles notablemente bajos en comparación con otros países de la región. De hecho, entre 2019 y 2020 los flujos netos han sido negativos, lo que denota una salida de capitales hacia el extranjero.

Gráfico de barras e linhas mostrando o saldo da conta de resultados em milhões de dólares de 2014 a 2020. O gráfico inclui três séries: AOD Neta (barras azuis), IED Neta (linha amarela) e Remesas de trabalhadores recibidas (linha verde).

| Ano | AOD Neta | IED Neta | Remesas de trabalhadores recibidas |
|------|----------|----------|------------------------------------|
| 2014 | 675 | 555 | 1.178 |
| 2015 | 791 | 555 | 1.178 |
| 2016 | 697 | 302 | 1.392 |
| 2017 | 949 | 712 | 1.318 |
| 2018 | 729 | 302 | 1.318 |
| 2019 | 716 | -217 | 1.116 |
| 2020 | - | -1.048 | - |

La AOD destinada a Bolivia ha oscilado entre USD 675 millones y USD 949 millones anuales entre 2014 y 2019. Su destino en 2019 ha estado concentrado en infraestructura social (34%), infraestructura económica (30%) y salud (15%). En 2019, el BID fue la principal fuente de AOD, seguido por Francia, la Unión Europea y Alemania. Dada la lenta recuperación mundial, la AOD podría acentuar la tendencia decreciente observada en 2018 y 2019, con un impacto adverso en el limitado espacio de financiación nacional.

• • • • •

DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021 91



**OPORTUNIDADES PARA EL
LOGRO DE LA AGENDA 2030 PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN
EL MARCO DEL PDES 2021-2025**

7

entre el trabajo decente y el crecimiento económico, al tiempo que se catalicen las inversiones en infraestructura y en sectores emergentes como la economía naranja, el sector del conocimiento y los emprendimientos verdes con un enfoque de sostenibilidad y equidad social.

Entre los posibles aceleradores para profundizar la transformación económica y acelerar la consecución de los ODS figuran los siguientes:

- Creación de valor agregado, diversificación, innovación tecnológica, fortalecimiento de las cadenas de valor territoriales y sectoriales, como fundamento de la industrialización y comercialización, la sustitución de importaciones y eventual exportación de productos con valor agregado.
- Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a través de iniciativas destinadas a la transición de la economía informal hacia la formalización, lo que implica facilitar el acceso a la financiación, la mejora de las competencias y los mercados, incluyendo la promoción de pequeñas empresas de alimentos (OECAS y OECOM).
- Fortalecimiento del ecosistema productivo a través de las alianzas entre actores públicos y privados, orientadas a la coordinación entre gobierno, academia, sector privado, MIPYMES y socios del desarrollo.
- Mejora de la productividad agropecuaria sostenible para la seguridad y soberanía alimentaria, así como su articulación con sectores de transformación y generación de valor.
- Atracción de inversiones privadas tanto nacionales como internacionales, así como formas innovadoras de financiamiento bajo criterios de sostenibilidad, respeto al medio ambiente y cumplimiento del ejercicio del derecho al empleo digno orientadas al crecimiento de actividades intensivas en empleo, así como para el desarrollo de nuevos sectores estratégicos del país.

Gestión pública y promoción de la cohesión social²²⁹

El momento de inflexión que vive el país en cuanto a la recuperación económica y social, así como la ampliación de la agenda en reformas urgentes que fortalezcan la institucionalidad nacional dan cuenta de la necesidad de amplios acuerdos en todos los niveles. Este es un requisito para la consolidación de una “visión país” compartida y la consecuente apropiación de una agenda de desarrollo que afiance la cohesión social, la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Reconocidas estas condiciones, las prioridades nacionales en materia de reformas y reconstrucción de la confianza son una oportunidad para reforzar la unidad nacional, abordando los principales retos estructurales relacionados con mejora

• • • • •

229 Relación con los ejes del desarrollo PDES 2021-2025: Eje 5 (Meta 5.4); Eje 7 (Meta 7.1); Eje 9 (Meta 9.4); Eje 10 (Meta 10.1).

Los posibles puntos de entrada y aceleradores incluyen:

- ## Cambio climático y medio ambiente²³⁰

- Acciones de mitigación, adaptación y monitoreo del cambio climático, para la protección de sistemas de vida y sostenibilidad de las condiciones de bienestar de la población.
- Manejo integral y sostenible de áreas de conservación como herramienta fundamental orientada a la integridad de los ecosistemas naturales.
- Uso sostenible de la tierra y los recursos hídricos, mediante la promoción del uso de la tierra y el agua de manera inteligente desde el punto de vista climático para las regiones naturales más frágiles, incluyendo la explotación no maderable del bosque, el turismo ecológico y la cría de animales silvestres.
- Diversificación de la matriz energética atendiendo a una transición justa, necesaria para asegurar la protección de los derechos y medios de vida de los

● ● ● DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021



trabajadores en el cambio hacia una producción sostenible basada en energías limpias.

- Gestión de residuos y contaminación urbana, en atención a los procesos de acelerada urbanización y crecimiento no necesariamente planificado de las ciudades, regiones metropolitanas y áreas de influencia directa.

Referencias

1. Acevedo I., Castellani F., Lotti G., Székely M., Cota M. (2021). The Pandemic Is Increasing Inequality in Latin America. Impacto, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
2. Andersen L. E., Canelas S., Gonzales A., Peñaranda L. (2020). Atlas municipal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Bolivia 2020. La Paz: Universidad Privada Boliviana, SDSN Bolivia.
3. Azuara O., Bosch M., Mondragón M., Torres E. (2021). De la crisis a la oportunidad: El COVID-19 en el mercado laboral de América Latina y el Caribe. Observatorio laboral COVID-19, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
4. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2017). Bolivia resiliente frente a los riesgos climáticos (BO-LI188) – Perfil de Proyecto. La Paz: Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
5. BOLFOR II (2006). Avances de la Deforestación en Bolivia.
6. CELADE-CEPAL y Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población (2019). World Population Prospects, 2019.
7. CEPAL (2022). La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2021.
8. CEPAL (2021). Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2021.
9. CEPAL (2018). Guía metodológica: planificación para la implementación de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe, en: <https://bit.ly/3BYrorR>
10. CEPAL (2013). Mejor educación y empleo para jóvenes son clave para aprovechar el bono demográfico. En Notas de la CEPAL, N.º 75, en: <https://bit.ly/3BY2vwz>
11. CEPAL y OIT (2021). Políticas de protección de la relación laboral y de subsidios a la contratación durante la pandemia de COVID-19.
12. CEPAL y UNFPA (2009). Social Panorama of Latin America. New York.
13. CEPAL y Unión Europea (2017). El cambio climático, la agricultura y la pobreza en América Latina. Síntesis de políticas públicas sobre cambio climático. Santiago de Chile.
14. Coll Morales F. (2020). Economía naranja, en: <https://bit.ly/3bSiGAF>
15. Cornick J. (2016). Políticas de desarrollo productivo en América Latina. Organización Internacional del Trabajo (OIT).
16. Cruz-Aguayo Y., Fajardo J., Hernández Montenegro D., Fuertes N. (2021). El futuro del trabajo en América Latina y el Caribe: ¿Cómo afecta el COVID-19 a los niveles de desigualdad? Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
17. Defensoría del Pueblo (2010). Derechos Humanos de personas con discapacidad. La Paz, en: <https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/derechos-de-las-personas-con-discapacidad-cartilla.pdf>
18. ECOSOC (2022). Report of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) on human settlements statistics, en: <https://bit.ly/3bM54ad>

40. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2020). Informe Estadístico sobre el contrabando del 2020. La Paz, en: <https://bit.ly/3JOMLOo>
41. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) y Programa Mundial de Alimentos (2020). Análisis integrado de contexto de la seguridad alimentaria en Bolivia "ICA-Bolivia", en: <https://bit.ly/3pbucKt>
42. Ministerio de Economía y Finanzas (2022). Memoria de la economía boliviana 2021.
43. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (MJyTI), UNFPA (2020). Situación sociodemográfica de la población con discapacidad. La Paz.
44. Ministerio de la Presidencia e Instituto Nacional de Reforma Agraria (2020). Estado situacional de la propiedad agraria en Bolivia. La Paz.
45. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (2020). Tercera Comunicación Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia a la Convención de Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático. Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, en: <https://bit.ly/3dpelFK>
46. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) y Programa Nacional de Gestión de Calidad del Aire (PNGCA) (2018). Informe Nacional de Calidad Ambiental Gestión 2017. La Paz (inédito).
47. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) (2013). Memoria Técnica, Mapa de Bosques. La Paz.
48. Ministerio de Planificación del Desarrollo (2021). Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025. La Paz.
49. Ministerio de Planificación del Desarrollo (2020). Plan de Recuperación de Zonas Afectadas por Incendios en el Departamento de Santa Cruz. La Paz.
50. Ministerio de Planificación del Desarrollo (2014). Resultados del Índice de Riesgo Municipal con datos del Censo 2012. Banco Mundial, La Paz.
51. Ministerio de Planificación del Desarrollo (2013). Agenda patriótica 2025: 13 pilares de la Bolivia digna y soberana, en: <https://bit.ly/3bMjIhy>
52. Ministerio de Salud (2021). Bolivia: Estudio de medición del gasto en SIDA, 2017-2020. La Paz.
53. Ministerio de Salud (2016). Estudio Nacional de Mortalidad Materna. La Paz.
54. Ministerio de Salud y Deportes (2011). Resultados del Estudio sobre estigma y discriminación en personas que viven con el VIH en Bolivia.
55. Molina F. (2021). Racismo y Poder en Bolivia. FES-OXFAM. La Paz.
56. Molina R., Albó X. (2006). Gama étnica y lingüística de la población boliviana. Naciones Unidas. La Paz.
57. Müller R., Pacheco P., Montero J. C. (2014). El contexto de la deforestación y degradación de los bosques en Bolivia: Causas, actores e instituciones, vol. 100, en: <https://bit.ly/3pbxltU>
58. Naciones Unidas (2020). La aspiración más elevada: Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos.

- DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021 101

76. Reyes Rodas G. (2017). Violencia e Inseguridad en las tres principales ciudades de Bolivia. Wilson Center. Disponible en: <https://bit.ly/3QiHPDN>
77. Roberts R. (2020). Responding to protracted displacement using the Humanitarian-Development-Peace nexus approach: Scoping study, N.º 2020-12. UNRISD Working Paper.
78. Sachs J., Kroll C., Lafortune G., Fuller G., Woelm F. (2021). Sustainable development report 2021. Cambridge University Press.
79. Sánchez A. B., Torres B. (2020). Una recuperación verde y justa en América Latina y el Caribe: una perspectiva desde el mundo del trabajo. OIT.
80. Sánchez-Páramo C., Hill R., Gerszon D., Narayan A., Yonzan N. (2021). COVID-19 leaves a legacy of rising poverty and widening inequality. World Bank blogs.
81. UDAPE (2021). Informe nacional voluntario de Bolivia 2021, en: <https://bit.ly/3SEXIWB>
82. UDAPE (2020). Dossier de Estadísticas Sociales y Económicas, en: <https://bit.ly/3bNhpUS>
83. UDAPE, INE (2018). Migración interna en Bolivia. La Paz.
84. UDAPE (2016). Progresos en el acceso a fuentes mejoradas de agua e instalaciones mejoradas de saneamiento en Bolivia.
85. UN Women (2012). UN System-wide action plan for implementation of the CEB United Nations System wide policy on Gender Equal and the empowerment of women.
86. UNCTAD (2020). Informe sobre las inversiones en el mundo 2020. Ginebra.
87. UNFCCC (2015). Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, en: <https://bit.ly/3AcZmYp>
88. UNFPA (2018). Diagnóstico de la situación de las poblaciones TLGB con énfasis en mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero y transexuales femeninas en Bolivia. La Paz.
89. UNFPA (2021). Estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del sistema de justicia en las nueve ciudades capitales y El Alto. La Paz, en: <https://bit.ly/3BVAhCm>
90. UNICEF (2021a). Infancia, niñez y adolescencia en Bolivia: Avances y desafíos 2000-2020. La Paz.
91. UNICEF (2021b). Análisis de la situación de la niñez y de la adolescencia en Bolivia. La Paz (inédito).
92. UNICEF (2020a). Estudio sobre el estado de situación de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional. La Paz.
93. UNICEF (2020b). Protección de la niñez y adolescencia frente a crisis del COVID-19. La Paz, en: <https://uni.cf/3AbbbhK>
94. UNICEF y ONU Voluntarios (2021). Taller con Jóvenes por la Acción Climática. Ciudad de La Paz. 11-12 de diciembre. La Paz.
95. United Nations Development Program (UNDP) (2018). What does it mean to leave no one behind? A UNDP discussion paper and framework for implementation.

- ● ● DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021 103 ● ● ●

Recomendaciones Internacionales al Estado Plurinacional de Bolivia en materia de Derechos Humanos

| ALIMENTACIÓN (DESNUTRICIÓN) | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Periódico Universal (UPR) - (2019) | Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) - (2015) |
| <p>115.19 Seguir promoviendo la resiliencia al cambio climático y medidas de adaptación que contribuyan a garantizar el derecho a una alimentación y un nivel de vida adecuados, especialmente para los más vulnerables (Vietnam).</p> | <p>33. El Comité recomienda que el Estado parte:</p> <p>c) Asegure que las mujeres de las zonas rurales tengan acceso, en un pie de igualdad con los hombres y las mujeres que viven en zonas urbanas, a los servicios e infraestructura básicos, como la atención de la salud, la educación, el transporte público, la alimentación, el agua y el saneamiento, las oportunidades de generación de ingresos y la protección social mediante, entre otras cosas, la adopción de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, numeral 1 de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité.</p> |

DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021 105

DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021 106

| AGUA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Periódico Universal (UPR) - (2019) | Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) - (2015) |
| <p>115.126 Seguir intensificando los esfuerzos por aumentar la cobertura del suministro de agua potable y saneamiento en las zonas rurales (India).</p> <p>115.18 Actuar con determinación para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible, en particular en esferas como la gestión del agua, la salvaguardia de recursos naturales y la protección de las reservas naturales (Suecia).</p> <p>115.125 Continuar con los esfuerzos encaminados a garantizar el acceso al agua potable, entre otros medios instalando infraestructuras hídricas resilientes y aumentando la capacidad de almacenamiento de agua, teniendo en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Bangladesh).</p> | <p>c) Asegure que las mujeres de las zonas rurales tengan acceso, en un pie de igualdad con los hombres y las mujeres que viven en zonas urbanas, a los servicios e infraestructura básicos, como la atención de la salud, la educación, el transporte público, la alimentación, el agua y el saneamiento, las oportunidades de generación de ingresos y la protección social mediante, entre otras cosas, la adopción de medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4, numeral 1 de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité.</p> |

| TRABAJO (ACCESO AL EMPLEO) | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Periódico Universal (UPR) - (2019) | Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad - (2016) | Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) - (2015) | |
| <p>115.107 Ampliar el acceso al trabajo decente para todas las mujeres y aplicar medidas destinadas a aumentar su participación en el mercado de trabajo formal (Malasia).</p> <p>115.104 Continuar con el programa de empleo para los jóvenes para ampliar el acceso de los jóvenes al trabajo y la formación (Pakistán).</p> | <p>61. El Comité le preocupa la falta de implementación de las cuotas laborales y las altas tasas de desempleo de personas con discapacidad. Le preocupa también que las medidas para la promoción del empleo de personas con discapacidad no incluyan la capacitación continua y se enmarquen en el modelo de trabajo "especializado" y segregado. También le preocupa que, debido a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad y sus familiares, se desincentive a empleadores a contratar personas con discapacidad.</p> <p>62. El Comité recomienda al Estado parte que adopte una política de empleo de personas con discapacidad en donde se garantice el acceso al empleo, se promueva el trabajo en un mercado y unos entornos abiertos, inclusivos y accesibles, así como la equiparación de oportunidades y la igualdad de género, y que se suministren ajustes razonables para personas con discapacidad. También lo insta a implementar efectivamente medidas de acción afirmativa vinculantes para fomentar el empleo de personas con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado. Además, le recomienda que se guíe por el artículo 27 de la Convención para la implementación de la meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.</p> | <p>27. El Comité recomienda que el Estado parte:</p> <p>a) Promueva el acceso de la mujer al empleo formal y adopte un plan, con plazos establecidos, para aplicar la Recomendación núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal (2015) de la OIT, con miras a facilitar el acceso de la mujer a la economía formal;</p> <p>b) Adopte medidas, como las medidas especiales de carácter temporal, para promover el acceso de la mujer a los puestos de gestión, incluidos los llamamientos específicos para la promoción de la mujer y la formación en aptitudes de liderazgo impartida a las mujeres en todas las esferas de la economía, y realice campañas de sensibilización entre los empleadores sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo;</p> <p>c) Desarrolle un sistema de presentación de quejas confidenciales sobre la discriminación por motivo de sexo y el acoso sexual en el lugar de trabajo y vele por que las víctimas tengan acceso efectivo a mecanismos de reparación;</p> | <p>26. El Comité está preocupado por la persistente brecha entre los géneros en el empleo, en particular:</p> <p>a) El limitado acceso de la mujer al empleo formal, especialmente en puestos de gestión, en casi todos los sectores de la economía;</p> <p>b) La falta de medidas para proteger a la mujer contra el acoso y la discriminación en el lugar de trabajo;</p> <p>c) El número desproporcionadamente alto de mujeres que trabajan en el sector informal y las barreras de hecho que obstaculizan el acceso a la seguridad social; y</p> |

| Medio ambiente | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Periódico Universal (UPR) - (2019) | |
| 115.18 | Actuar con determinación para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible, en particular en esferas como la gestión del agua, la salvaguardia de recursos naturales y la protección de las reservas naturales (Suecia). |
| 115.71 | Adoptar políticas gubernamentales que creen un entorno seguro y respetuoso para la labor de los defensores de los derechos humanos, especialmente las defensoras mujeres y los defensores del medio ambiente (Bélgica). |

DIAGNÓSTICO COMÚN DE PAÍS BOLIVIA 2021

| MUJERES Y EMPLEO | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Periódico Universal (UPR) - (2019) | Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) - (2015) | |
| <p>115.179 Seguir aplicando su estrategia de género para empoderar a las mujeres en los sectores productivo, industrial y comercial, en consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Paquistán).</p> <p>115.107 Ampliar el acceso al trabajo decente para todas las mujeres y aplicar medidas destinadas a aumentar su participación en el mercado de trabajo formal (Malasia).</p> <p>115.178 Intensificar los esfuerzos destinados a promover la iniciativa empresarial de las mujeres en las zonas urbanas y rurales (Sudafrica).</p> | <p>27. El Comité recomienda que el Estado parte:</p> <p>a) Promueva el acceso de la mujer al empleo formal y adopte un plan, con plazos establecidos, para aplicar la Recomendación núm. 204 sobre la transición de la economía informal a la economía formal (2015) de la OIT, con miras a facilitar el acceso de la mujer a la economía formal;</p> <p>b) Adopte medidas, como las medidas especiales de carácter temporal, para promover el acceso de la mujer a los puestos de gestión, incluidos los llamamientos específicos para la promoción de la mujer y la formación en aptitudes de liderazgo impartida a las mujeres en todas las esferas de la economía, y realice campañas de sensibilización entre los empleadores sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo;</p> <p>c) Desarrolle un sistema de presentación de quejas confidenciales sobre la discriminación por motivo de sexo y el acoso sexual en el lugar de trabajo y vele por que las víctimas tengan acceso efectivo a mecanismos de reparación;</p> <p>d) Vele por que las mujeres y las niñas que son trabajadoras domésticas tengan acceso a recursos efectivos para presentar quejas sobre conducta abusiva y explotación por sus empleadores y vigile sus condiciones de empleo; y</p> <p>e) Realice un nuevo estudio sobre el trabajo infantil y eleve la edad mínima para el empleo a los 15 años en el caso de las niñas y los niños, de conformidad con el Convenio sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (núm. 138), de 1973, de la OIT.</p> | <p>31. El Comité recomienda que el Estado parte siga fortaleciendo sus programas de lucha contra la pobreza. También recomienda que el Estado parte establezca planes de crédito y financiación accesibles a las mujeres, prestando especial atención a las que viven en zonas rurales, las mujeres indígenas y afrobolivianas, las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad.</p> |

| JÓVENES Y EMPLEO | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Periódico Universal (UPR) - (2019) | |
| 115.106 | No cejar en los esfuerzos por reducir el desempleo, especialmente el de las mujeres y los jóvenes (Egipto). |
| 115.104 | Continuar con el programa de empleo para los jóvenes para ampliar el acceso de los jóvenes al trabajo y la formación (Pakistán). |

| NIÑAS EMBARAZADAS O MADRES | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Examen Periódico Universal (UPR) - (2019) | Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) - (2015) | Comité de Derechos Humanos - (2022) |
| <p>115.214 Seguir adoptando medidas para luchar contra el trabajo infantil y la pobreza de los niños, para lograr que todos los niños tengan acceso a servicios de educación y atención de la salud adecuados y para combatir el embarazo precoz (Portugal).</p> <p>115.141 Seguir adoptando medidas para aplicar la legislación vigente que garantiza la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas (Bélgica).</p> <p>115.148 No cejar en los esfuerzos por mejorar la atención de la salud materna y reducir la mortalidad neonatal (República Árabe Siria).</p> <p>115.150 Reforzar las políticas de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, especialmente las mujeres indígenas, entre otras vías mediante campañas informativas sobre planificación familiar y el acceso a la interrupción legal del embarazo (México).</p> <p>115.142 Finalizar cuanto antes la elaboración del Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2018-2020 y considerar la posibilidad de extender el Plan más allá de 2020; una vez ultimado el Plan, dotarlo de recursos suficientes para su aplicación efectiva (Finlandia).</p> <p>115.152 Despenalizar el aborto en todas las circunstancias y velar por que haya servicios de salud sexual y reproductiva disponibles y accesibles para todos (Eslovenia).</p> | <p>29. El Comité recomienda que el Estado parte:</p> <p>a) Refuerce las medidas para reducir la tasa de mortalidad materna y vele por la prestación de servicios obstétricos esenciales a las mujeres embarazadas, en particular en las zonas rurales y alejadas, y entre las indígenas y afrodescendientes;</p> <p>b) Imparta educación escolar apropiada a cada edad sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos y vele por el acceso asequible a los servicios y la información sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y los niños adolescentes, realice campañas de sensibilización sobre los métodos anticonceptivos modernos en idiomas indígenas, y aumente el acceso a anticonceptivos seguros y asequibles en todo el Estado parte;</p> <p>c) Modifique las disposiciones legales pertinentes a fin de despenalizar el aborto y vele por que este pueda practicarse de manera legal en casos de amenazas a la vida o la salud de las mujeres embarazadas, violación, incesto y defectos graves del feto, y garantice la aplicación debida de la sentencia del Tribunal Constitucional por la que se elimina el requisito de la autorización judicial para el acceso al aborto en casos de violación o incesto.</p> | <p>17. El Estado parte debe:</p> <p>a) Redoblar sus esfuerzos para garantizar el acceso efectivo y oportuno de las mujeres y niñas a la interrupción legal del embarazo, y revisar los efectos del marco normativo para evitar que las mujeres recurran a abortos clandestinos que pongan en riesgo su vida y su salud;</p> <p>b) Garantizar en la práctica que la objeción de conciencia no resulte una barrera a la interrupción voluntaria del embarazo legal, oportuna y segura, y que se respete la confidencialidad de la atención médica de las mujeres;</p> <p>c) Incrementar sus esfuerzos para prevenir los embarazos no deseados, especialmente entre las adolescentes, y para garantizar el pleno acceso a servicios adecuados de salud sexual y reproductiva en todo el país, en particular en zonas rurales;</p> <p>d) Redoblar sus esfuerzos de sensibilización y educación sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva.</p> |

Ratificaciones y firmas del Estado Plurinacional de Bolivia en materia de medio ambiente

| INSTRUMENTO | ESTADO | FECHA |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) | Firmado y ratificado | 04/10/1979 |
| Convención de Ramsar | Adhesión | 27/10/1990 |
| Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) | Firmado y ratificado | 03/10/1994 |
| Convenio de Viena | Adhesión | 03/10/1994 |
| Protocolo de Montreal | Adhesión | 03/10/1994 |
| Enmienda de Londres | Adhesión | 03/10/1994 |
| Enmienda de Copenhague | Adhesión | 03/10/1994 |
| Enmienda de Beijing | Adhesión | 04/09/2013 |
| Enmienda de Kigali | Adhesión | 09/10/2020 |
| Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) | Firmado y ratificado | 03/10/1994 |
| Convención Internacional de Lucha Contra la Desertificación (UNCCD) | Firmado y ratificado | 03/10/1994 |
| Convenio de Basilea | Firmado y ratificado | 15/11/1996 |
| Protocolo de Kyoto | Firmado y ratificado | 30/11/1999 |
| Protocolo de Cartagena | Firmado y ratificado | 22/04/2002 |
| Convención sobre la conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) | Firmado y ratificado | 01/03/2003 |
| Convenio de Estocolmo | Firmado y ratificado | 03/06/2003 |
| Convenio de Rotterdam | Adhesión | 18/12/2003 |
| Convenio de Minamata | Firmado y ratificado | 26/01/2016 |
| Tratado sobre los Recursos Fitogenéticos | Firmado y ratificado | 05/09/2016 |
| Acuerdo de París | Firmado y ratificado | 05/10/2016 |
| Protocolo de Nagoya | Adhesión | 06/10/2016 |
| Acuerdo de Escazú | Firmado y ratificado | 26/01/2016 |

ANEXO C

Fuentes de información

Las fuentes de información utilizadas incluyen:

- **Información secundaria del SNU:** Documentos de análisis, sistematización de evidencia y propuestas desarrollados por las Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas (AFP) en el marco de sus mandatos; informes de estado de situación sobre diversos temas relativos al progreso de ODS seleccionados (por ejemplo, análisis de la situación de la niñez, de la población, de la seguridad alimentaria, riesgos multidimensionales, informes interagenciales, evaluaciones de UNDAF, etc.).
- **Informes y documentos de fuentes externas:** Incluyen informes y series de análisis del Estado Plurinacional de Bolivia, socios del desarrollo e institutos de investigación.
- **Encuestas de hogares, salud y empleo, registros administrativos del INE:** Permiten una identificación del estado de situación de los hogares y personas de manera interseccional (pobreza, condiciones de trabajo, acceso a servicios, características étnico-lingüísticas, sexo, lugar de residencia, entre otros).
- **Atlas Municipal de ODS:** Base informativa desarrollada por el SDSN, socio del Sistema de Naciones Unidas en la cual es posible obtener una aproximación territorial de las condiciones de desarrollo de Bolivia a nivel municipal.
- **Reportes Voluntarios Locales de los ODS** de los municipios de Santa Cruz, El Alto y La Paz, desarrollados a través del Marco Global de Monitoreo Urbano de la Comisión Estadística de la ONU.
- **Otros instrumentos cuantitativos y cualitativos** de las Agencias, Fondos y Programas de las Naciones Unidas (AFP).

Consultas ciudadanas e información sobre percepciones de la población

- **Encuestas de opinión sociopolítica:** Desarrolladas por el SNU bajo la Iniciativa de Paz, son un instrumento valioso para la captura de percepciones ciudadanas sobre el rumbo del país, prioridades y aspiraciones, así como la valoración del desempeño político y de cohesión social en el país. En diciembre de 2021 se llevó a cabo la última encuesta de esta serie en colaboración con la FES, con 2.500 entrevistados de manera presencial en los 9 departamentos del país, y con representatividad urbano-rural, departamental y de ciudades capitales.
- **U-Report:** Plataforma de consulta ciudadana desarrollada por UNICEF que permite captar las opiniones de adolescentes y jóvenes sobre diversos temas de desarrollo. Se realizó una ronda especializada entre el 19 y 28 de enero de 2022 sobre aspiraciones y preocupaciones principales de este grupo etario en materia de desarrollo. Participaron en la consulta 806 personas. Esta información fue exclusivamente diseñada para el proceso de diagnóstico del DCP, cuya finalidad fue brindar evidencia que sirva de base para la elaboración del nuevo marco de cooperación del SNU 2023-2027. Se trataron las siguientes temáticas: valoración de la situación del país, valoración de la acción de los gobernantes, valoración de la situación de su entorno y la suya propia, aspiraciones y necesidades, y sentimiento de unidad entre bolivianos.
- **Diálogos digitales:** Herramienta de participación ciudadana a través de medios digitales aplicada en Bolivia bajo la Iniciativa de Paz utilizando la metodología Innovation Cell de DCO. El 1 de diciembre se llevó a cabo la primera ronda del este diálogo, en la cual participaron 259 personas: 144 mujeres y 115 hombres. Adicionalmente, se llevó a cabo una encuesta de control para la validación de los hallazgos con un tamaño de muestra de 600 observaciones con representatividad nacional. La pregunta que guio la consulta fue la siguiente: “¿Qué es lo que une a los y las bolivianos/as y qué es lo que los divide?”. El objetivo principal de esta dinámica fue instalar una conversación que genere reflexión en los participantes sobre lo que tenemos en común y lo que caracteriza a las y los bolivianos; sobre cuáles son las virtudes y los aspectos positivos que reconocemos en

nuestra nación, nuestros pueblos y diversas nacionalidades. Asimismo, se buscó averiguar sobre la predisposición de la población a embarcarse en un proceso de reencuentro y evaluar los posibles contenidos.

- **Grupos focales a grupos poblacionales seleccionados:** Instrumento que tiene el propósito de llegar a segmentos de la ciudadanía para captura de información cualitativa a profundidad.
- **Entrevistas y sondeos a grupos invisibilizados:** A través de trabajo de campo cualitativo con grupos poblacionales que no tienen acceso a tecnologías digitales, se encuentran privados de libertad, en situación de calle o en conflicto con la ley.
- **Otros instrumentos de consulta especializados de las AFP:** i) Encuesta a MIPYMES PNUD, 2020; ii) Encuesta a Hogares, PNUD, 2020; iii) Encuesta a Colectivos LGBTOI+ / UNFPA, 2018.



NACIONES UNIDAS
BOLIVIA

